

Tegucigalpa 24 de abril de 2017

**Dr. Pablo Saavedra Alessandri**  
Secretario  
Corte Interamericana de Derechos Humanos

**Ref.: Alegatos finales escritos,  
Ángel Pacheco León y Familia Vs Honduras  
CDH/13-2015**

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, nos dirigimos a usted y por su intermedio a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Honorable Corte”, “Alto Tribunal”, “Tribunal Interamericano”) en nuestra calidad de representantes de las víctimas en el caso de la referencia, con el fin de presentar nuestros alegatos finales escritos, de conformidad con el artículo 56 (1) del Reglamento de la Honorable Corte, así como con la resolución del Presidente de este Alto Tribunal de 15 de febrero de 2017<sup>1</sup>, y en cumplimiento con lo dispuesto por el Presidente de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en audiencia pública que se celebró durante el 57 Período Extraordinario de Sesiones, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 23 de marzo de 2017.

El presente caso fue puesto a su conocimiento en relación a la violación del derecho a la vida y derechos políticos, establecidos en los artículos 4 y 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, en perjuicio de Ángel Pacheco León; y los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, en perjuicio de los familiares de Ángel Pacheco León, estos son: su madre Andrea Pacheco López; su compañera de hogar Blanca Rosa Herrera; sus hermanos y hermanas: María Otilia Pacheco, Concepción Pacheco, José Pacheco, Francisco Pacheco, Santos Norma Pacheco, Marleny Posadas Pacheco, Blanca Nubia Pacheco, María Regina Pacheco, Elsa Jamilyeth Almendarez Pacheco, Jaqueline Lizeth Almendarez Pacheco y Jorge Alberto Almendarez Pacheco; sus hijos e hijas: Jimmy Javier Pacheco Ortiz, Miguel Ángel Pacheco Devicente; Cinthia Mirella Pacheco Devicente, Tania Melissa Pacheco López, Juan Carlos Pacheco Euceda y Bianca Gisselle Pacheco Herrera.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 15 de febrero de 2017, punto resolutivo número 14.

<sup>2</sup> Identificación de víctimas, Pagina 3 y 4 del ESAP.18 de marzo de 2016.

*... exigiendo justicia.*

Los representantes solicitamos a esta Honorable Corte que tenga por reproducidas todas las solicitudes, argumentos y pruebas, presentadas por esta representación a lo largo del litigio de este caso.

En razón de lo anterior, en este escrito únicamente presentaremos algunos argumentos adicionales en relación a aquellas cuestiones a las que se refiere al contexto, de especial trascendencia en el presente caso, la prueba pericial y testimonial presentada, así como sobre las que se centró la discusión en la audiencia pública celebrada ante este Alto Tribunal.

## **A. Hechos Establecidos Durante el Presente Proceso**

### **1. Contexto**

#### **(i) Situación General de derechos humanos en Honduras**

Desde antes del año 2001, fecha en la que ocurrieron los hechos del presente caso, Honduras vivía un estado alarmante de inseguridad pública y a la vez enfrentaba un delicado ambiente de polarización política, marcado por represalias al disenso político. Las expresiones de intolerancia política se marcaba por la persistencia de arraigados cacicazgos políticos locales por parte de las personas que ejercían funciones públicas, en algunos ocasiones actuaban al margen de la ley como grupos de choque para amedrentar a quienes consideran enemigos del proyecto político de su interés generalmente en alianza o utilizando como sicarios a agentes del estado en las fuerzas de seguridad. Así mismo era persistente el tráfico de influencias a lo interno del poder Judicial<sup>3</sup>.

La violencia política es algo poco extraordinario en Honduras. En los últimos periodos ha sido una constante el asesinato de personas que ejercen actividades políticas durante el año electoral. La polarización llega a niveles de confrontación, la violencia se ha institucionalizado, como lo declaró el Perito Rodil Rivera Rodil, ante este Tribunal el 23 de marzo de 2017.

El 12 de marzo, de este año 2017, se practicaron las elecciones primarias de los partidos políticos<sup>4</sup>. En el proceso primario se denunció, el mismo día de las

<sup>3</sup> Página 9 del ESAP.

<sup>4</sup> [http://www.tse.hn/WEB/elecciones\\_2017\\_EP/convocatoria\\_EP\\_2017.html](http://www.tse.hn/WEB/elecciones_2017_EP/convocatoria_EP_2017.html)

elecciones un enfrentamiento armado entre dos candidatos del Partido Nacional a la alcaldía de la Unión Copan que dejó varios heridos<sup>5</sup>. Al día siguiente de las elecciones se reportó el ataque a un activista del Partido Liberal<sup>6</sup>, y la muerte en condiciones confusas de tres activistas del movimiento Avancemos del Partido LIBRE.<sup>7</sup> Es decir los tres partidos sometidos al proceso denunciaron ataques. Nada ha cambiado desde la muerte de Ángel Pacheco. Las rivalidades políticas en Honduras se resuelven con balas.

La violencia política surge de los grupos y movimientos organizados, de los partidos políticos, ya sea que estén en el poder y quieran retenerlo, o cuando aspiran acceder al poder mediante vías no legítimas violentando las normas y los procedimientos establecidos en el marco del derecho.<sup>8</sup>

## (ii) Situación de impunidad

Honduras es un Estado que no funciona en toda su dimensión. Es decir, la cultura de la legalidad no ha alcanzado un adecuado desarrollo para minimizar o revertir tendencias de impunidad. El sistema político hondureño desempeña un papel muy estrecho con los poderes fácticos en el fomento de la impunidad, pero también con el sistema de partidos políticos y con una parte de la clase política. En Honduras nadie guarda prisión por crímenes políticos. Y nadie ha sido debidamente enjuiciado.

Según el último informe de la OACNUD sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la impunidad en el país “está en un nivel históricamente alto y es un factor clave de la continua violencia e inseguridad. En 2016, el 29% de las denuncias recibidas por la policía fueron remitidas al Ministerio Público.”<sup>9</sup> Además, conforme a un estudio de la Alianza para la Paz y la Justicia, solo 4 de cada 100 homicidios dan lugar a una condena.<sup>10</sup>

Durante los últimos años en Honduras, la seguridad con respecto al derecho a la vida se ha deteriorado significativamente, la cultura de la impunidad imperante por la

<sup>5</sup> Noticiero Hoy Mismo, 12 de marzo de 2017, Noticiero HCH. 12 de marzo de 2017.

<sup>6</sup> Denuncia interpuesta en el Cofadeh el 13 de marzo de 2017.

<sup>7</sup> <http://www.elheraldo.hn/sucesos/1052908-466/matan-a-tres-personas-dentro-de-taller-en-comayag%C3%BCela> Entrevista a Wendy Fúnez, candidata Diputada del Partido Libre, del movimiento FRP. 16 de marzo de 2017. <http://www.latribuna.hn/2017/03/14/matan-tres-personas-dentro-una-joyeria-comayagua/>

<sup>8</sup> [http://www.iudpas.org/pdf/Estu\\_InvestNacionales/InformeViolenciaPolitica.pdf](http://www.iudpas.org/pdf/Estu_InvestNacionales/InformeViolenciaPolitica.pdf)

<sup>9</sup> OACNUDH, Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, A/HRC/34/3/Add.2, 9 de febrero 2017, par.15.

<sup>10</sup> Ibid.

ausencia de medidas para que los responsables de abusos contra los derechos humanos fuesen procesados ha fomentado constantes espirales de violencia. Este panorama generalmente se agudiza cuando en los crímenes contra la vida se encuentran involucradas personas con poder político, económico y social<sup>11</sup>. La indefensión de las víctimas y sus familiares ante la situación de impunidad se destacó en el Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Arbitrarias y Sumarias, después de realizar una visita al país en Agosto de 2001. La Relatora concluyó que los autores de ejecuciones contra activistas sociales disfrutaban de inmunidad prácticamente de hecho debido a la condición social y contactos políticos<sup>12</sup>.

Las ejecuciones con visos políticos puede ser identificada desde la década de los años ochenta, cuando cientos de personas fueron asesinadas y desaparecidos por su convicciones políticas, práctica que continuó repitiéndose a largo de la década de los años noventa y todavía a la fecha se presentan casos similares y con el mismo patrón de impunidad.

La impunidad de facto como la que prevalece en el país impide que se investiguen los hechos, se encubre a los autores, la policía y los tribunales no actúan contra los responsables por diferentes razones afectando la igualdad ante la ley, el beneficia a determinados sectores.

El perito Joaquín Mejía Rivera menciona en su informe pericial:

En concreto, la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de tales violaciones ha provocado un clima de impunidad que derrumba el Estado de derecho y la legitimidad de las instituciones democráticas, lo cual ha sido reconocido por el propio Estado hondureño al solicitar al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la creación de una comisión internacional contra la impunidad<sup>13</sup> debido a la incapacidad del sistema de justicia para garantizar el derecho al acceso a la justicia de la población y una adecuada reparación a las víctimas. De hecho, el 19 de enero de 2016 se firmó un convenio entre el Estado Hondureño y

<sup>11</sup> Nota al pie de página 10 del ESAP: Amnistía Internacional, Informe 2006. *El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo*.

<sup>12</sup> Nota al pie de página 11 del ESAP: Naciones Unidas. Consejo Económico y social. Comisión de Derechos Humanos, 59º período de sesiones. Informe de la Relatora Especial, Asma Jahangir, presentado en cumplimiento de la resolución 2002/36 de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2003/3. 13 de enero de 2003. Disponible en: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2381.pdf?view=1>.

<sup>13</sup> Consejo de Derechos Humanos de ONU, *Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal Honduras*, 16º período de sesiones, Ginebra, 4 de enero de 2011, párr. 42.

la Organización de Estados Americanos para la instalación y puesta en marcha de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), lo cual es un reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado hondureño para acabar con la impunidad y la corrupción debido a las profundas debilidades de las instituciones del sector justicia y seguridad, como resultado de su extrema politización, de su débil independencia e imparcialidad, y de su falta de compromiso para cumplir con sus obligaciones de estar al servicio de los intereses generales de la sociedad y no de los poderes fácticos del país.

La CIDH expresó también sus preocupaciones en cuanto a la impunidad en Honduras:

La impunidad frustra las expectativas de justicia para las víctimas directas de las agresiones y las obliga a limitar sus condiciones y proyectos de vida al contexto de violencia en que se encuentra sumida. Tanto la Comisión como la Corte Interamericanas han condenado la impunidad de hechos que vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. La adecuada y eficaz administración de justicia por parte del Poder Judicial, y en la medida correspondiente por entes disciplinarios, tiene un rol fundamental no sólo en términos de reparación del daño causado a los afectados, sino también en términos de disminución del riesgo y el alcance de la violencia.<sup>14</sup>

### (iii) El Contexto Político Hondureño

La vida política en Honduras se caracteriza por altos niveles de intolerancia, violencia selectiva, poderes facticos, elites económicas privilegiadas y corrupción, todo esto en un contexto de alta impunidad.

Las expresiones de intolerancia política se marca por la persistencia de arraigados cacicazgos políticos locales por parte de las personas que ejercen funciones públicas, en algunos ocasiones actúan al margen de la ley como grupos de choque para amedrentar a quienes consideran enemigos del proyecto político de su interés generalmente en alianza o utilizando como sicarios a agentes del estado en las fuerzas de seguridad. Así mismo es persistente el tráfico de influencias a lo interno del poder Judicial.

<sup>14</sup> Nota al pie de página 21 del ESAP: CIDH. Informe de país; Honduras, *Situación de derechos humanos en Honduras*. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 42/15 31 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf>, párr. 273.

El problema de fondo es el clientelismo político y, más concretamente, la instrumentalización y manipulación de las instituciones estatales por parte de las cúpulas de los partidos políticos. Las nuevas instituciones públicas han terminado siendo “capturadas”, lo cual ha reforzado un modelo de estado corporativo y clientelar<sup>15</sup>. El control político de las instituciones estatales fundamentales y el exagerado clientelismo de las “familias políticas” dentro de los dos partidos principales no han favorecido ni una buena gobernanza ni la rendición de cuentas.

En la Declaración Pública ante este Tribunal el Perito Rodil Rivera Rodil, afirmó

“los partidos políticos funcionan como corporaciones con socios mayoritarios y socios minoritarios”<sup>16</sup>.

Como lo indicó el perito Joaquín Mejía Rivera en su informe:

Uno de los retos más grandes del sistema de seguridad y justicia hondureño es la despolitización, es decir, contar con policías, fiscales y jueces profesionalmente idóneos, honestos e independientes. Las redes de clientelismo y padrinazgo conectan a los tribunales y a su personal con los políticos y con la maquinaria de los partidos. Esta politización corrompe la administración de justicia, conlleva a que el sistema responda a intereses privados y que no logre procesar de manera eficiente los casos, y erosiona aún más la escasa legitimidad de las instituciones<sup>17</sup>. Por ello es fundamental superar todas las irregularidades en el proceso de selección de las altas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público que hasta el momento evidencian la primacía de criterios políticos sobre la meritocracia, evitando así la existencia de poderes públicos independientes y profesionales que luchen frontalmente contra la impunidad<sup>18</sup>.

Efectivamente son las elites económicas y políticas que realmente controlan el país, manteniendo poder sobre todas las instituciones estatales ya sean administrativas, judiciales o políticas en Honduras.

El perito Rodil Rivera Rodil afirmó en la audiencia que en este sistema, los caudillos, los líderes, necesitan su clientelismo, necesitan gente incondicional que les ayude y apoye a mantener ese control. Los grandes dirigentes encuentran en los líderes

<sup>15</sup> Nota al pie de página 35 del ESAP: Paz Aguilar, Ernesto. *Estado actual de las reformas político electorales en Honduras* en Tendencias y perspectivas de la reforma electoral en América Latina. página 110. Disponible en : [http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/5\\_2012/3247.pdf](http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/5_2012/3247.pdf)

<sup>16</sup> Declaración del 23 de marzo de 2017, Audiencia Pública.

<sup>17</sup> Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, *Cuarto Informe Estado de la Región Centroamericana en Desarrollo Humano Sostenible 2010*, Programa Estado de la Nación – Región, San José, Costa Rica. 1ª edición octubre de 2011, p. 122.

<sup>18</sup> Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia. *Tercer informe*. Octubre de 2013.

locales este apoyo y a través de ellos consiguen lo que desean. Los diputados locales están al servicio de los grandes caudillos, defendiendo sus intereses.<sup>19</sup>

El Señor José Pacheco que fue testigo del funcionamiento de la política hondureña, siendo diputado por cuatro años en el Congreso Nacional, declaró en la Audiencia Pública, que en Honduras a los dirigentes de los partidos les interesan personas que se acomodan al sistema. No están interesados por los candidatos que no se conforman o que saben o consideran que no pueden ser manipulados para sus propios beneficios<sup>20</sup>.

Según el perito Rodil Rivera Rodil las corrientes o movimientos en los partidos no tienen programas políticos realmente, ni siquiera una ideología especial. Todo es personal a los caudillos.<sup>21</sup>

Si bien hay confrontación y rivalidad entre los partidos políticos en Honduras, las luchas de poder son aún más importantes al interior de los partidos. Hay una fuerte polarización por mantener el control en el país. Esta polarización tiene como impacto de generar violencia e impunidad. Además, esos conflictos son mucho más agresivos, tensos y violentos, en los pueblos lejos de la capital. En los departamentos la confrontación es mayor, hay menos tolerancia.<sup>22</sup>

#### (iv) Estructuras de Poder en Relación a las Elecciones de 2001

Como lo mencionó el perito Rodillo Rivera Rodil durante la audiencia, Rafael Leonardo Callejas era el líder indiscutible del Partido Nacional. Fue Presidente de Honduras entre los años 1990 y 1994 y pocas veces en la historia de Honduras hubo un hombre con tanto liderazgo como él. Al grado que sigue siendo hoy un líder del Partido Nacional, treinta años después de haber fundado su corriente en el Partido Nacional y aun a pesar de que actualmente está en los Estados Unidos acusado de actos de corrupción, su movimiento compitió en las elecciones primarias del 12 de marzo 2017<sup>23</sup> Y como declaró José Pacheco Raúl Pino, uno de los sospechosos del presente caso, era uno de los candidatos a diputados del movimiento Monarca en este proceso de 2017<sup>24</sup>.

Rafael Leonardo Callejas fundó su corriente personal en los años ochenta, el Movimiento Monarca o corriente Callejista. El perito Rodillo Rivera Rodil, declaró que acuerdo con la ley electoral, los movimientos que participan en las elecciones

<sup>19</sup> Testimonio de Rodillo Rivera Rodil, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>20</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>21</sup> Testimonio de Rodillo Rivera Rodil, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>22</sup> Testimonio de Rodillo Rivera Rodil, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>23</sup> Testimonio de Rodillo Rivera Rodil, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>24</sup> [http://www.tse.hn/WEB/elecciones\\_2017\\_EP/Papeletas\\_EP2017/Nacional/dipu/images/17%20VALLE.jpg](http://www.tse.hn/WEB/elecciones_2017_EP/Papeletas_EP2017/Nacional/dipu/images/17%20VALLE.jpg)

primarias de cada partido, para elegir los candidatos, deben disolverse cuando las elecciones se llevan a cabo. Sin embargo, en la práctica varias de las corrientes siguen funcionando. No obstante, el caso del Señor Callejas es extraordinario su movimiento sigue, tuvo una de las mejores estructuras internas en el Partido Nacional.<sup>25</sup>

Según el testigo Pedro Canales Torres quien declaró por affidavit, el ex-presidente Rafael Leonardo Callejas tenía una casa de campo en Amapala, Departamento de Valle. Su padre Don Rafael Callejas Valentine, era de este departamento y siempre tuvo mucha influencia en la política y con los gobiernos. Don Rafael Callejas Valentine era un poderoso terrateniente en Valle.<sup>26</sup>

Raúl Pino era originario de Amapala, Departamento de Valle, militaba en el movimiento de los Callejas (MONARCA). El Señor Pino fue diputado al Congreso Nacional, en diferentes periodos. Pedro Canales Torres afirma que tenía vínculos muy estrechos con ellos, se conocían desde siempre del departamento. Raúl Pino era el brazo derecho de Don Rafael, casi como un hijo. Cuando murió la esposa de Don Rafael, es Raúl Pino quien le presentó su nueva mujer, la hermana del juez Teodoro Bonilla. El juez Teodoro Bonilla fue Juez de Letras seccional en Nacaome, Departamento de Valle durante los hechos del presente caso. El grupo de Callejas manejaban a los jueces, y empleaban a su gente en el gobierno.<sup>27</sup>

Durante la presidencia de Callejas, su primer diputado en el departamento de Valle, no manejaba nada en el Congreso Nacional como normalmente lo hace un primer diputado. De acuerdo con Pedro Canales Torres, era Raúl Pino quien tenía el poder de facto. Este era diputado, pero no era el primer diputado. El tenía en ese momento amplios poderes y siempre tuvo poder en el Partido Nacional.<sup>28</sup>

El Señor Pedro Canales Torres, tomó la decisión de consultar al Señor Rafael Leonardo Callejas, sobre sus aspiraciones políticas y candidatura, le solicitó consejos y el ex Presidente le aconsejó que se uniera al grupo de Raúl Pino, le dijo “no, andas mal, Pacheco no va a llegar”, “Únete al grupo de Raúl porque ellos van a encabezar la política en Valle, y Juan Che en Amapala”.<sup>29</sup> Estas elites estaban acostumbradas a controlar las candidaturas a diputación del Congreso Nacional y era la norma obtener lo que desean y planificaban.

<sup>25</sup> Testimonio de Rodillo Rivera Rodil, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>26</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.

<sup>27</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.

<sup>28</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.

<sup>29</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.



## (v) Contexto de las Elecciones Generales de 2001

Desde los comicios de noviembre de 1981 se han sucedido elecciones generales cada cuatro años. De acuerdo con la legislación vigente las elecciones se realizaban el mismo día en tres niveles: (1) presidencial para elegir el Presidente y tres designados presidenciales, (2) legislativo para elegir a 128 diputados propietarios, sus respectivos suplentes al Congreso Nacional<sup>30</sup> y los diputados al Parlamento Centroamericano; y (3) municipal para las Corporaciones Municipales<sup>31</sup>. Las elecciones presidenciales, legislativas<sup>32</sup> y municipales se realizan de manera simultánea.

Entre 1981 y 1989, al votar por el partido preferido, se votaba para presidente diputado y corporación municipal. Después hubo algunas reformas.<sup>33</sup> Primero, en las elecciones de 1985 se introduce la alternativa B, que no volvió ser utilizada. Después, para las elecciones de 1993, se introduce el voto separado en papeleta única<sup>34</sup>, al separar la misma papeleta dos casillas, una para presidente y diputado y otra para corporación municipal, con el propósito de diferenciar las elecciones municipales de las presidenciales /legislativas. Para las elecciones de 1997 se introdujo el voto en papeleta separada para presidente, diputado y corporaciones municipales<sup>35</sup>. Con estas medidas se han dado los primeros pasos para tratar de dotar de más legitimidad propia a cada nivel de elección y ponerlas a salvo del efecto de arrastre que provoca la candidatura presidencial sobre la elección legislativa y la de los gobiernos locales<sup>36</sup>.

Estos cambios se aplicaron también a las elecciones primarias. Eso significa que después de los cambios de 1993, había una papeleta única con todos los candidatos a presidente, diputado y corporaciones municipales. Los candidatos a los diferentes cargos de un mismo movimiento se encontraban en la misma columna con su

<sup>30</sup> Según el decreto No. 28-88, del 1 de marzo de 1998, se reformó la Constitución para establecer el número fijo de diputados. Anexo 3 del ESAP: Decreto No. 28-88 de la República de Honduras, del 1 de marzo de 1998.

<sup>31</sup> Nota al pie de página 25 del ESAP: Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo [PNUD]. Comisión Política de los partidos. *Honduras: Los acuerdos son posibles: La experiencia de la Comisión Política*. Tegucigalpa, Guaymuras, 2005, p.102 Disponible en: [https://books.google.hn/books?id=Z7wR\\_6HMVUsC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=elecciones+en+honduras+2002&source=bl&ots=psskdLJ8LJ&sig=aQ2fJUjVWB2gu\\_XNvuWYk4ohtWE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwig5d2gjZzLAhUY8mMKHYnGBVIQ6AEITzAJ#v=onepage&q=elecciones%20en%20honduras%202002&f=false](https://books.google.hn/books?id=Z7wR_6HMVUsC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=elecciones+en+honduras+2002&source=bl&ots=psskdLJ8LJ&sig=aQ2fJUjVWB2gu_XNvuWYk4ohtWE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwig5d2gjZzLAhUY8mMKHYnGBVIQ6AEITzAJ#v=onepage&q=elecciones%20en%20honduras%202002&f=false).

<sup>32</sup> Nota al pie de página 26 del ESAP: Paz Aguilar, Ernesto. *Estado actual de las reformas político electorales en Honduras* en Tendencias y perspectivas de la reforma electoral en América Latina. página 119, párrs 3-4. Disponible en : [http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/5\\_2012/3247.pdf](http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/CAPEL/5_2012/3247.pdf)

<sup>33</sup> Nota al pie de página 29 del ESAP: PNUD. *Honduras: Los acuerdos son posibles*. supra note 24, página 55.

<sup>34</sup> Nota al pie de página 30 del ESAP: Decreto Legislativo 180-92, del 30 de octubre de 1992. Disponible en <http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Honduras/hond81.html>.

<sup>35</sup> Mediante decreto No. 270-93 del 16 de diciembre de 1993. Anexo 4 del ESAP: Decreto No. 270-93 de la República de Honduras del 16 de diciembre de 1993.

<sup>36</sup> Nota al pie de página 25 del ESAP: PNUD. *Honduras: Los acuerdos son posibles*. supra note 25, página 55.

bandera, favoreciendo un voto en bloque por un movimiento. Esta situación cambió con las reformas de 1997, que se aplicó por primera vez en las elecciones primaria en el año 2000. Desde este año hay una papeleta para cada cargo, favoreciendo los votos cruzados. Una persona puede votar en las primarias por un candidato a presidente de un movimiento de un partido y votar por diputados de otro movimiento del mismo partido.

Estos cambios producen varias consecuencias:

La modificación de la forma de elección de los diputados impactó, en primer lugar, en el ciudadano. El elabora su propia planilla, tanto en las internas como en las nacionales, y, evidentemente, es un duro golpe para los “dueños” de las corrientes internas de los partidos, porque ya no escogen “a dedo” a sus candidatos; sistema que daba lugar a muchos abusos. En segundo lugar, el peso de las corrientes disminuye, pero ese peso perdido no lo ganan los partidos, sino la figura del diputado más votado, que se convierte en el líder natural del departamento y se siente más libre de las corrientes, menos comprometido con los partidos y más vulnerable frente a los grupos fácticos (legales e ilegales) que frecuentemente financian campañas políticas<sup>37</sup>.

Estos cambios fueron unos avances para la democracia. Los electores tienen más autonomía cuando es tiempo de votar y los candidatos independientes que quedan fuera de las estructuras de poder tradicionales tienen más oportunidades. Sin embargo, en el año 2000, los líderes políticos se sintieron amenazado por estos cambios que les quitaba una parte del control que tenían sobre las candidaturas<sup>38</sup>.

En el Departamento de Valle, había un pleito en el Partido Nacional, por la primera diputación. Ángel Pacheco León y Raúl Pino se habían lanzado como candidato a primer diputado por el departamento de Valle. Ángel Pacheco León tenía, según Pedro Canales Torres, mucha aceptación dentro de la población, era joven, no tenía pasado político, era conocido por haber sido futbolista en Equipos de Segunda División en Valle y Choluteca, lo impulsaba la parte económica, era un empresario exitoso.<sup>39</sup> Raúl Pino por el contrario, se considera que la población estaba harta de él. Se había descreditado siendo diputado durante el Gobierno de Callejas quien fue acusado de corrupción.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Nota al pie de página 40 del ESAP: Paz Aguilar, Ernesto. Estado actual de las reformas político electorales en Honduras, página 120 parr.3.

<sup>38</sup> Informe de la Conflictividad Política pag.5

[http://www.iudpas.org/pdf/Estu\\_InvestNacionales/InformeViolenciaPolitica.pdf](http://www.iudpas.org/pdf/Estu_InvestNacionales/InformeViolenciaPolitica.pdf)

<sup>39</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.

<sup>40</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.

Precisamente, como lo mencionó el perito Rodillo Rivera Rodil, Rafael Leonardo Callejas había sido acusado criminalmente por actos de corrupción durante su presidencia y tenía 15 o más casos pendiente. Según Rodil Rivera Rodil eran casos contra lo cual había pruebas muy serias. Era esencial para el ex presidente salir bien de estos juicios de corrupción. El viene de una familia muy honorable con alto nivel social y no podía permitirse tal situación.<sup>41</sup>

Por esta razón, era imprescindible para Rafael Leonardo Callejas de mantener un buen control en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional nombra a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Republica y al Fiscal General de la Republica.<sup>42</sup>

Y para las elites locales era importante mantener el poder a nivel regional también para asegurar que sus intereses económicos siguieran favorecidos. Los políticos tradicionales estaban acostumbrados a sentirse protegidos. Como lo indicó Jimmy Javier Pacheco durante su intervención en la Audiencia Pública, “En el Departamento de Valle hay aduanas internacionales y el Primer Diputado<sup>43</sup> puede recomendar a los directores”<sup>44</sup> Las Aduanas de Honduras, están ubicadas en los puntos fronterizos que tiene con los países centroamericanos vecinos y algunos aeropuertos del país. Las principales Aduanas de Honduras son 18, de las cuales 8 son aduanas terrestres, 8 son marítimas y 2 aéreas. El departamento de Valle tiene una aduana terrestre y dos marítimas, la Aduana El Amatillo<sup>45</sup>, Frontera entre Honduras y El Salvador. la Aduana El Henecan, en el Puerto de San Lorenzo y la Aduana de Amapala, en el Puerto de Amapala, en la Isla del Tigre.<sup>46</sup> Por la

<sup>41</sup> Testimonio de Rodillo Rivera Rodil, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>42</sup> Testimonio de Rodillo Rivera Rodil, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>43</sup> Tres meses antes de las elecciones, aproximadamente en el mes de septiembre, cuando Ángel Pacheco regresaba con su equipo de campaña del municipio de Langue, se encontró con Benjamín Cárdenas Meléndez sobre la carretera. Le hizo señal a Ángel Pacheco para que se detuviera y él se detuvo. Cárdenas llamo a los acompañantes de Ángel Pacheco para que fueran testigos que Ángel le asegurara una posición dentro del gobierno. Ante la respuesta de Ángel Pacheco, que no podía asegurar nada, Cárdenas se enojó y le dijo que para entrar a Langue se necesitaba autorización de él y que si no lo hacía, lo que quería no iba a tener el placer de gozar el triunfo porque iba a ser hombre muerto. Página 23 del ESAP

<sup>44</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>45</sup> El 29 de enero de 2001, las autoridades de Salvador y Honduras decidieron integrar el funcionamiento de las oficinas de las aduanas, migración y cuarentena, de las aduanas fronterizas de El Amatillo, en un solo edificio o instalaciones, lo que se realizó mediante el traslado del personal, mobiliario, equipo de oficina y bancos de Honduras a las instalaciones de la aduana El Amatillo de El Salvador y el traslado de personal de migración y cuarentena de El Salvador para el edificio de la aduana de Honduras. Esa decisión se tomó con el propósito fundamental de armonizar los procedimientos aduaneros que han de implementarse en las aduanas periféricas al entrar en vigencia la Unión Aduanera entre estos dos países.

<http://www.proceso.hn/index.php/component/k2/item/18996>

<sup>46</sup> <http://www.xplorhonduras.com/aduanas-de-honduras/>

naturaleza económica del Departamento de Valle estas son las principales y más rentables estructuras de gobierno, en las que el primer diputado tiene prioridad en las decisiones, Benjamín Cárdenas exigía a Ángel Pacheco le asegura una posición en el Gobierno de lo contrario iba a ser hombre muerto<sup>47</sup>.

Como fue explicado por José Pacheco, y el Perito Rodil Rivera Rodil, durante la Audiencia, en Honduras aunque no está en la ley hay una gran manipulación de los diputados. Pese a que un candidato gane la primera diputación en las primarias con el voto popular del pueblo, a menudo el partido intercambia los cargos y va a nombrar a otro como candidato a primer diputado.

No obstante, debido al extraordinario liderazgo que tenía Ángel Pacheco León en el Departamento y su independencia económica, Ricardo Maduro decidió mantenerle como su candidato a primer diputado y a Raúl Pino como su diputado suplente. Como, el testigo Pedro Canales Torres, afirmó “Fue un bombazo para el grupo de caudillistas de la región. Fue un golpe súper duro. Fue un escándalo.” Maduro quiso conservar a Ángel Pacheco León. Como su primer diputado, porque vio la popularidad que tenía en el Departamento de Valle, y necesitaba que hiciera campaña con él para ayudarle a ganar en esta región.<sup>48</sup>

Las estructuras arcaicas de los partidos pueden manipular y trasladar las posiciones, pero no a cualquiera, Ángel Pacheco tenía liderazgo propio, autonomía y defendió sus votos a través de la papeleta separada.

Una vez electo en las elecciones primarias y legitimadas por la Declaración Oficial, del Tribunal Nacional de Elecciones, solo pueden darse dos opciones para no asumir la candidatura:

- Renunciar al cargo y;
- La muerte.

Fue esto último lo que ocurrió, Ángel Pacheco fue asesinado, dos días antes de las elecciones para evitar que asumiera su cargo, tal como había sido reiteradamente amenazado, por los miembros de su partido. Se atrevió a romper las reglas del Partido Nacional, de silencio y obediencia. Como lo explicó el Perito Rodil Rivera Rodil, el Analista Político Juan Ramón Martínez ha escrito varios artículos sobre el

<sup>47</sup> Declaración de Soraya Lizeth Reyes Maldonado, ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ver anexo 1 al informe de fondo. Página 23 del ESAP. 18 de marzo de 2016.

<sup>48</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.

tema<sup>49</sup>. En uno de esos artículos consultados asevera *El verdadero fundador del PN, es Tiburcio Carías Andino. Él lo hizo a su manera, los diferencio de los liberales, los acostumbro a la subordinación a los hombres del poder y los volvió disciplinados y obedientes. Eso dicen las pruebas históricas*<sup>50</sup>.

## 2. Alegatos sobre los Hechos

### (i) Hechos No Controvertidos

Ángel Pacheco León nació en la comunidad de los Horcones, de la aldea de los Llanos de Jesús, jurisdicción del municipio de Goascorán en el departamento de Valle el 23 de diciembre 1959.<sup>51</sup> Era Perito Mercantil de profesión y fundador propietario de la empresa IMPALE (Industria Manufacturera Pacheco León).

En 1997, el Señor Pacheco se involucró en la política partidaria, afiliándose al Partido Nacional de Honduras.

Ángel Pacheco León se incorporó al movimiento liderado por Ricardo Maduro<sup>52</sup>: Arriba Honduras.

Él era Candidato a primer diputado del departamento de Valle por el Movimiento Arriba Honduras del Partido Nacional.

José Pacheco, estableció que su hermano trabajo muy duro en el departamento, visitando casa por casa a los ciudadanos y es este trabajo que le permitió ganar la confianza, el respeto y credibilidad en el departamento de valle.<sup>53</sup>

Durante la campaña, Ángel se destacó como un político joven con propuestas novedosas. Como lo asevero su hijo durante la audiencia, se caracterizaba por su gran corazón y quería a través de la política realizar cambios en el departamento de Valle.

Quería mejorar la educación y las infraestructuras y generar oportunidades de empleo para que la gente del departamento saliera adelante.<sup>54</sup> La población del

<sup>49</sup> Declaración, en Audiencia Pública del Perito Rodil Rivera Rodil, 23 de marzo de 2017.

<sup>50</sup> Ver <http://www.latribuna.hn/2015/03/07/quien-fundo-el-partido-nacional-de-honduras/>

<sup>51</sup> Anexo 7 del ESAP: Testimonio de Andrea Pacheco López de fecha de 20 de febrero de 2016.

<sup>52</sup> Anexo 10 del ESAP: Testimonio de Blanca Rosa Herrera Rodríguez de fecha de 20 de enero 2016.

<sup>53</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>54</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

departamento de Valle lo respetaba y lo admiraba. Con sus propuestas Ángel Pacheco León, logró gozar un gran liderazgo político. Como quedo establecido en la Audiencia Pública mediante el testimonio de José Pacheco, la situación de persecución y amenazas empezó cuando logró este liderazgo en el departamento.<sup>55</sup>

El Señor José Pacheco relató durante la Audiencia Pública una conversación telefónica de la que fue testigo entre Ángel Pacheco León y el Señor Benjamín Cárdenas, el diputado suplente del departamento de Valle en este momento. Ángel Pacheco dijo por teléfono “Mira Benjamín si me quita la candidatura a primer diputado por el departamento de Valle trabajando y ganando la voluntad del pueblo, no me quedara más que felicitarlos, solo que para eso va a necesitar trabajar duro.” Después de una pausa dijo “Miedo no te tengo, no voy a hacer como ustedes están acostumbrado a hacer las cosas. Solo una cosa te quiero decir, no soy solo. Tengo hermanos, tengo familia.”<sup>56</sup>

El Señor Ángel Pacheco León, resultó ganador en las elecciones primarias del Partido Nacional, figuraba como candidato a primer diputado para el periodo 2002-2006 en las elecciones que se realizarían el 25 de noviembre 2001<sup>57</sup>. José Pacheco afirma que los problemas se incrementaron cuando fue nombrado como candidato a primer diputado en el departamento de Valle y Coordinador General departamental por el Partido Nacional.<sup>58</sup> El afirmó que su candidatura molestó a los políticos tradicionales del departamento los cuales estaban acostumbrados a manejar las cosas como querían. Lo veía como un obstáculo para seguir sus planes.<sup>59</sup>

El hecho de haber ganado las elecciones primarias en su partido, le significó a Ángel Pacheco León una serie de problemas que incluyeron desde obstáculos para desarrollar su campaña electoral hasta amenazas de muerte.

Su compañera de hogar Blanca Rosa Herrera Rodríguez señaló en su Afidávit:

Cuando mi esposo empezó a tener bastante pueblo y que la gente lo quería, empezó a sufrir amenazas por parte de los simpatizantes de Raúl Pino. Un día me dijo que Raúl Pino lo amenazo a muerte y que si algo le llegaba pasar no era nadie más que Raúl Pino, que era el suplente de Ángel. Siempre me lo repetía.<sup>60</sup>

<sup>55</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>56</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>57</sup> CIDH. Informe de fondo, párr. 26 y anexo 5 al informe de fondo.

<sup>58</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>59</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>60</sup> Testimonio por afidávit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

En 2001, empezaron las llamadas a su casa, en horas de la noche, por parte de hombre desconocidos, para saber dónde estaba. La señora Herrera afirmó:

Cada vez que él salía me decía que no preocupara que no le iba a pasar nada, pero lo extraño era que él me prohibía que diera cualquier tipo de información sobre él. Lo llamaban bien seguido a la casa personas que nunca me daban el nombre solo me decía que si sabía si mi esposo se había ido para el sur o que si estaba en Tegucigalpa. Estas llamadas generalmente eran de noche, y podían ser repetitivas en una noche. A menudo coincidían con el día que regresaba Ángel. Era como si sabían que estaba en camino de regreso.

Las voces eran masculinas y se identificaban como miembros del equipo de trabajo del partido. Este tipo de llamadas iniciaron en agosto de 2001. “Esta Ángel Pacheco?, Esta en Tegus o en el sur?”. Esas voces me daban miedo. Ángel me pedía que nunca dijera dónde estaba. Si realmente eran gente de su campaña, daban su nombre, se identificaban, decían quiénes eran, pero esas personas no.<sup>61</sup>

La compañera de hogar de Ángel Pacheco, aseguró que él fue llamado un día por el ex presidente Rafael Leonardo Callejas, pidiendo que se reunieran para hablar asuntos de política. Un hecho que le puso muy alegre porque tendría la oportunidad de conversar con un gran político. No obstante, cuando regresó de la cita, la Señora Herrera le notó muy callado y pensativo. Después de interrogarle sobre la reunión, este le afirmó con decepción en su rostro le dijo “Él lo que quiere es que renuncie y que le deje el camino libre a Raúl Pino”.<sup>62</sup> Días después, recibió una llamada, el Señor Callejas se identificó y preguntó por Ángel Pacheco, pero su compañera le respondió que no se encontraba, porque Ángel se negaba a recibir la llamada.<sup>63</sup>

La Señora Herrera afirmó en su testimonio por affidavit:

Después de decidir que no iba a renunciar, perdió la alegría que lo caracterizaba, no volvió a ser el mismo. Pasaba con el semblante triste y pensativo, a mí me daba pesar verlo. Ángel era un hombre muy transparente. Lucía preocupado, a pesar que me decía que yo no me preocupara, su rostro no decía lo mismo que las palabras. Tenía una tristeza profunda. Me daba una gran tristeza porque no era él. Cambió completamente. No jugaba con los hijos como antes. Además se notaba que se estaba desmejorando físicamente. Estaba bien decaído.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

<sup>62</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

<sup>63</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

<sup>64</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

Además, Ángel Pacheco León informó a su compañera de hogar que se arrepentía de haberse metido a la política y que había dado cuenta de lo sucio que era la política en su país. No obstante, no quería abandonar la política por las personas que había confiado en él y que le habían apoyado, sentía que no podía salirse ahora.<sup>65</sup>

Posteriormente, habría sido citado a una nueva reunión pero no asistió porque le avisaron que en ella lo matarían. Ángel Pacheco León recibió varias amenazas de muerte, algunas de ellas dirigidas por militantes de su propio partido<sup>66</sup>.

En una ocasión mientras Ángel Pacheco León circulaba con su equipo de campaña encontraron en la ruta a otros nacionalistas y se pararon para hablar con ellos. Un colega de Pacheco relató los eventos en una declaración a la DGIC:

Cuando en eso llegaron (...) el Sr. Suplente (diputado) actual del Congreso Nacional de nombre Benjamín Cárdenas haciéndose acompañar de dos personas supuestamente guardaespaldas; se pararon a saludar a Ángel Pacheco diciéndole “ajá Pacheco hasta que te eligieron de primer diputado”. Entonces Pacheco le contestó que gracias a Dios y el pueblo que Ricardo Maduro lo había nombrado a la primera diputación por Valle. Pero Benjamín le contestó “que si yo quiero que vos seas diputado lo vas a hacer” siguieron discutiendo. Luego Benjamín Cárdenas le dijo a Pacheco que él era “muy hombre y si tenía que matar, mataba” y “yo a quien quiero que sea dueño de la primera diputación es a Raúl Pino o el Dr. Erci Mejía”.<sup>67</sup>

En una otra ocasión, después de la designación de Ángel Pacheco León como candidato a primer diputado, le pidió al testigo Pedro Canales Torres que le acompañará a una gira a la Isla del Tigre, Amapala, Departamento de Valle. El Señor Canales desistió en acompañarle porque era candidato a Vice Alcalde en la planilla de Juan José Quiroz quien vive en Amapala y sabía que este último despreciaba al Señor Pacheco y le había solicitado que se apartara de él.<sup>68</sup>

Juan José Quiroz, también conocido como Juan Che, era un político local. Fue Alcalde de Amapala durante el gobierno de Callejas (1990-1994), durante el Gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998) y también durante el gobierno de

<sup>65</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

<sup>66</sup> CIDH. Informe de fondo, párr. 28, anexo 1 y anexo 7 al informe de fondo.

<sup>67</sup> Declaración de José Alexis Benavides Rivera, 27 de noviembre 2001, ver anexo 2 al informe de fondo CIDH.

<sup>68</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.



Maduro (2002-2006).<sup>69</sup> Tenía una muy buena relación con los líderes políticos del Partido Nacional.

Como el Señor Canales continuaba sosteniendo una buena relación con el Señor Pacheco decidió aceptar otra invitación de Ángel Pacheco de acompañarle en su gira por Amapala. Durante su gira en la Isla, el Señor Pacheco quiso visitar a Juan José Quiroz, porque tenía intención de llevarle unos fondos, como todo candidato a diputado aporta a los candidatos alcalde.

Pedro Canales Torres en su affidavit testificó:

Cuando llegamos a la casa de Juan José Quiroz, él salió de una manera muy violenta. Él gritaba e insultaba a Pacheco. Él gritaba cosas como “vos no tenés que visitarme a mí” “Vos venís llegando al Partido”, “te pido que no te volvas acercar a Mí, hijo de puta”. Estaba muy colérico e incontrolable. Decía “El líder del Partido en Valle es Raúl”. Estaba ardido porque había perdido Raúl Pino. Fue la mujer de Juan José Quiroz quien evitó que golpeará a Pacheco. Yo trataba de conciliar. Juan José Quiroz me dijo “vos evita de andar con ese hijo de puta porque se lo va a llevar putas”. Me lo dijo en el sentido que me iba a traer problemas. Muchas personas involucradas en la política, gente del Partido Nacional, que conocía bien la situación me decían que yo debería de apartarme de Pacheco porque corría peligro que lo mataran.

Diferentes testigos han corroborado las múltiples amenazas, motivadas por razones políticas, uno de sus más cercanos colaboradores aseguró a las autoridades hondureñas que Ángel Pacheco León le confió, que recibía llamadas en su celular en las que le decían que no siguiera en política.<sup>70</sup>

El Señor Jimmy Javier Pacheco declaró en la Audiencia Pública, que notó cambios en su papá durante la última semana de campaña. Lo notó diferente, tenso, observó que miraba mucho por el retrovisor. Jimmy sintió que su Papá tomaba más precauciones, andaba con armas y decidió contratar un “guardaespaldas” unos tres días antes de su muerte. Lo sentía nervioso y a la defensiva.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.

<sup>70</sup> Anexo 1 al informe de fondo CIDH. Declaración de José Alexis Benavides Rivera.

<sup>71</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

Durante un viaje por la ciudad de Langue a final de campaña, Jimmy aseguró que le sintió particularmente tenso. Su padre le dijo que le daba temor estar mucho tiempo ahí y le pidió que se quedara en el carro, que ni siquiera lo apagara y que siguiera pendiente de cuando él saliera. Según Jimmy Javier Pacheco, él conducía más rápido de normal, se quedaron poco tiempo en la ciudad y salieron bastante rápido.<sup>72</sup>

Jimmy Javier Pacheco le dijo a esta Corte que escuchó a su padre comentarle a alguien que tenía temor. Tenía temor que cuando alguien se acercara a saludarlo o abrazarlo que alguien más le acercara con otra intención para hacerle daño.<sup>73</sup> Escuchó también compañeros de Ángel Pacheco León pidiéndole que se cuidara, que no confiara, que había personas que querían hacerle daño.<sup>74</sup> Además, él dijo directamente a su hijo que el día de las elecciones no iba a salir de la casa para nada, en el sentido que podría pasar algo.

Durante la campaña el señor Pacheco fue amenazado específicamente por parte de Rafael Leonardo Callejas (Ex Presidente de la República), Benjamín Cárdenas (Ex diputado), Salvador Cárdenas (Ex miembro de las fuerzas armadas), Wilfredo Cárdenas, Raúl Pino (ex diputado y entonces candidato a diputado suplente), Manuel Vides (Diputado), Juan José Quiroz (Acalde de Amapala) y Jorge Berrios (Ex diputado)<sup>75</sup>. Él tenía temor debido a los celos políticos y que incluso lo amenazaron durante discusiones en público.<sup>76</sup>

Ángel Pacheco era carismático, ofrecía trabajo, transformación y devolver el protagonismo a las comunidades. La campaña afectaba a un sector del Partido Nacional que se quedó fuera con su popularidad, la vieja estructura partidaria. Estas estructuras se rotaban las candidaturas entre ellos; Ángel Pacheco rompió el esquema les robó el clientelismo político duro. Por lo que había una pugna para que le quitaran el apoyo de la dirigencia nacional.

Según José Pacheco, toda la persecución, los problemas que él tuvo, fue por la política. A título personal nunca había tenido problemas, no tenía enemigos<sup>77</sup>. En ningún momento han pensado que lo que le sucedió fue por otra razón que la política.<sup>78</sup>

<sup>72</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>73</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>74</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>75</sup> CIDH. Informe de fondo, párr. 27 y anexo 5 al informe de fondo.

<sup>76</sup> Según las varias declaraciones de testigos en el expediente judicial.

<sup>77</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Testimonio por affidavit, Andrea Pacheco López, 23 Febrero 2017.

estimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

El señor Pacheco era favorito para ser electo como diputado al Congreso Nacional de Honduras y por eso los hechos que se describen a continuación.

### **(ii) Hechos del 23 de noviembre 2001**

Es un hecho probado y no controvertido que el 23 de noviembre de 2001, aproximadamente a las 11:35 p.m. Ángel Pacheco León fue asesinado en la entrada de su casa, ubicada en el Barrio el Calvario de la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle<sup>79</sup>.

Esta noche, dos días antes de las elecciones generales, Ángel Pacheco León regresaba de sus actividades políticas con dos carros e iba acompañado de sus hijos Miguel Ángel Pacheco y Jimmy Javier Pacheco y de su nuevo guardaespaldas Jorge Carbajal. Primero fueron a una reunión política a la casa de un candidato alcalde en la Comunidad de Cubulero, jurisdicción de Goascorán. Durante la reunión, Jimmy Javier Pacheco se quedó en la parte fuera de la casa. Él afirma que andaba a la defensiva por los comentarios que había escuchado. Durante la reunión se percató que un vehículo tipo pick up, color blanco, cabina sencilla se estacionó a algunos metros de la casa donde estaban.<sup>80</sup> Jimmy Pacheco lo encontró raro porque era cerca de donde estaban, tenía las luces apagadas y no había casa o negocios por ahí. Hizo el comentario a su padre quien lo envió con Miguel Ángel y el guardaespaldas a verificar. Cuando iban saliendo a ver quién era y el motivo de su llegada, el carro arrancó y se fue, no pudieron identificar el conductor.<sup>81</sup>

Posteriormente, se fueron a la casa de Epsy Sagot en Nacaome por otra reunión, era bastante tarde y el Señor Jimmy Pacheco afirmó que él se quedó durmiendo en el carro a raíz del cansancio de la última semana.<sup>82</sup> Después, se fueron hasta la casa donde iban a dormir, pero como normalmente solo cabía un carro en el lugar donde se estacionaban cerca de la casa, dejaron un primer vehículo a la entrada de Nacaome. Cuando llegaron al sitio de estacionamiento se percataron que había espacio esta noche para dos vehículos. Como tenían que salir muy temprano al día siguiente, el Señor Ángel Pacheco León mandó su hijo Miguel Ángel Pacheco y su guardaespaldas a recoger el carro que habían dejado a la entrada de la ciudad para

<sup>79</sup> Anexo 2 al Informe de fondo CIDH. Denuncia criminal, Folios 43-44 del proceso judicial.

<sup>80</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>81</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>82</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

traerlo cerca de la casa<sup>83</sup>. El Señor Ángel Pacheco León caminó entonces una media cuadra con su hijo Jimy para llegar a la casa.

Los dos caminaron, Ángel adelante y su hijo atrás. En el momento que su papá estaba abriendo la puerta, Jimy escuchó un sonido, como hojas secas quebrándose por una pisada. Él se volvió y vio un hombre corriendo hacia ellos con las manos sacando un arma.

No pudo ver el rostro de la persona, pero vio muy bien su silueta, su corpulencia y lo que vestía.<sup>84</sup> Jimy corrió para dentro de la casa y trató de tirar la puerta pero no se cerró. Jimy forcejó para que el hombre no entrara. El Señor Ángel Pacheco León se acercó para ver lo que estaba pasando y cuando se acercó el hombre empezó a disparar. Jimy Javier Pacheco escuchó que su papa cayó y el hombre siguió disparando hacia su papá. Jimy también escuchó y sintió que manipularon el arma hacia él e intentaron disparar, pero quizás por falta de munición no fue herido por balas.<sup>85</sup> El abrió la puerta, salió y vio el hombre corriendo hasta un carro que lo esperaba, un carro tipo pick up, color blanco, cabina sencilla.<sup>86</sup>

Jimy Javier Pacheco regresó con su papa y podía escucharlo ahogarse en su sangre, se quitó la camisa para hacerle presión y le dio la vuelta para que no se ahogara.<sup>87</sup> Regresó justo después Miguel Ángel y con la ayuda del dueño de la casa, Juan Bautista Umanzor Paz y su hijo levantaron a Ángel Pacheco y lo subieron en la camioneta para dirigirse al Hospital de San Lorenzo<sup>88</sup>. Cuando iban saliendo de la casa, vieron que había una patrulla en el parque muy cerca y que no había reaccionado por los disparos. Pidieron a la patrulla que siguieran las personas ya que habían visto el vehículo avanzar a toda velocidad y no les habían detenido o perseguido.<sup>89</sup>

Al llegar al hospital les dijeron que el Señor Ángel Pacheco León había fallecido y que tenía aproximadamente doce impactos de balas.<sup>90</sup> Jimy Pacheco fue a la sala a

<sup>83</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>84</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Anexo 2 al Informe de fondo CIDH. Declaración Jimy Javier Pacheco, Folios 50-51 del proceso judicial.

<sup>85</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH

<sup>86</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Anexo 2 al Informe de fondo CIDH. Denuncia criminal, Folios 43-44 del proceso judicial.

<sup>87</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>88</sup> Anexo 2 al Informe de fondo CIDH. Denuncia criminal, Folios 43-44 del proceso judicial.

<sup>89</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; CIDH. Informe de fondo, párr. 42 y anexo 9 al informe de fondo.

<sup>90</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Anexo 14 del ESAP: Testimonio de Miguel Ángel Pacheco Devicente de fecha de 19 de enero de 2016.

ver su padre que estaba cubierto de sangre. Él quiso abrazar a su papá y le tocó la frente y sintió que su frente se hundió, no tenía huesos. Jimmy afirmó que es una imagen que no se le pudo quitar de la mente.<sup>91</sup>

### (iii) El Cargo de Diputado después del Asesinato

El 24 de noviembre 2001, mientras el cuerpo de Ángel Pacheco León estaba en Medicina Forense en Tegucigalpa, se reunieron en el municipio de Goascorán en el Departamento de Valle las comisiones municipales electorales, la comisión electoral departamental, los comités de apoyo a la candidatura de Ángel Pacheco León y muchas más personas que acudieron por indignación ante el asesinato de su líder.<sup>92</sup>

Esta reunión tuvo el propósito de tomar una posición firme y enérgica, que por ningún motivo iban a aceptar que el candidato a diputación suplente sustituyera a Ángel Pacheco León en su candidatura a primer diputado.<sup>93</sup> Exigían a las autoridades del partido que en sustitución de Ángel se nombrara a un hijo, esposa o hermano. Hicieron entender que si no les garantizaba lo que estaban pidiendo como pueblo, no saldrían a ejercer el sufragio al día siguiente en el Departamento de Valle, lo que significaría un gran daño al Partido Nacional.<sup>94</sup>

Al principio no había ninguna autoridad superior del partido en estas protestas. Sin embargo a escuchar lo que estaba pasando en el departamento, el Comité Central del Partido Nacional envió una comisión, para que calmara los ánimos de los correligionarios y determinara quien ocuparía la candidatura de la primera diputación.

La comisión enviada estaba encabezado por Don Rafael Leonardo Callejas Valentine<sup>95</sup>, les propuso el nombramiento de Raúl Pino. Esta propuesta enfureció el pueblo aún más argumentando que no era posible que el principal sospechoso fuera el sustituto. Ante la presión del pueblo, y no teniendo otra alternativa, las autoridades del Partido y el candidato a la presidencia Ricardo Maduro decidieron que José

<sup>91</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>92</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Anexo 6 del ESAP: Radio América. Nota de Prensa publicada el 24 de noviembre de 2001.

<sup>93</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>94</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>95</sup> Padre de Rafael Leonardo Callejas Romero, máximo líder del partido en ese momento.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael\\_Leonardo\\_Callejas](https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Leonardo_Callejas)

Pacheco sustituyera a su hermano como primer candidato a diputado. No tenían otras opciones porque los hijos de Ángel Pacheco León eran menores de edad.<sup>96</sup>

El día 25 de noviembre, era Ángel Pacheco León, quien estaba legalmente inscrito y su nombre se encontraba en los papeles de votación. Su candidatura ganó con gran mayoría las elecciones generales por lo que el Señor José Pacheco asumió el cargo de diputado desde enero 2002 a 2006.<sup>97</sup>

#### (iv) Amenazas a la Familia

Después de los funerales de Ángel Pacheco, el 27 de noviembre de 2001, su hermano José Pacheco, asumió la responsabilidad en representación de la familia de presentar las reclamaciones y formalizaciones de las peticiones de investigación ante las instancias del Estado e interpuso denuncia por el asesinato de su hermano al Ministerio Público.

A partir de esta fecha, José Pacheco empezó sin descanso a dar seguimiento a las investigaciones. Él se presentaba y se presenta constantemente frente a las diferentes instancias estatales de investigación, judiciales o administrativos relevantes. Aunque, él vive en Tegucigalpa que se ubica a dos horas de Nacaome, iba también frecuentemente para seguir los avances.<sup>98</sup>

No tuvo apoyo o respaldo de las autoridades. En una reunión con una fiscal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ésta le dijo que pensaban que era él, José, el responsable de la muerte de Ángel para poder quedarse con la diputación. Eso fue una situación que le indignó, le ofendió y que le dolió muchísimo.<sup>99</sup>

Siempre se puso a la disposición de las autoridades ofreciendo su colaboración en lo que fuese necesario. Durante los últimos 15 años estuvo incansablemente impulsando y haciendo presión para que investigue debidamente la muerte de su hermano Ángel. Pero aun con todo este seguimiento y presión no ha podido ver avances en la investigación.<sup>100</sup>

Siendo diputado y dando seguimiento a la investigación, José Pacheco fue víctima de varios ataques, actos de hostigamiento y amenazas.

<sup>96</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH: Anexo 16 del ESAP: Testimonio de José Pacheco, de fecha de 8 de julio de 2003.

<sup>97</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>98</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH

<sup>99</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH

<sup>100</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH

En Septiembre de 2002, fue víctima de penetración ilegal a su domicilio. Se llevaron únicamente documentos relacionados con la investigación y la muerte de Ángel Pacheco, no robaron nada más, dejaron todo los objetos de valor<sup>101</sup>.

En 2003 su vehículo fue abierto de manera violenta por personas desconocidas que robaron una camera de video donde filmaba sus actividades políticas.<sup>102</sup> Este mismo año, escribieron “muerto” con marcador color negro en la puerta izquierda de su vehículo.<sup>103</sup>

El 18 de junio de 03, cuando se trasladaba de Tegucigalpa hacia el municipio de Langué, observó que la placa de su vehículo no estaba. Eso le preocupó porque temió que le pudieran hacer algún daño usando su placa.<sup>104</sup>

En otra ocasión el 12 de julio de 2003, mientras construía una nueva casa, personas armadas llegaron y en forma violenta tomaron al ingeniero encargado de la construcción. Cuando lo identificaron lo dejaron.<sup>105</sup>

A inicios del año 2002, después de que un vehículo similar al suyo, que se encontraba estacionado cerca de su domicilio fuera robado, José Pacheco, en forma verbal durante una entrevista, solicitó al entonces Secretario de Seguridad medidas de protección, el Ministro le respondió que no tenía ni presupuesto ni personal suficiente para brindarle seguridad<sup>106</sup>

A finales de 2002, José Pacheco logró una Audiencia con el entonces Presidente de la República, Ricardo Maduro, a quien le expuso la situación de inseguridad, El Presidente ordenó a las autoridades de seguridad que le protegieran pero la orden no se implementó. Finalmente contrató seguridad privada en virtud de que su vida y la de su familia corrían mucho peligro.<sup>107</sup> El temor en la familia es constante<sup>108</sup>

<sup>101</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Denuncia 4901, Departamento de investigación Criminal Sección de Denuncias, 27 de septiembre de 02.

<sup>102</sup> CIDH. Informe de fondo, párr. 45; Anexo 2 del Informe de Fondo, Denuncia 314-03, 17 de mayo 2003.

<sup>103</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH + No. Denuncia 3287, Centro de Recepción de Denuncias de la DGIC. Zona 1.

<sup>104</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH + No. Denuncia 3370 del 27 de junio de 2003.

<sup>105</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH + No. Denuncia 3505, Centro de Recepción de denuncias, oficina principal DGIC.

<sup>106</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>107</sup> Testimonio de José Pacheco, de fecha de 8 de julio de 2003.

<sup>108</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

## Investigaciones y procedimiento judiciales

Después del asesinato del Señor Ángel Pacheco León, las autoridades permitieron que la escena de crimen se contaminara. No consta en el expediente que la policía protegiera la misma. Al día siguiente del asesinato, el 24 de noviembre 2001, un técnico de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) fue llamado a las 8:00 a.m. para realizar la requisa y búsqueda de pruebas en la escena del crimen<sup>109</sup> y solo llegó a la 1:15 de la tarde, casi 14 horas después del asesinato. El técnico indicó en su informe que cuando llegó encontró que la escena había sido “contaminada observando pisadas de calzado en manchas de sangre”.<sup>110</sup> Una situación poco sorprendente si tomamos en cuenta que la escena del crimen no contaba con medidas de protección en el lapso del tiempo que tardó el técnico en llegar al sitio de los hechos.

Este mismo día, las autoridades detuvieron a tres personas, Jerhing Maldonado, Héctor Estrada y Alberto Vigil. Héctor Estrada y Alberto Vigil se encontraban en un carro que supuestamente tenía las mismas características que el carro del asesino material, donde encontraron manchas de sangre en el asiento trasero y en sus ropas. Jerhing Maldonado fue detenida frente a la sede del Partido Liberal.<sup>111</sup>

El 27 de Noviembre, del 2001, los familiares fueron al Ministerio Público en el Municipio de Nacaome, Valle, momento en el cual José Pacheco presentó una denuncia por el asesinato de su hermano.<sup>112</sup> En esta denuncia, solicitó que se esclarecieran los hechos relacionados con la muerte de Ángel Pacheco y que se investigaran a todas las personas responsables<sup>113</sup>. A partir de esta fecha los familiares empezaron incansablemente a dar seguimiento a las investigaciones.<sup>114</sup>

Como lo indicó Marleny Pacheco en su affidavit:

<sup>109</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Declaración de Carlos Rodríguez, de fecha 6 de diciembre de 2001. Folios 81-82 del proceso judicial.

<sup>110</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Declaración de Carlos Rodríguez, de fecha 6 de diciembre de 2001. Folios 81-82 del proceso judicial.

<sup>111</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe Especial de la de la Dirección General de la Policía Preventiva, de fecha 25 de noviembre del 2001. Folios 119-120; Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Declaración de Wilmer Marte. Folio 9; y Anexo 22 al informe de fondo CIDH. Auto de prisión en contra de Jerhing Maldonado del Juzgado de Letras Seccional. Folio 37.

<sup>112</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Denuncia criminal. Folios 43-44 del proceso judicial; Testimonio José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.; Testimonio por Affidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>113</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Denuncia criminal. Folios 43-44 del proceso judicial.

<sup>114</sup> Testimonio por Affidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017; Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.



Ha sido una constante lucha, y periódicamente solicitando información sobre los avances en el proceso de investigación en la DGIC, posteriormente llamadas DNIC, (Dirección Nacional de Investigación Criminal), a la DPI (Dirección de Investigación Policial), a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y demás instancias que fuese necesario, como ser Juzgados de Letras de Nacaome y Choluteca, observando nosotros los familiares en dichas instituciones la complacencia e inoperancia de las autoridades estatales encargadas de la aplicación de la justicia en nuestro país. Todos estos años ha sido un constante juego de ajedrez en donde nos han obstaculizado el derecho a la justicia.<sup>115</sup>

José Pacheco explicó durante la audiencia como iba constantemente a la Fiscalía, a la DGIC, a la policía y a los juzgados de Nacaome y Choluteca. A pesar que vive en Tegucigalpa, que está a dos horas de Nacaome, pero no obstante iba continuamente a la zona sur del país.<sup>116</sup> Además, los familiares ofrecieron durante todo el proceso su colaboración en lo que fuera necesario para apoyarlos.<sup>117</sup>

El 27 de noviembre, se realizó un acto de confrontación entre Jimy Pacheco, y las tres personas detenidas.<sup>118</sup> Si bien es cierto que Jimy no pudo ver el rostro del hombre que asesinó a su padre, el vio muy bien su silueta y corpulencia. Así que tres días después de la muerte, Jimy pudo afirmar con certeza que ninguno de los detenidos era el asesino material.<sup>119</sup> Ninguno tenía la silueta y corpulenta del asesino. Además, Jimy atestiguó que el vehículo decomisado no era el mismo que vio la noche fatídica del 23 de noviembre 2001.<sup>120</sup>

No obstante la falta de reconocimiento de los encausados y del vehículo por parte del único testigo del asesinato, las autoridades siguieron enfocando sus investigaciones en esas tres personas durante los primeros años del proceso. El caso se cerró en mayo 2003 cuando la Corte de Apelación confirmó la revocatoria “por considerar que no existen indicios racionales de quién o quiénes sean los

<sup>115</sup> Testimonio por Afidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>116</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>117</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Testimonio por Afidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>118</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Oficio del Juzgado. Folio 73. Anexo a la comunicación de los peticionarios recibida por la CIDH el 27 de agosto de 2004.

<sup>119</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>120</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Oficio del Juzgado. Folio 73. Anexo a la comunicación de los peticionarios recibida por la CIDH el 27 de agosto de 2004.

autores del hecho”<sup>121</sup>. Este enfoque de parte del Estado de Honduras en esas personas no era justificado y generó una pérdida de tiempo valioso, desviando la atención sobre otros sospechosos, contra quienes había muchas más pruebas y motivos.

Precisamente, desde los primeros días, con la toma de declaración de familiares, amigos y de personas que trabajaron con el Señor Ángel Pacheco en su Campaña, se conoció que había sido amenazado en varias ocasiones durante su campaña. Unos de los declarantes eran los confidentes del Señor Pacheco, mientras otros fueron testigos de esas amenazas y presiones.

Un informe de investigación de diciembre 2001 confirma que las autoridades tenían conocimiento de esas pistas tras tomar declaraciones, afirmando que Ángel Pacheco León “en varias ocasiones fue amenazado de muerte por personas del mismo partido al cual pertenecía” y que “en varias ocasiones interceptaron a la víctima y lo amenazaron de muerte”.<sup>122</sup> Además, el informe señala: “según versiones dadas por algunos testigos que temen se les tome declaración por escrito por temor a perder su vida, existe un grupo de personas que fueron los que planificaron la muerte del señor Ángel Pacheco León un día antes del hecho” este grupo incluyó agente estatales y posiblemente un agente de la policía preventiva<sup>123</sup>

De acuerdo con los testigos, Rafael Leonardo Callejas, ex Presidente de la Republica, su padre Rafael Callejas Valentine; Benjamín Cárdenas, ex diputado; Salvador Cárdenas, miembro de las Fuerzas Armadas; Raúl Pino, ex diputado y entonces candidato a diputado suplente; Manuel Vides, entonces diputado; Juan José Quiroz entonces alcalde de Amapala, departamento de Valle; Wilfredo Cárdenas; y Jorge Berrios, ex diputado, presionaron y algunos de ellos amenazaron a Ángel Pacheco León.<sup>124</sup> El informe de noviembre de 2001 identifique ya la mayoría de ellos como posiblemente involucrado en el crimen y un informe de febrero 2002 de la DGIC alarga la lista de agentes estatales sospechosos.<sup>125</sup> Los informes hacen

<sup>121</sup> Anexo 4 al informe de fondo CIDH. Comunicación de los peticionarios entregada en audiencia ante la CIDH el 30 de octubre de 2014.

<sup>122</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-125 del expediente judicial.

<sup>123</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-125 del expediente judicial.

<sup>124</sup> Según las varias declaraciones de testigos en el expediente judicial.

<sup>125</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-126 del expediente judicial. Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

referencias a varios eventos relatado por testigos que dan indicios sobre los individuos posiblemente involucrados y sobre el posible móvil político del asesinato.<sup>126</sup> Por ejemplo, tenían la información de un testigo quien declaró sobre los hermanos Cárdenas afirmando que “pudieran estar involucrados en el hecho; ya que con estos señores la víctima mantuvo problemas personales por la política”.<sup>127</sup> .

No obstante las varias pruebas, pistas e indicios involucrando agentes estatales, nunca el Estado de Honduras investigó de manera seria esta línea de investigación. Si bien es cierto que los investigadores tomaron muchas declaraciones, y tomaron declaraciones de algunos de los sospechosos intelectuales, no todos fueron interrogados. Además, los investigadores no realizaron confrontación de las declaraciones, solo se las tomaron como mero trámite. No se observa que realizaron diligencias investigativas para dar seguimiento a esas declaración o para encontrar elementos corroborativos de lo que fue declarado.

El otro trámite que ejercieron fue el allanamiento en enero de 2002, de las casas de los hermanos Cárdenas y de Jorge Berrios, donde encontraron varias armas<sup>128</sup> y practicaron un examen de balística sobre una sola arma que tenía características similares a la del crimen.<sup>129</sup> Pero esas actuaciones no representaron el inicio de una práctica diligente que pudiera haber identificado a los responsables de la muerte de Ángel Pacheco León y no hubo otras diligencias para investigar los otros sospechosos. El Estado no realizó diligencias orientadas a conocer la planificación del crimen, no ordeno un vaciado de los teléfonos de cada uno de los sospechosos, no se solicitó un registro de sus automóviles ni de las armas registradas a su nombre.

Además, desde los primeros informes de la DGIC<sup>130</sup>, un agente policial, Santos Lorenzo Mendoza, fue identificado como el posible autor material del asesinato, pero las diligencias para investigar esta posibilidad se limitaron a tomar su declaración años después de los hechos y a un acto de identificación fotográfica

<sup>126</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-126 del expediente judicial. Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>127</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>128</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>129</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>130</sup> Anexo 14 al informe de fondo CIDH, Informe de investigación, de fecha 27 de noviembre de 2002.

con Jimmy Pacheco hasta el mes de mayo del año 2008,<sup>131</sup> o sea 7 años después del crimen.

En varias ocasiones los familiares notaron que cuando un agente del Estado estaba interesado en resolver el caso y a impulsar las investigaciones, esta persona era trasladada a otro lugar.<sup>132</sup> Aún más preocupante es el caso de la Señora Clara Jiménez quien fue coordinadora interina de la DGIC en Choluteca. Ella presentó el informe de 2002 al Director de la DGIC identificando a unos de los sospechosos del asesinato de Ángel Pacheco León.<sup>133</sup> Marleny Pacheco, indico en su declaración por affidavit que Clara Jiménez le informó que no podía continuar trabajando en este caso porque la habían amenazado de muerte si seguía investigando este asesinato.<sup>134</sup>

En el expediente del Señor Ángel Pacheco León, se observan largos periodos de inactividad investigativa. La mayoría de las diligencias se efectuaron entre el año 2001 y los primeros meses del 2002, pero incluso en aquel año importante para la recolección de pruebas, el expediente permaneció inactivo 7 meses. Esto fue confirmado en un informe de investigación del 15 de Julio 2004, el cual indica que la última diligencia fiscal es una solicitud de notificación por cédula” de 13 de febrero de 2002<sup>135</sup>. Por otra parte, los siguientes años casi no se produjeron diligencia, el expediente estuvo prácticamente inactivo.

Cuando el Señor José Pacheco era diputado, solicitó reuniones con varios oficiales a fin de pedir apoyo para que se investigara el caso de su hermano y que no quedara en la impunidad. Él tuvo la oportunidad de reunirse en varias ocasiones con el Fiscal General del Ministerio Público, el Fiscal General adjunto y el Director General de los fiscales.<sup>136</sup> Además, con su madre y tres de sus hermanas, pudo después de mucha insistencia lograr una reunión con el Presidente de La República, Ricardo Maduro, el cual prometió que les ayudaría con la investigación.<sup>137</sup> Una promesa que nunca se cumplió. Todas estas reuniones fueron posibles mientras

<sup>131</sup> Anexo 3, de la Contestación del Estado de Honduras, Folio 36-37.

<sup>132</sup> Testimonio por Affidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>133</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>134</sup> Testimonio por Affidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>135</sup> Anexo 13 al informe de fondo CIDH. Memorandum del Fiscal del Ministerio Público del departamento de Valle, de fecha 15 de julio de 2004.

<sup>136</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>137</sup> Testimonio por Affidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

José Pacheco desempeñaba su rol de diputado, cuando cesó el cargo por nadie más fue recibido.<sup>138</sup>

Observando que las autoridades no estaban llevando la investigación de forma rápida, que no seguían líneas de investigación adecuadas de manera seria e imparcial y que no había resultados concretos, el 6 de julio 2004 los familiares de Ángel Pacheco León solicitaron la intervención de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.<sup>139</sup> Esto “por considerar que se les estaba denegando el derecho a la justicia y presentaron denuncia contra los autores intelectuales del asesinato de su hermano”<sup>140</sup>.

Desafortunadamente, tampoco en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos no se observaron resultados y compromiso para seguir la investigación. Una investigación sería e independiente de los poderes políticos y económicos del país.<sup>141</sup> Como lo relató el Señor José Pacheco durante la Audiencia Pública, también a esta Fiscalía iba de manera frecuente para conocer los avances de la investigación. Sin embargo toda esta presión y seguimiento no fue suficiente y no recibían respuesta y veían que la investigación no progresaba.<sup>142</sup>

Durante las visitas que hacían a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, los familiares pudieron observar que el fiscal a cargo del expediente cambiaba constantemente. Cuando solicitaban información sobre los avances del expediente, a menudo el fiscal les respondía que recién le había asignado el expediente y que todavía no lo había leído o estudiado y les pedía tiempo para analizar el caso.<sup>143</sup> A veces ni siquiera sabían dónde estaba el expediente.<sup>144</sup> Con esta efímera actividad de los fiscales, ninguno llegó a conocer a profundidad el caso. Según José Pacheco, llegó a tener aproximadamente entre 12 y 14 fiscales asignado al expediente, y eso solo en la fiscalía de Derechos Humanos.<sup>145</sup>

Los fiscales siempre repetían las mismas diligencias por lo que tuvieron que declarar muchas veces.<sup>146</sup> Como lo mencionó Jimy Pacheco en la Audiencia Pública “ha sido

<sup>138</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>139</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Testimonio por Afidávit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>140</sup> Anexo 4 al informe de fondo CIDH. Comunicación de los peticionarios entregada en audiencia ante la CIDH el 30 de octubre de 2014.

<sup>141</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>142</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>143</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>144</sup> Testimonio por Afidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>145</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

una tortura el estar declarando cada vez que había un cambio de fiscal, cada vez que se le ocurría que yo fuera a declarar”.<sup>147</sup>

Entre los años 2005 y 2010 solo se observaron algunas diligencias aisladas que no contribuyeron a impulsar la investigación. Las acciones realizadas durante esos años se resumen a informes que reafirman las prácticas de los primeros meses y que contemplan todavía los mismos sospechosos.<sup>148</sup>

En un informe de 2010 el Fiscal Osmin Álvaro Duran Paz recuerda que el equipo de investigación de la DNIC fue desintegrado seis años atrás, “no interesándose posteriormente ni actualmente por resolver el mismo por tal motivo las investigaciones han permanecido estancadas”<sup>149</sup>. Además, en su oficio el Fiscal solicita que se le asigne un equipo especial de investigadores y técnicos para este caso.<sup>150</sup>

En marzo 2014 la fiscalía especial de derechos humanos trato de iniciar nuevas prácticas en el expediente e hicieron una gira en las ciudades de Choluteca y Nacaome donde se tramito en un inicio el caso. Pero esa nueva iniciativa no impulsó seriamente la investigación. La negligencia del Ministerio Público llegó a tal punto que el día 10 de octubre de 2014 una fiscal activó la práctica de una diligencia destinada a tomar la declaración de un testigo que ya había fallecido.<sup>151</sup>

En 2015 José Pacheco se reunió con el Director de la ATIC para pedir, como lo había solicitado, el Fiscal Osmin Álvaro Duran Paz, que se formara un equipo especial de investigación para que se investigue el caso de su hermano.<sup>152</sup> El Fiscal también reiteró su petición en un informe de 2015, pero nunca fue aprobada.<sup>153</sup>

---

<sup>147</sup> Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>148</sup> Ver expediente judicial.

<sup>149</sup> Anexo 21 del ESAP: Expediente administrativo del Ministerio Publico, obra el informe remitido por el Fiscal Titular Osmin Alvarado Duran Paz.

<sup>150</sup> Anexo 17 al informe de fondo CIDH. Comunicación al Coordinador Regional de la Fiscalía de la zona sur, de fecha 1 de marzo de 2010. Anexo a la comunicación de los peticionarios de 13 de marzo de 2013.

<sup>151</sup> Estado de Honduras, Contestación al escrito de demanda interpuesto por la CIDH en contra del Estado de Honduras y al ESAP, 05 de Julio 2016.

<sup>152</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>153</sup> Anexo 2 de la Contestación del Estado de Honduras, Folio 390.

Las mismas autoridades estatales admitieron que las diligencias eran insuficientes para la investigación. En una correspondencia entre el Fiscal del Ministerio Público Osmin Álvaro Duran Paz y el Director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del 9 de junio 2015, el Fiscal mencionó que “En cuanto a los datos acreditados en el voluminoso expediente judicial le puedo informar que estos no aportan nada ya que solamente obran testimonios y pruebas evacuadas referente a las personas que se les detuvo al día siguiente al asesinato, las cuales fueron sobreseídos posteriormente.”<sup>154</sup>

Otro problema significativo en este caso es la negligencia en la conservación y el cuidado de las pruebas. Esto fue confirmado por agentes del Estado, cuando una trabajadora del Ministerio de Seguridad y un asesor médico forense del Poder Judicial, comparecieron el 7 de diciembre 2001 ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle<sup>155</sup>. Estos manifestaron que en el caso de Ángel Pacheco León, no se siguió la cadena de estudios hematológicos de sangre conforme a la legislación interna, así como los pasos para el embalaje de las evidencias sometidas.<sup>156</sup>

La negligencia fue tal que se perdieron las muestras de sangre del Señor Ángel Pacheco León obtenidas en su autopsia<sup>157</sup> y tuvieron que exhumar su cuerpo, cuatro años después el 16 de Septiembre de 2005, para tener nuevas muestras<sup>158</sup>. No obstante el Estado presume en su contestación “que, si bien no apporto evidencia significativa en el sentido que no coincidió con las muestras encontradas, demuestra la realización de actividades investigativas complejas.”<sup>159</sup> Cuando realmente era una gestión que debió realizar años antes. La exhumación del cuerpo de Ángel Pacheco provocó un sufrimiento adicional e inútil a los familiares.

Más de quince años después del brutal asesinato del Señor Ángel Pacheco León, el expediente se encuentra todavía en estado de investigación. Los indicios vinculando agentes estatales al crimen han sido investigados y los asesinos siguen viviendo en total impunidad.

<sup>154</sup> Anexo 2 de la Contestación del Estado de Honduras, Folio 390.

<sup>155</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Comparecencia. Emisión de dictamen de 7 de diciembre de 2001.

<sup>156</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Comparecencia. Emisión de dictamen de 7 de diciembre de 2001. Folios 2-3.

<sup>157</sup> Anexo 16 al informe de fondo CIDH. Oficio del Laboratorio Criminalística y de Ciencias Forenses de la Dirección de Medicina Forense, de fecha 9 de mayo de 2005.

<sup>158</sup> Anexo 11 del Informe de Fondo CIDH, Informe de la Secretaria de Relaciones Exteriores De la Republica de Honduras, Oficio No.620-DGAE-07, par. 5.

<sup>159</sup> Estado de Honduras, Contestación al escrito de demanda interpuesto por la CIDH en contra del Estado de Honduras y al ESAP, 05 de Julio 2016.

**B. Alegatos de Derecho:**

**La responsabilidad del Estado de Honduras por la violación a los derechos humanos de Ángel Pacheco León y Familia.**

En el presente caso, a través de las pruebas documentales, testimoniales y periciales, presentadas por la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por esta representación, ha quedado demostrado que el Estado de Honduras es responsable por la violación del derecho a las garantías y protección judicial en perjuicio de Ángel Pacheco León, en relación con sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 CADH) y de adecuar su ordenamiento interno (artículo 2 CADH).

**1. La Corte Interamericana ha establecido que existe una necesaria interrelación entre las garantías procesales y la tutela judicial efectiva, derechos garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, respectivamente. De acuerdo con la jurisprudencia interamericana.**

Los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1)<sup>160</sup>.

En consecuencia, la normativa establecida en ambos artículos le confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que las graves violaciones a sus derechos humanos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales; se siga un proceso judicial efectivo contra los responsables de estos ilícitos; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido.<sup>161</sup>

En el Presente caso hasta la fecha no existe una investigación que corresponda a los autores materiales del asesinato; tampoco una investigación dirigida a los autores intelectuales, no obstante, pese a existir indicios en relación con la autoría intelectual, ninguna persona ha sido debidamente investigada y sancionada en por el asesinato de Ángel Pacheco León.

<sup>160</sup> Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91.

<sup>161</sup> Corte IDH. *Las Palmiras Vs. Colombia*. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 65.



Como lo señaló el perito Joaquín Mejía “no es suficiente que el Estado garantice la mera existencia de un orden normativo, sino que es necesario “que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” <sup>162</sup>. Es decir, que toda persona debe tener acceso a un recurso sencillo y rápido ante jueces o tribunales competentes que amparen sus derechos fundamentales<sup>163</sup>. Además, como igualmente ha señalado el Tribunal, “[n]o pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.<sup>164</sup>”

### 1.1 Debida diligencia

El perito Joaquín Mejía desarrolló en su informe pericial, sobre la obligación del Estado de Honduras de investigar con la debida diligencia:

“Para que sea efectiva, la investigación debe realizarse con la debida diligencia que implica que la conducta del Estado debe reflejar su esfuerzo y voluntad política para conocer la verdad de lo sucedido. En este sentido, los parámetros de la debida diligencia en la investigación de violaciones a derechos humanos constituyen un estándar esencial para evaluar si un Estado ha cumplido satisfactoriamente con su obligación de garantizar tales derechos o si por el contrario muestra algún tipo de tolerancia frente a su vulneración. Actuar con la debida diligencia “supone atender una serie de pautas de cuidado, eficiencia, rigurosidad, minuciosidad, prontitud, agilidad y eficacia al momento de llevar a cabo las investigaciones”<sup>165</sup>. De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, la debida diligencia supone que una investigación debe desarrollarse siguiendo un plan de investigación

<sup>162</sup> Corte IDH, *Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras*, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166-177; Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par.5.

<sup>163</sup> Corte IDH. *Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 126; Corte IDH. *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 112; y Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre 2001. Serie C No. párr. 191.

<sup>164</sup> Corte IDH. *Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 126; Corte IDH *Caso Las Palmeras Vs Colombia.*, párr. 58; y *Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 112; párrs. 113-114.

<sup>165</sup> GALVIS PATIÑO, María Clara, *Guía práctica de pruebas para las investigaciones disciplinarias por graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario*, Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, Colombia, junio de 2010, p. 53.

previamente definido sin que exista espacio para la improvisación, ya que cada acto del Ministerio Público “que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”<sup>166</sup>. Por tanto, la debida diligencia en la investigación de violaciones a derechos humanos es fundamental para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.<sup>167</sup>

Esto significa, según los estándares internacionales desarrollado por esta Corte, que una investigación debe realizarse con los principios de oficiosidad, oportunidad, competencia, idoneidad, independencia e imparcialidad, exhaustividad, plazo razonable y participación de las víctimas y sus familiares.<sup>168</sup>

## 1.2 Actuaciones iniciales

Desde los primeros momentos después del asesinato de Ángel Pacheco León, encontramos fallos en la investigación del crimen. Como lo mencionó Jimy Javier Pacheco en la audiencia, cerca de la casa donde su padre murió estaba unas patrullas policiales y a pesar de los numerosos disparos y de la huida a toda velocidad de los asesinos, no les detuvieron ni los persiguieron.<sup>169</sup> De acuerdo con el principio de oficiosidad “la investigación debe desarrollarse de oficio por parte de las autoridades competentes, ya que es una obligación estatal iniciar *ex officio* una investigación seria y efectiva de los hechos en cuanto toma conocimiento de una grave violación de derechos humanos”.<sup>170</sup> La inacción y pasividad de la patrulla policial, obligada a actuar de forma preventiva y reactiva demuestra una falta total de oficiosidad.

La debida diligencia tiene que estar presente desde las primeras actuaciones, una falta de eficiencia, oportunidad y acuciosidad puede provocar la pérdida de pruebas esenciales, y afectar toda la investigación.<sup>171</sup> Esto es particularmente importante

<sup>166</sup> Corte IDH, *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 10 de julio de 2007, párr. 131.

<sup>167</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par.14.

<sup>168</sup> Peritaje Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia 23 de marzo 2017, Corte IDH; Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par.15.

<sup>169</sup> Testimonio Jimy Javier Pacheco, Audiencia 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>170</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par.15.

<sup>171</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par.16.

“cuando se está frente de un hecho que le ha costado la vida a una persona”<sup>172</sup>. En este caso desde los primeros instantes el Estado demostró una falta de debida diligencia.

Cuando se trata de una muerte violenta, una herramienta que permite examinar las diligencias investigativas, particularmente en las primeras etapas es el “Manual sobre la Prevención e Investigaciones Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o sumarias”<sup>173</sup> (Protocolo de Minnesota).<sup>174</sup> Como indicó el perito Alejandro Ramelli Arteaga, es un instrumento técnico que ayuda a medir el cumplimiento de los estándares internacionales en una investigación.<sup>175</sup> Además, la Corte afirmó que debe tomarse en cuenta este Manual para orientar las diligencias.<sup>176</sup> Si bien es cierto que el instrumento no es vinculante<sup>177</sup> la Corte IDH se basó en varios casos en los criterios promulgados en este manual.<sup>178</sup>

La Corte IDH tomando en cuenta los criterios del Manual afirmó que:

(...)las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma

<sup>172</sup> Corte I.D.H., *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*, Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 167.

<sup>173</sup> Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, E/ST/CSDHA/.12 (1991).

<sup>174</sup> Informe pericial Alejandro Ramelli Arteaga, 23 de marzo 2017, p.11, Informe de fondo CIDH, par.85.

<sup>175</sup> Peritaje Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>176</sup> Corte I.D.H., *Caso Servellón García y otros Vs. Honduras*. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 120.

<sup>177</sup> Informe pericial Alejandro Ramelli Arteaga, 23 de marzo 2017, p.11, Informe de fondo CIDH, par.85.

<sup>178</sup> Corte I.D.H., *Caso Servellón García y otros Vs. Honduras*. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 120.; *Caso Montero Aranguren y otros*, Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 140; *Caso Ximenes Lopes*, Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 179; *Caso de las Masacres de Ituango*, Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 298

rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados<sup>179</sup>.<sup>180</sup>

Según el perito Joaquín Mejía “Cuando una investigación criminal no se realiza de manera inmediata el Estado incurre en una violación de su deber de actuar diligentemente, ya que se impiden actos fundamentales como la oportuna preservación y recolección de la prueba o la identificación de testigos oculares<sup>181</sup>”.

En el caso, los agentes estatales cometieron una serie de errores y omisiones graves al no cumplir con los requisitos mínimos, por ejemplo el artículo 33 de la ley del Ministerio Público (Decreto No.228-93 de 1993) manda que se presenten de inmediato al lugar del crimen<sup>182</sup>, la noche del asesinato, no hubo ninguna presencia en el lugar del crimen por parte de agentes de investigación o del Ministerio Público.

No fueron capaces seguir la cadena de custodia de todo el material probatorio relacionado con la muerte. Como reconoce el médico forense Dennis Castro Bobadilla y la forense Olga Parham<sup>183</sup>, la escena de crimen fue contaminada, entre otros, pisadas de calzado en manchas de sangre<sup>184</sup>. Una situación poco sorprendente si tomamos en cuenta que el técnico Carlos Roberto Rodríguez y su asistente Lucio Merlo, llegaron casi 14 horas después del asesinato (1:15 p.m.) Tampoco se aseguró la escena del crimen, no contaba con medidas de protección en este lapso de tiempo que transcurrió entre antes de la media noche del 23 y la tarde del día 24 de noviembre.

Además, “con respecto al principio de competencia, las investigaciones deben realizarse de manera rigurosa por profesionales competentes y utilizando procedimientos apropiados<sup>185</sup>.”<sup>186</sup> Los hechos de este caso no demuestran una

<sup>179</sup> Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 127; Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 106, y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 121.

<sup>180</sup> Corte IDH. Caso Kawas-Fernández Vs. Honduras. Op. Cit. párr. 102.

<sup>181</sup> Corte IDH, *Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Fondo. Reparaciones y Costas*, Sentencia de 4 de julio de 2006, párr. 189.

<sup>182</sup> “Serán atribuciones y deberes de los agentes de Tribunales del Ministerio Público (...) hacerse presente de inmediato en el lugar en que se haya cometido un delito (...) con el fin de informarse en la escena del crimen”.

<sup>183</sup> Folio 107 del Expediente Judicial e informe de Rosa Galo de 30 de abril de 2013. informe de fondo CIDH. párrafo 89.

<sup>184</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Declaración de Carlos Rodríguez, de fecha 6 de diciembre de 2001. Folios 81-82 del proceso judicial.

<sup>185</sup> Corte IDH, *Caso Ximenes Lopes vs. Brasil... op. cit.*, párr. 96.

<sup>186</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par.17.

competencia y rigurosidad. Por ejemplo según las declaraciones de diciembre 2001 de una agente del Ministerio de Seguridad y un médico forense del Poder Judicial, en el caso de Ángel Pacheco León, no se siguió la cadena de estudios hematológicos de sangre conforme a la legislación interna, así como los pasos para el embalaje de las evidencias sometidas<sup>187</sup>.

El Estado falló también en cuanto a la preservación de las pruebas. En 2005 se perdieron las muestras de sangre del Señor Ángel Pacheco León obtenidas en su autopsia,<sup>188</sup> por lo cual tuvieron que exhumar su cuerpo cuatro años después de la muerte. Necesitaban nuevas muestras para comparar con evidencias encontradas en el lugar de los hechos<sup>189</sup>. El Estado presume en su contestación “que, si bien no aportó evidencia significativa en el sentido que no coincidió con las muestras encontradas, demuestra la realización de actividades investigativas complejas.”<sup>190</sup> Cuando realmente era una gestión que debió realizar años antes. La exhumación del cuerpo de Ángel Pacheco León provocó un sufrimiento adicional e inútil a los familiares.

“Los hechos del presente caso demuestran que las autoridades hondureñas no observaron los principios rectores que deben guiar las investigaciones de una muerte violenta”.<sup>191</sup>

### 1.3 Falta de línea lógica de investigación

De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, la debida diligencia supone que una investigación debe desarrollarse siguiendo un plan de investigación previamente definido sin que exista espacio para la improvisación.<sup>192</sup> También, las líneas lógicas de investigación deben estar establecidas en base en las pruebas y evidencias<sup>193</sup>. La Corte mencionó en el *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz* “que el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientada hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación,

<sup>187</sup> Anexo 2 del informe de fondo CIDH. Comparecencia. Emisión de dictamen de 7 de diciembre de 2001. Folios 2-3.

<sup>188</sup> Anexo 16 del Informe de fondo CIDH. Oficio del Laboratorio Criminalística y de Ciencias Forenses de la Dirección de Medicina Forense, de fecha 9 de mayo de 2005.

<sup>189</sup> Anexo 11 del Informe de Fondo CIDH, Informe de la Secretaria de Relaciones Exteriores De la Republica de Honduras, Oficio No.620-DGAE-07, par. 5

<sup>190</sup> Estado de Honduras, Contestación al escrito de demanda interpuesto por la CIDH en contra del Estado de Honduras y al ESAP, 05 de Julio 2016.

<sup>191</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par.18.

<sup>192</sup> Corte IDH, *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 10 de julio de 2007, párr. 131.

<sup>193</sup> Informe de Fondo CIDH p.19.

persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.<sup>194</sup>

Este caso se caracteriza justamente por la inexistencia de un plan y de líneas lógicas de investigación. El día después del asesinato las autoridades detuvieron a tres personas.<sup>195</sup> Tres días después de la muerte de su padre Jimmy Pacheco afirmó durante un acto de confrontación que ninguno de los detenidos era el asesino material.<sup>196</sup> Además, el atestiguó que el vehículo decomisado, donde se encontraban dos de los detenidos, no era el mismo que él vio la noche fatídica del 23 de noviembre 2001.<sup>197</sup>

No obstante la falta de reconocimiento de los encausados y del vehículo por parte del único testigo del asesinato, las autoridades siguieron enfocando sus investigaciones en esas tres personas durante los primeros años del proceso. El caso se cerró en mayo 2003 cuando la Corte de Apelación confirmó la revocatoria por considerar que no existía indicio razonable.<sup>198</sup> Este enfoque de parte del Estado de Honduras en esas personas no era justificado y generó una pérdida de tiempo valioso, desviando la atención sobre otros sospechosos, contra quienes había muchas más pruebas y motivos.

Precisamente, desde los primeros días, con la toma de declaración de familiares, amigos y de personas que trabajaron con el Señor Ángel Pacheco en su Campaña, se conoció que había sido amenazado en varias ocasiones durante su campaña, incluso por parte de agentes estatales. Un informe de investigación de diciembre 2001 confirma que las autoridades tenían conocimiento de esas pistas tras tomar declaraciones, los declarantes establecieron como sospechosos de las reiteradas amenazas a: Raúl Pino, Benjamín Cárdenas, Juan José Quiroz, Manuel Vides, Ery Sargot Mejía, Jorge Berrios, Salvador Cárdenas, Wilfredo Cárdenas. Afirmando que Ángel Pacheco León “en varias ocasiones fue amenazado de muerte por personas del mismo partido del cual pertenecía” y que “en varias ocasiones interceptaron a la

---

<sup>194</sup> Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, Excepción Preliminar sentencia de 10 de julio de 2007, Serie C No.167, párr. 131.

<sup>195</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe Especial de la de la Dirección General de la Policía Preventiva, de fecha 25 de noviembre del 2001. Folios 119-120; Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Declaración de Wilmer Marte. Folio 9; y Anexo 22 al informe de fondo CIDH. Auto de prisión en contra de Jerhing Maldonado del Juzgado de Letras Seccional. Folio 37.

<sup>196</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>197</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Oficio del Juzgado. Folio 73.

<sup>198</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-125 del expediente judicial.

víctima y lo amenazaron de muerte”.<sup>199</sup> Además, este informe identifica a algunos agentes estatales posiblemente involucrados en el crimen y un informe de febrero 2002 de la DGIC alarga la lista de agentes estatales sospechosos.<sup>200</sup> Lo que significa que desde los primeros momentos tenían esta pista. No obstante a las pruebas e indicios que involucraban agentes estatales, nunca el Estado de Honduras investigo de manera seria esta línea de investigación. Es más ignoró la información proporcionada por la Agente de Investigación Clara Jiménez, sobre que el autor material del delito era el Policía Santos Lorenzo Mendoza.

Como lo afirmó esta Corte en el *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras* cuando se recela indicios de participación de agentes estatales en una muerte violenta “la investigación iniciada debía ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma”.<sup>201</sup>

Todas las amenazas y los actos de hostigamiento que sufrió el Señor Ángel Pacheco León tuvieron lugar en un contexto electoral. Los testigos afirmaron en sus declaraciones a las autoridades investigativas que Ángel Pacheco era amenazado por su participación política. Sin embargo, en ningún momento las autoridades investigaron con seriedad esta línea lógica o hipótesis de investigación en relación a la candidatura del Señor Pacheco.

La Corte ha afirmado:

En el cumplimiento del deber de investigar en casos como el de autos, no basta el conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar, según corresponda, el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron y, en su caso, lo diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen (beneficiarios), pues ello puede permitir, a su vez, la generación de hipótesis y líneas de investigación; y un análisis de la escena del crimen, testigos, y demás elementos probatorios. En consecuencia, en casos como el de esta causa, no se trata sólo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un

<sup>199</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-125 del expediente judicial.

<sup>200</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>201</sup> Corte IDH. *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 2009. Serie C No. 196, párr. 96.

contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operación<sup>202</sup>.

Sin embargo como lo aseveró el perito Joaquín Mejía:

A pesar de los antecedentes de amenazas contra la vida de la víctima y de las declaraciones que vinculaban como responsables del crimen a diputados, altas autoridades del Partido Nacional y a agentes estatales, no se establecieron líneas lógicas de investigación con base en dichas evidencias, con el fin de conocer las estructuras de poder que planificaron, promovieron y permitieron el asesinato del señor Pacheco León<sup>203</sup>.

No se siguieron las líneas de investigación involucrando agentes estatales, no tomaron en cuenta el contexto y no trataron de conocer las estructuras de poder que lo permitieron. No trataron realmente de encontrar los autores intelectuales.

Entendemos que los investigadores han tomado al menos 50 declaraciones<sup>204</sup>. Si bien es cierto que los investigadores tomaron muchas declaraciones, y tomaron declaraciones de algunos de los sospechosos intelectuales, no todos fueron interrogados y tampoco se tomaron todas las declaraciones de los miembros de la familia Pacheco o de colegas de la víctima. En cuanto a las declaraciones que si tomaron, los investigadores no realizaron confrontación de las declaraciones, solo se las tomaron como mero trámite. No se observa que realizaron diligencias investigativas para dar seguimiento a esas declaración o para encontrar elementos corroborativos de lo que fue declarado.

Como lo aseguró el perito Alejandro Ramelli Arteaga en la audiencia, es verdad que hay una cantidad de declaraciones en el expediente, pero si uno no sabe lo que está preguntando, si las autoridades no siguen una cierta línea de investigación o si preguntan cosas con respuestas previsibles no van a llegar a resultados. El añadió: “obviamente puedes llamar a 200 personas, y las 200 personas no les van a aportar absolutamente nada.”<sup>205</sup>

<sup>202</sup> Corte I.D.H., Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 249, párr. 225.

<sup>203</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017.

<sup>204</sup> Anexo 22 del ESAP: Cuadro resumen de la Fiscalía de Derechos Humanos y Expediente sumario D.G.I.C Choluteca 1605/2001.

<sup>205</sup> Peritaje de Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia 23 de marzo 2017, Corte IDH.



Los criterios de exhaustividad e idoneidad requieren que no se practique pruebas por practicar pruebas.<sup>206</sup> Para cumplir con las obligaciones internacionales, no se puede limitar a una actividad procesal numerosa sino que sea efectiva.<sup>207</sup>

En esta línea el perito Joaquín Mejía declaró en su informe pericial:

Como la acción de investigar es una obligación de medio o comportamiento, no puede considerarse incumplida sólo porque no se produzcan resultados satisfactorios. No obstante, esta obligación “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.”<sup>208</sup>

Otra diligencia que ejercieron fue el allanamiento en enero de 2002, de las casas de los hermanos Cárdenas y de Jorge Berrios, donde encontraron varias armas<sup>209</sup> y practicaron un examen de balística sobre una sola arma que tenía características similares a la del crimen. Pero esas actuaciones no representaron el inicio de una práctica diligente que pudiera haber identificado a los responsables de la muerte de Ángel Pacheco León y no hubo otras diligencias para investigar los otros sospechosos. El Estado no realizó diligencias orientadas a conocer la planificación del crimen, no ordeno un vaciado de los teléfonos de cada uno de los sospechosos, no se solicitó un registro de sus automóviles ni de las armas registradas a su nombre<sup>210</sup>.

Asimismo, desde los primeros informes de la Dirección General de Investigación Criminal, un agente policial fue identificado como el posible autor material del asesinato, pero las diligencias para investigar esta posibilidad se limitaron a tomar su declaración años después de los hechos y a un acto de identificación fotográfica con Jimmy Pacheco hasta el mes de mayo del año 2008, o sea 7 años después del crimen.<sup>211</sup>

<sup>206</sup> Peritaje de Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>207</sup> Peritaje de Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia 23 de marzo 2017, Corte IDH

<sup>208</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par. 8.

<sup>209</sup> Anexo 2. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>210</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de Marzo 2017, par. 16.

Anexo 3, de la Contestación del Estado de Honduras, Folio 36-37.

Las mismas autoridades estatales admitieron que las diligencias eran insuficientes para la investigación. En una correspondencia entre un Fiscal del Ministerio Público y el Director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del 9 de junio 2015, el Fiscal aseguró que “En cuanto a los datos acreditados en el voluminoso expediente judicial le puedo informar que estos no aportan nada ya que solamente obran testimonios y pruebas evacuadas referente a las personas que se les detuvo al día siguiente al asesinato, las cuales fueron sobreseídos posteriormente.”<sup>212</sup>

Es incuestionable, a la luz de la lectura del expediente, que las autoridades hondureñas no condujeron una investigación seria e imparcial, con la debida diligencia que el caso ameritaba, no agotaron todas las líneas lógicas de investigación. Lo cual resulta más grave si se toma en cuenta que hay indicios serios sobre la participación de agentes estatales en los hechos tanto material como intelectual y personalidades de influencia política, que ostentaban poder.

#### 1.4 Inactividad investigativa

La falta de debida diligencia se advierte también por los largos periodos de inactividad investigativa en el expediente y la demora injustificada. La mayoría de las diligencias se efectuaron entre el año 2001 y los primeros meses del 2002, pero incluso en aquel año importante para la recolección de pruebas, el expediente permaneció inactivo 7 meses. Por otra parte, los siguientes años casi no se produjeron diligencias, el expediente estuvo prácticamente inactivo.

Es esta falta de debida diligencia y efectividad la que motivó a los familiares a interponer denuncia en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en el año 2004. Pero al final esta Fiscalía tampoco mostro avances. Entre los años 2005 y 2010 solo se observaron algunas diligencias aisladas que no contribuyeron a impulsar la investigación. Las acciones realizadas durante esos años se resumen a informes que reafirman las prácticas de los primeros meses y que contemplan todavía los mismos sospechosos.

En un informe de 2010 el Fiscal Osmín Álvaro Duran Paz, recuerda que el equipo de investigación fue desintegrado seis años atrás, lo que es compatible con la falta de diligencias que se registran en esos años y afirma que en la DNIC no se interesaron posterior, ni actualmente por resolver el mismo.<sup>213</sup> La actividad de los diferentes fiscales intervinientes en la causa fue prácticamente nula. Se prorrogó en exceso la

<sup>212</sup> Anexo 2 de la Contestación del Estado de Honduras, Folio 390.

<sup>213</sup> Anexo 21 del ESAP: Expediente administrativo del Ministerio Público, obra el informe remitido por el Fiscal Titular Osmin Alvarado Duran Paz.

citación de los testigos propuestos por la familia y en algunos casos, la demora provocó la imposibilidad de producir la prueba, como citar a personas que ya había fallecido<sup>214</sup>.

Como lo afirmó el perito Joaquín Mejía en su Afidávit:

(...) la investigación debe iniciarse de manera inmediata, ser llevada a cabo en un plazo razonable a efecto de esclarecer todos los hechos y sancionar a todos los responsables<sup>215</sup>, y la suspensión de la misma solo es justificable por causas extremadamente graves<sup>216</sup>, y debe ser propositiva. La investigación no puede ser pasiva o consistir exclusivamente en innumerables pedidos de informes. La debida diligencia exige que las autoridades actúen de modo oportuno y de forma propositiva a fin de evitar que se pierdan irremediamente elementos probatorios por el paso del tiempo, o se demore el esclarecimiento de la verdad, la consecución de justicia o las reparaciones<sup>217</sup>.

## 1.5 Protección de la Familia

El Estado de Honduras, además de incumplir sus obligaciones internacionales por la falta de investigación en el asesinato de Ángel Pacheco León, también incumplió por la falta de investigación de las denuncias de amenazas que el Señor José Pacheco interpuso. La Corte afirmó en el Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia<sup>218</sup> que para garantizar un debido proceso el Estado tiene también que proteger testigos y familiares de la víctima de hostigamiento y amenazas.

El Estado confirmó su falta de actuación en una correspondencia de fecha 28 de Julio de 2015, un Fiscal del Ministerio Publico afirma: “En cuanto a las denuncias de amenazas contra familiares del hoy occiso, no obra ninguna diligencia en el

<sup>214</sup> Estado de Honduras, Contestación al escrito de demanda interpuesto por la CIDH en contra del Estado de Honduras y al ESAP, 05 de Julio 2016.

<sup>215</sup> Corte IDH, *Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas*, Sentencia de 1 de marzo de 2005, párr. 65.

<sup>216</sup> Corte IDH, *Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 131.

<sup>217</sup> LEÓN, Gisela de, KRSTICEVIC, Viviana y OBANDO, Luis, *Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humano*, p. 27.

<sup>218</sup> Corte I.D.H., *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 142

expediente administrativo por este delito “. El Señor José Pacheco interpuso siete denuncias por diferentes actos de hostigamiento.<sup>219</sup>

### 1.6 Plazo razonable

En cuanto al plazo razonable, la Corte en su jurisprudencia ha reiterado elementos sobre la razonabilidad de este:

“En relación con la razonabilidad del plazo, este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los responsables<sup>220</sup>. La Corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales<sup>221</sup>, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso<sup>222</sup>.

El Estado sostuvo que el caso ha resultado sumamente complejo y de difícil investigación.<sup>223</sup> Sin embargo la Corte explicó en el *Caso Familia Barrios Vs. Venezuela* que cuando hay individualización de los posibles autores, existen algunos testigos y posibles líneas de investigación, la complejidad no puede estar invocada para justificar el retraso.<sup>224</sup> Como lo mencionó el perito Alejandro Ramelli Arteaga durante la Audiencia Pública “no es un caso tan difícil”.<sup>225</sup> Los principales sospechosos intelectuales y materiales habían sido señalados por los declarantes desde los primeros interrogatorios.

<sup>219</sup> Denuncias: No. 4901, 314.03, 3287, 3370, 11591,3452, ante la Dirección General de Investigación.

<sup>220</sup> Corte IDH. Caso Bulacio Vs Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114; Corte IDH. Caso Tiu Tojin Vs Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 72 y Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 199, párr. 79.

<sup>221</sup> Corte IDH. Caso Genie Lacayo. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero 1997. Serie C No 30, párr. 77; Corte IDH. Caso Suárez Rosero Vs Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 72 y Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 107.

<sup>222</sup> Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155.

<sup>223</sup> Estado de Honduras, Contestación al escrito de demanda interpuesto por la CIDH en contra del Estado de Honduras y al ESAP, 05 de Julio 2016.

<sup>224</sup> Corte IDH, *Caso Familia Barrios Vs. Venezuela*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre 2011. Serie C No.237, par.275.

<sup>225</sup> Peritaje Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia 23 de marzo 2017, Corte IDH.

En cuanto a la actividad procesal de los interesados, desde hace más de 15 años, los familiares de Ángel Pacheco León impulsan y dan seguimiento incansablemente a las investigaciones.<sup>226</sup> En todo momento los familiares asumieron una posición activa, poniendo en conocimiento de las autoridades la información de que disponían y ofreciendo su colaboración en lo que fuera necesario para apoyarlos.<sup>227</sup> En este caso la actividad diligente de los familiares de la víctima contrasta con la negligencia de las autoridades investigativas del Estado.

Finalmente en relación a la conducta de las autoridades judiciales, la negligencia y falta de debida diligencia fue ampliamente expuesto previamente.

Para la familia del señor Ángel Pacheco León, el derecho a la verdad es fundamental y al no haber avanzado las investigaciones en más de 15 años, han afirmado que se les prorrogó su sufrimiento de forma innecesaria.<sup>228</sup>

Según el perito Joaquín Mejía:

A la luz de los hechos del presente caso, los juzgadores no actuaron en forma diligente ni procuraron “la celeridad en la tramitación de los procesos”<sup>229</sup>, y por tanto, las autoridades policiales, fiscales y policiales no cumplieron con su deber de investigar diligentemente conforme a los estándares internacionales en la materia, con lo cual, 16 años de demora en el acceso a la justicia sobrepasa un plazo que pueda considerarse razonable y consecuentemente constituye un factor de denegación de justicia e impunidad(...).<sup>230</sup>

Esta representación también resaltar el hecho de que existió retardo injustificado en dictar diversas resoluciones administrativas que han obstaculizado el avance adecuado de los procesos de investigación como la falta de conformación de un equipo de investigación que reiteradamente ha sido solicitado.

---

<sup>226</sup> Testimonio José Pacheco, Audiencia 23 de marzo 2017, Corte IDH; Testimonio por affidavit Marleny Posadas Pacheco, 23 de marzo 2017.

<sup>227</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Testimonio por Affidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>228</sup> Testimonio por Affidavit, Andrea Pacheco López, 8 de marzo 2017; Testimonio de Jimy Javier Pacheco, audiencia 23 de marzo, Corte IDH; Testimonio por affidavit Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>229</sup> Corte IDH, *Caso Luna López Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 10 de octubre de 2013, párr. 170; Íd., *Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala*, Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 210.

<sup>230</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 23 de marzo 2017, par. 19.

## 1.7 Conclusión

La falta de debida diligencia y voluntad del Estado de Honduras aunado a la negligencia de las autoridades y a la falta de recursos idóneos para el desarrollo de una investigación eficaz, seria y rigurosa constituyen violaciones a las garantías judiciales y la protección judicial. Por lo que el Estado debe de adoptar medidas eficaces orientadas a resolver esta causa estructural de la impunidad.

El Perito Joaquín Mejía Afirмо:

Únicamente cuando se esclarecen todas las circunstancias de la violación a un derecho humano se puede afirmar que el Estado ha proporcionado a las víctimas y a sus familiares un recurso efectivo y ha “cumplido con su obligación general de investigar y sancionar, permitiendo a los familiares de la víctima conocer la verdad”<sup>231</sup>

Conforme a lo previamente expuesto, ha quedado demostrado, a partir de la prueba testimonial y documental y pericial aportada, que se produjo una violación por parte del Estado de Honduras a las garantías judiciales (artículo 8 CADH), y al derecho a la protección judicial (artículo 25), en relación con sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 CADH) y de adecuar su ordenamiento interno (artículo 2 CADH), en perjuicio de los familiares de Ángel Pacheco León.

2. **La responsabilidad del Estado de Honduras por la violación al derecho a la vida (artículo 4 CADH), en perjuicio de Ángel Pacheco León, en relación con sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 CADH) y de adecuar su ordenamiento interno (artículo 2 CADH)**

El derecho a la vida, como lo ha protegido esta Honorable Corte es un “derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos” ya que de “no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido”<sup>232</sup>. El derecho a la vida es, por ende, “el corolario esencial para la realización de los demás derechos”<sup>233</sup>.

En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los Estados tienen la obligación de:

<sup>231</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 23 de marzo 2017.

<sup>232</sup> Corte IDH. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.

<sup>233</sup> Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 110.

(...) garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo. El objeto y propósito de la Convención, como instrumento para la protección del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile).

(...) El cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción<sup>234</sup>.

En razón de lo anterior, el Estado de Honduras debe adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y proporcionar reparación por la privación de la vida<sup>235</sup>. Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar todas violaciones de los derechos reconocidos por la Convención<sup>236</sup>. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido expresamente al vínculo existente entre la violación del derecho a la vida y la carencia de una investigación efectiva, ya que una de las condiciones necesarias para garantizar efectivamente el derecho a la vida constituye el deber por parte del Estado de investigar las afectaciones al mismo.

La Corte ha señalado en este sentido que:

“La obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, contiene la obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado [...]”<sup>237</sup>

<sup>234</sup> Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 79-80 y Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 152

<sup>235</sup> Corte IDH. Convención Americana sobre Derechos Humanos; Anotada y concordada con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana. Astillo Víquez Fernando, Rodríguez Loaiza Olman y Arguedas Rodríguez Graciela – Heredia, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2013. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31024.pdf>, pagina 82.

<sup>236</sup> Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166

<sup>237</sup> Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 88.

Este deber de “garantizar” los derechos implica la obligación positiva de adopción, por parte del Estado, de una serie de conductas, dependiendo del derecho sustantivo específico de que se trate. En casos de muerte violenta como el del presente caso, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por este tipo de situaciones<sup>238</sup>.

## 2.1 Honduras incumplió sus obligaciones internacionales en relación con una efectiva garantía del derecho a la vida.

Esta Corte, afirmó en relación a la protección del derecho a la vida:

En particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos (...), una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.<sup>239</sup>

Esta Corte afirmo también que, “cualquier carencia o defecto en la investigación que perjudique la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida<sup>240</sup>. Lo que significa que la realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental del derecho a la vida.

Además, cuando se colige la participación de agentes estatales, “la investigación iniciada debía ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma”<sup>241</sup>. Así que la obligación de investigar se debe tomar con especial diligencia cuando hay indicios de participación de agentes estatales afín de poder analizar con rigurosidad esta posibilidad.<sup>242</sup>

<sup>238</sup> Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 2009. Serie C No. 196, párr. 95.

<sup>239</sup> Corte IDH, *Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia*, par. 143

<sup>240</sup> Corte IDH, *Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costa*, Sentencia de 6 de abril 2006, párr. 97.

<sup>241</sup> Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 2009. Serie C No. 196, párr. 96.

<sup>242</sup> *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 2009. Serie C No. 196, Par. 96



Con base en lo anterior, en el presente caso el deber de investigar debía ser observado con especial diligencia y seriedad, debido:

Ha sido probado y no controvertido que Ángel Pacheco León fue asesinado el 23 de noviembre del año 2001. A las 11:45 p.m. por un sujeto armado, presuntamente un policía. Que el crimen fue planificado y coordinado por un grupo de políticos tradicionales entre los que se encontraban dos diputados y un alcalde, un ex miembro de las fuerzas armadas y un ex diputado.

- a. La muerte violenta de Ángel Pacheco, ha estado cargada de errores y omisiones en las primeras diligencias, así como a la falta de acción contra las personas señaladas como autores intelectuales y eventual sanción de los responsables, y también debido a la no investigación e implementación de medidas de protección a favor de la Familia de Ángel Pacheco León que han sido víctimas de amenazas a muerte y hostigamiento como consecuencia de la demanda de justicia. Denuncias han sido conocidas por el Estado a través de sus órganos de investigación.

La planeación y ejecución de Ángel Pacheco no habría podido consumarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores de la estructura policial. Estructura que tiene la obligación de Proteger el derecho de los ciudadanos especialmente del derecho a la vida. Varios testigos a lo largo del proceso han relatado que se encontraba cerca una patrulla policial que no realizo acción alguna no obstante que los hermanos Pachecos les solicitaron apoyo en la línea que persiguiera los asesinos<sup>243</sup>.

El asesinato del señor Pacheco fue un asesinato selectivo, de carácter político, las autoridades de investigación conocieron desde el inicio las rivalidades políticas que había generado la candidatura a primer Diputado de Ángel Pacheco, en el departamento de Valle, conocieron los posibles niveles de involucramientos, tenían claro y no siguieron una línea de investigación de las estructuras políticas, la motivación para el asesinato, no identificaron las autorías, intelectuales, materiales y las complicidades.

La autoría material, importante porque se señala a un agente de la seguridad del Estado, pero no era el principal beneficiado con el asesinato eran los grupos elites nacionales y locales como lo ha señalado Pedro Canales en su declaración por Afidávit<sup>244</sup>. Raúl Pino y otros tenían el poder en Valle, y como desde Callejas, en 1990, no había otro Presidente nacionalista, si Maduro era Presidente reforzarían y ampliarían su poder en Valle.

<sup>243</sup> Declaración en Audiencia Pública de 23 de marzo de Jimmy Pacheco.

<sup>244</sup> Testimonio de Pedro Canales Torres, 03 de marzo de 2017.

El asesinato de Ángel Pacheco estaba orientado a retribuir a las elites políticas caudillistas el liderazgo perdido. El Perito Alejandro Ramelli, en la Audiencia Pública explico, al mes de los hechos la DGIC, conocía que los señores Benjamín Cárdenas, Manuel Vides, y Salvador Cárdenas habían amenazado a la víctima y presuntamente habían planeado su muerte el día anterior en un restaurante de la Ciudad. No obstante las autoridades a cargo de la investigación no establecieron cual era la conexión entre la policía local y el Partido Nacional.

b. La existencia de indicios sobre la participación o colaboración de agentes estatales.

La falta de diligencia se advirtió aún más en cuanto surgieron indicios que involucraban agentes estatales, estos indicios fueron prácticamente ignorados.

Desde las primeras declaraciones de familiares y colegas de Ángel Pacheco León a las autoridades investigativas, brindaron información sobre la presunta participación de agentes estatales, quienes fueron señalados por amenazar y haber hostigado a Ángel Pacheco durante su campaña en relación a su candidatura. Inmediatamente estos fueron considerados como posibles autores intelectuales del crimen en informes investigativos.<sup>245</sup>

No obstante no se establecieron líneas lógicas y oportunas de investigación con base en dichas evidencias, con el fin de establecer si hubo participación de agentes estatales y con el fin de conocer las estructuras de poder que planificaron, promovieron y permitieron el asesinato del señor Pacheco León.

Como ha sido demostrado en el desarrollo de este proceso, en el primer mes de las investigaciones se conoció que el agente de la Policía preventiva asignado a San Lorenzo<sup>246</sup> estuvo posiblemente involucrado.<sup>247</sup> El agente policial Santos Lorenzo Mendoza fue rápidamente<sup>248</sup> identificado como el posible autor material del asesinato. Sin embargo las diligencias para investigar esta posibilidad se limitaron a tomar su declaración años después de los hechos y a un acto de identificación con Jimmy Pacheco hasta el mes de mayo del año 2008, o sea 7 años después del crimen.<sup>249</sup> Nunca el Estado investigó con debida diligencia, la cadena de mando de la policía local y regional, no investigo a los otros agentes estatales sospechosos.

<sup>245</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-125 del expediente judicial; Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>246</sup> Declaración por Afidávit de Pedro Canales Torres, del 03 de marzo de 2017.

<sup>247</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-125 del expediente judicial.

<sup>248</sup> Anexo 14 al informe de fondo CIDH, Informe de investigación, de fecha 27 de noviembre de 2002.

<sup>249</sup> Anexo 3, de la Contestación del Estado de Honduras, Folio 36-37.

A pesar que tomo dos declaraciones al Policía Santos Lorenzo Mendoza. No consta en el expediente que se le haya, decomisado su arma, verificado su ubicación a la hora del crimen, esclarecer porque no actuó la patrulla policial. No se entrevistaron a los superiores jerárquicos de Santos Lorenzo Mendoza, ni se examinaron sus cuentas bancarias. Igual sucedió con los otros agentes estatales como el alcalde de Amapala, Juan José Quiroz; los diputados Manuel Vides y Raúl Pino. A quienes no se les indago correcta y adecuadamente. Practicándoles un vaciado de sus teléfonos, revisando el registro de sus armas, sus conexiones con la policía y su relación con la víctima<sup>250</sup>. Las relaciones e intereses con los liderazgos a nivel nacional del Partido Nacional que habían presionado al Señor Ángel Pacheco a renunciar a su candidatura.

La Corte reconoce que:

(...) en casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos sus responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida. Además, si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado.<sup>251</sup>

Todo lo anterior, ha sido explicado en la parte de violación de las garantías judiciales y del derecho a la protección judicial. En el presente caso, las autoridades judiciales que han adelantado la investigación penal iniciada por el asesinato de Ángel Pacheco han violado el deber de garantizar el derecho a la vida porque después de 15 años, las investigaciones no han sido realizadas de manera seria y exhaustiva son infructuosas. Al no haber sancionado a ninguna persona, el Estado faltó a su deber y creó condiciones propicias que fortalecen un ambiente de impunidad que permiten que se repitan hechos similares<sup>252</sup>.

La Corte reconoce que en esos casos en los cuales las investigaciones tardan tanto:

(...) Los Estados permiten que sea imposible determinar las responsabilidades individuales correspondientes, la Corte considera

<sup>250</sup> Declaración en Audiencia Pública de Alejandro Ramelli Arteaga el 23 de marzo de 2017.

<sup>251</sup> Corte IDH. *Caso Baldeón García Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costa. Sentencia de 6 de abril 2006. Serie C No. 147, párr. 91

<sup>252</sup> Corte IDH. *Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México*. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 388.

razonable otorgar valor probatorio a la serie de indicios que surgen del expediente sobre la participación de agentes estatales en estos hechos, en particular de aquellos manejados por los propios órganos estatales encargados de la investigación que no han sido desvirtuados por el Estado. Concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e ineffectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad por la violación del artículo 4.1 de la Convención.<sup>253</sup>

En 15 años la investigación no se finalizó y en consecuencia a la fecha la Fiscalía no presentó requerimiento fiscal en contra de los responsables. Esta falta de acción del Estado indica dos cosas: una que el Estado no realizó ni colocó a disposición de las víctimas las más elementales herramientas de investigación y falto a su deber de explorar todas las líneas de investigación probables, analizar en su conjunto el contexto de los hechos elaborar una teoría del caso con sus respectivas hipótesis vinculándolas a las personas que si bien es cierto eran contendiente políticos junto a la víctima también eran autoridades del Estado de Honduras obligados a garantizar derechos, entre ellos diputado, policía y alcaldes, no dirigió sus líneas de investigación a identificar los poderes facticos locales sus interés y motivaciones.

El Perito Joaquín Mejía señaló:

En este caso, al no investigar efectivamente la privación del derecho a la vida del señor Pacheco León y no investigar a todos los responsables, especialmente cuando hay evidencia de la participación de agentes estatales, se ha creado un ambiente de impunidad que genera unas condiciones para que se repitan este tipo de hechos.<sup>254</sup>

Resulta claro que en el presente caso, el Estado de Honduras no ha demostrado interés en garantizar el derecho a la vida, cuando los resultados de su actividad investigativa han sido infectivos frente al interés de las víctimas en razón de la justicia.

El Estado de Honduras debe adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y proporcionar reparación por la privación de la vida. Al contestar a una pregunta de esta representación el Perito Alejandro Ramelli, respondió, Honduras debe de cambiar sus protocolos de investigación, hay que capacitar a sus funcionarios en labores de investigación. Cambiar las lógicas y entender que otras ciencias pueden orientar la

<sup>253</sup> Corte IDH, Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, par. 97.

<sup>254</sup> Informe pericial Joaquín A. Mejía Rivera, 13 de marzo 2017, par. 18.

investigación<sup>255</sup>. En su respuesta ante una pregunta de la Comisión Interamericana explico, es fundamental para este caso un análisis de ciencias políticas y el aporte de un politólogo, Reconstruir el contexto político, analizar la importancia del primer diputado, analizar cómo se eligen los candidatos a la luz de las reformas legislativas y el riesgo para las estructuras tradicionales.

En conclusión, el Estado hondureño es internacionalmente responsable por haber permitido la impunidad y por la ausencia de una política pública general, suficiente y efectiva para atender el derecho a la vida de Ángel Pacheco León y por no haber protegido su derecho a la una investigación efectiva de las amenazas que enfrenta su familia por su ejerció del derechos a la justicia.

Conforme a lo previamente expuesto, ha sido demostrado que se produjo una violación por el Estado de Honduras al derecho a la vida en Perjuicio de Ángel Pacheco León (artículo 4 CADH), en relación con sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 CADH) y de adecuar su ordenamiento interno (artículo 2 CADH).

**3. La responsabilidad del Estado de Honduras por la violación a los derechos políticos en perjuicio de Ángel Pacheco León (artículo 23 CADH), en relación con sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 CADH) y de adecuar su ordenamiento interno (artículo 2 CADH)**

Históricamente La clase política hondureña siempre ha sido un grupo exclusivo de elites con intereses propios. En los últimos años se han observado movimientos que aspiran a un cambio de esta situación. Desafortunadamente, muchas personas que intentaron lanzarse a la política a fin de promover cambios a favor de la población han visto sus proyectos de vida interrumpidos abruptamente, como en el caso del Señor Ángel Pacheco León. Un hombre que se atrevió a desafiar las estructuras políticas arraigadas de su región, y lo pago con su vida.

De conformidad con el artículo 23 convencional, la Comisión entendió los derechos políticos como “aquellos que reconocen y protegen el derecho y el deber de todos los ciudadanos de participar en la vida política de su país”<sup>256</sup>. Los titulares de los derechos políticos, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos

<sup>255</sup> Audiencia Pública, 23 de enero de 2016. disponible en <https://vimeo.com/album/4496246>

<sup>256</sup> CIDH. Informe Anual. *Venezuela*. Capítulo IV. 2009, párr. 18. Disponible en: <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.4Venezuela09.sp.htm> .

políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos<sup>257</sup>. Por lo tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación.<sup>258</sup>

Como lo explico el testigo contextual Pedro Canales en su affidavit, el Departamento de Valle era una región controlada por poderes facticos caudillistas y los representantes de estas estructuras e interés se aliaron en contra de Ángel Pacheco. El ex -presidente Rafael Leonardo Callejas alto dirigente del Partido Nacional le dijo en una ocasión a este testigo “no, andas mal, Pacheco no va a llegar”, “Únete al grupo de Raúl porque ellos van a encabezar la política en Valle, y Juan Che en Amapala”.<sup>259</sup> Demostrado el control y monopolio factico de las candidaturas. Un contexto que impidió al Señor Ángel Pacheco León de gozar plenamente de sus derechos políticos.

En un caso similar, el *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Columbia*, amenazas de muerte pesaba sobre la victima por sus posiciones y actividades políticas hasta llegar a su muerte. La Corte declaró que:

Si bien puede considerarse que aún bajo amenazas el Senador Cepeda Vargas pudo ejercer sus derechos políticos (...) ciertamente fue el hecho de continuar ejerciéndolos lo que conllevó su ejecución extrajudicial. Lo anterior, precisamente porque el objetivo de ésta era impedir su militancia política, para lo cual el ejercicio de esos derechos era fundamental. Por ende, el Estado no generó condiciones ni las debidas garantías para que el Senador Cepeda tuviera una oportunidad real de ejercer el cargo para el que fue democráticamente electo. (...)<sup>260</sup>

En atención a lo anterior, la Corte consideró que las amenazas y la desprotección deliberada que enfrentó el Senador Cepeda Vargas, motivadas por su participación en los espacios democráticos a los que tenía acceso, se manifestaron en restricciones o presiones indebidas o ilegítimas de sus derechos políticos, pero también en un quebrantamiento de las reglas del juego democrático. A su vez, al estar reconocido el móvil político del homicidio, la Corte consideró que la ejecución extrajudicial de un oponente por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos

<sup>257</sup> Corte IDH. *Caso Yatama Vs. Nicaragua*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 195.

<sup>258</sup> Corte IDH. *Caso Yatama Vs. Nicaragua*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 195.

<sup>259</sup> Testimonio por affidavit de Pedro Canales Torres, 3 de marzo 2017.

<sup>260</sup> Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Columbia*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo 2010. Serie C No. 213, par. 176

humanos, sino que atenta contra los principios en que se fundamenta el Estado de Derecho y vulnera directamente el régimen democrático, en la medida que conlleva la falta de sujeción de distintas autoridades a las obligaciones de protección de derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente y a los órganos internos que controlan su observancia.<sup>261</sup>

En el presente caso, la ejecución de Ángel Pacheco León y la persecución a su familia tiene como motivación su actividad política. Durante la campaña, Ángel se destacó como un político joven con propuestas novedosas. Era conocido en el departamento de Valle, así como los cambios que estaba realizando en las estructuras políticas arraigadas en la zona con su liderazgo.<sup>262</sup>

Como lo afirmo José Pacheco la situación de persecución y amenazas empezó cuando logró liderazgo en el departamento.<sup>263</sup> Él fue amenazado y presionado en varias ocasiones para que abandonara su candidatura.<sup>264</sup> Por ejemplo, su compañera de hogar quien testifico por affidavit, afirmó que Ángel fue convocado a una reunión con el ex presidente Rafael Leonardo Callejas, quien le pidió que renunciara a su candidatura para dejar el camino libre a Raúl Pino.<sup>265</sup>

Ángel Pacheco León fue hostigado y amenazado durante toda la campana electoral en relación a su candidatura y muchos de los que lo amenazaron eran agentes estatales.<sup>266</sup> Sin embargo, aun con estas amenazas y teniendo temor, Ángel Pacheco León “no quería abandonar la política por el compromiso con las personas que habían confiado en él y que le habían apoyado, sentía que no podía salirse ahora”.<sup>267</sup> Así lo manifestó a su compañera de hogar a quien Ángel le había manifestado que “había conocido lo sucio que era la política en su país.”<sup>268</sup>

Aunque que todavía no había sido electo diputado en el momento de los hechos, él era el favorito, como lo demostró la elección del 25 de noviembre, Ángel ganó la Primera diputación del departamento de Valle con una amplia mayoría de votos, y la confirma la posterior designación de su hermano en su lugar, la población lo quería como su representante y exigió se respetara su voto<sup>269</sup>

<sup>261</sup> Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo 2010. Serie C No. 213, par. 177.

<sup>262</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH; Testimonio de Jimy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>263</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>264</sup> Testimonio José Pacheco, audiencia 23 de marzo, Corte IDH; Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

<sup>265</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

<sup>266</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-125 del expediente judicial; Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>267</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

<sup>268</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017  
estimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

Todos estos indicios dejan poco espacio a la interpretación en cuanto a los motivos del asesinato del Candidato del Partido Nacional, dos días antes de las elecciones generales. Se trata de una ejecución motivada por su participación política. El hecho de seguir con su actividad política lo llevó a su muerte.

Como lo afirmó el perito Alejandro Ramelli Arteaga en la audiencia “El móvil clarísimo de este homicidio es político, digamos que no existe en el expediente de todas las pruebas que yo revisé ninguna señal de que existe otro móvil. El móvil, fuerte, apunta todos los elementos probatorio es el móvil político.”<sup>270</sup>

El Estado de Honduras tenía la obligación de generar las condiciones para que Ángel Pacheco León ejerciera libremente sus actividades políticas en un ambiente sin violencia, sin hostigamientos y sin peligro<sup>271</sup>.

El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que es indispensable que el Estado genere los mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva y como lo indico la Corte en otro caso<sup>272</sup> el derecho político no solo abarca “el derecho a ser elegido, sino además el derecho a tener una oportunidad real de ejercer el cargo para el cual el funcionario ha sido electo.” Una oportunidad que fue arrebatada al Señor Ángel Pacheco León.

Como fue expuesto previamente las amenazas, los actos de hostigamiento y la posterior muerte de Ángel Pacheco León fue por razones políticas, pero nunca las autoridades investigativas siguieron con seriedad y debida diligencia esta línea de investigación. Además, no investigaron adecuadamente la participación de agentes estatales en este crimen político. Pese a que las autoridades les identificaron como sospechosos<sup>273</sup>, jamás profundizaron en sus pesquisas.<sup>274</sup> La falta de investigación de un asesinato político con la posible implicación de agentes estatales es otro factor que permite determinar la violación de los derechos políticos por el Estado de Honduras.

El archivo del expediente y las irregularidades en las investigaciones así como la persecución a sus seguidores indica un patrón de impunidad coincidente con crímenes por razones políticas. Estuvo motivado en sus actividades políticas realizadas en el departamento de Valle, su ejecución presuntamente fue realizada

<sup>270</sup> Peritaje Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.

<sup>271</sup> Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 2009. Serie C No. 196, párr. 74.

<sup>272</sup> Corte IDH, Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, párr.142.

<sup>273</sup> Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 20 de diciembre de 2001. Folios 123-125 del expediente judicial; Anexo 2 al informe de fondo CIDH. Informe de investigación, de fecha 11 de febrero de 2002. Folios 127-129 del expediente judicial.

<sup>274</sup> Peritaje Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH.



por agentes del Estado<sup>275</sup> la vigilancia, planificación y actos previos de quebrantamiento de su voluntad son coincidentes con patrones implementados en años anteriores.

Como lo explico el perito Alejandro Ramelli<sup>276</sup>, el asesinato de Ángel Pacheco León tiene las características de un delito selectivo todo esta concatenado siguieron un guion:

1. Lo trataron de convencer<sup>277</sup> ;
2. Lo amenazaron y persiguieron a sus correligionarios y principales colaboradores.
3. Lo Asesinaron.

El asesinato de Ángel Pacheco representa una violación a sus derechos políticos y constituye un ataque a los valores de un sistema democrático; porque fue ejecutado para impedir su actividad política; para impedirle llegar al Congreso Nacional y para evitar que desarrollara sus planes. Con su muerte se le impidió la oportunidad de seguir contribuyendo en el logro de los objetivos políticos del partido al que representaba, y de su propia proyección política. Ángel Pacheco se había convertido en la Primera fuerza del Partido Nacional en el departamento de Valle. Desde su elección a primer diputado en las primarias, ejercía el cargo de Coordinador de campaña de su partido en el Departamento de Valle.

Su presencia fresca en la política tradicional de Valle amenazó las estructuras establecidas<sup>278</sup>, al reparto de poder burocrático<sup>279</sup>. Existía una red de políticos y policías que respondían a una estructura organizada que planificaron y organizaron la ejecución de Ángel Pacheco. Estructura que se ha visto favorecida con la impunidad propiciada y tolerada por el conjunto de acciones presuntamente investigativas que no han sido coherentes, científicas, técnicas ni suficientes para una debida aclaración de los hechos de esta naturaleza y, en efecto, no han cumplido adecuadamente con el deber de investigar un delito de carácter selectivo.

Las autoridades encargadas de las investigaciones, que fueron rápidamente desmanteladas o trasladadas no lograron, ni intentaron establecer todos los vínculos entre los perpetradores y los autores intelectuales.

Con su muerte se destruyó el movimiento político joven que él representaba, sus correligionarios y colaboradores no pertenecían a las estructuras tradicionales, creían en el Programa de Pacheco.

---

<sup>275</sup> Anexo 23 del ESAP: Informe del 30 de Abril de 2013, de Rosa Galo Macoto Sub Oficial III de investigación en la denuncia 700-2004.

<sup>276</sup> Peritaje Alejandro Ramelli Arteaga, Audiencia del 23 de marzo 2017, Corte IDH

<sup>277</sup> ; Como aseguro, su compañera Blanca Rosa Herrera Rodríguez, en su declaración por Afidavit.

<sup>278</sup> Conformadas, por Rafael Leonardo Callejas Valentine, Manuel Raúl Pino, Benjamín Cárdenas, Juan José Quiroz, Ersi Sargot Mejía, Jorge Berrios y Jorge Berrios.

<sup>279</sup> Declaración por Afidavit de Pedro Canales Torres.

Los simpatizantes y activistas de Ángel Pacheco León abandonaron la actividad política posterior a su muerte. José Alexis Benavides Rivera aseguró al Ministerio Público:

“He sido víctima de amenazas por haber declarado en contra de los que habían amenazado, fue en el Carreto que me amenazó Benjamín Cárdenas cerrojeo el arma 9mm , me dijo que era un soplón un sapo que por qué? me metía, me tuve que venir a mi casa”<sup>280</sup>.

“No gane la Alcaldía era el candidato a Alcalde de caridad, por la corriente de Pacheco, la muerte de Ángel influyó en la perdida, me hicieron una campaña adversa a raíz de su muerte. El jueves en la tarde un día antes de la muerte de Ángel, venia de Caridad y encontré una caravana que asistía a mi velorio, habían regado la bulla que me habían matado”<sup>281</sup>

Las declaraciones de sus más cercanos colaboradores afirman que el movimiento de Pacheco era grande. Solo en San Lorenzo, tenía un núcleo de 50 personas, que se caracterizaban por ser jóvenes, sin contaminación en la política de tradicional de caudillos locales, emprenderos, entre estos empresarios, micro empresarios como cañillitas, y ciudadanos de reconocida honorabilidad.<sup>282</sup>.

Conforme a lo previamente expuesto, y la prueba aportada, queda demostrado que se produjo una violación por el Estado de Honduras a los derechos políticos de la víctima (artículo 23 CADH), en relación con sus obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 CADH) y de adecuar su ordenamiento interno (artículo 2 CADH)

#### **4. La violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Los Familiares de Ángel Pacheco León en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1**

Esta Honorable Corte ha sido constante al señalar que:

[...] los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En este sentido, en otros casos el

<sup>280</sup> Denuncia de José Alexis Benavides Rivera al Ministerio Público. Ver el anexo 1 al informe de fondo.

<sup>281</sup> **Anexo 13:** Testimonio de Guillermo Eloy Bonilla Briceño de fecha de 20 de febrero de 2016.

<sup>282</sup> Entrevistas Realizadas por el Cofadeh a: de Geovany Oliva, Guillermo Eloy Bonilla Briceño, José Federico Cruz Montoya, Martha Esperanza Espinoza Galo. Ver **Anexo 13:** Testimonio de Guillermo Eloy Bonilla Briceño de fecha de 20 de febrero de 2016, **Anexo 25:** Testimonio Geovany Oliva, de fecha de 21 de febrero de 2016, **Anexo 26:** Testimonio José Federico Cruz Montoya, de fecha de 20 de febrero de 2016 y **Anexo 27:** Martha Esperanza Espinoza Galo, de fecha de 20 de febrero de 2016.

Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos<sup>283</sup>.

El artículo 5.1 de la Convención Americana establece que "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral". Con respecto de los familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos, la Corte ha indicado que éstos pueden ser considerados, a su vez, como víctimas<sup>284</sup>. Al respecto, la Corte ha dispuesto que pueden verse afectados en su integridad psíquica y moral como consecuencia de las situaciones particulares que padecieron las víctimas, y de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades internas frente a estos hechos<sup>285</sup>.

En el caso que nos ocupa, los familiares de Ángel Pacheco León, son familiares directos, por lo que debería presumirse su sufrimiento producto del asesinato de su ser querido y de la impunidad en la que estos hechos han permanecido hasta el momento. En este sentido, esta representación ha hecho llegar a la Honorable Corte documentación que comprueba el dolor causado a los familiares de la víctima a raíz de estos graves hechos<sup>286</sup>.

La Comisión considero en su informe de fondo que la pérdida de un ser querido en un contexto como el descrito en el presente caso, así como la ausencia de una investigación completa y efectiva que a su vez ocasiona sufrimiento y angustia de no conocer la verdad, ya constituye en sí misma una afectación a la integridad psíquica y moral de los familiares del señor Pacheco León<sup>287</sup>.

<sup>283</sup> Corte IDH. *Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz v. Perú*. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 112.

<sup>284</sup> Corte I.D.H., *Caso Cantora/ Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. párr. 112; y *Caso Bueno Alves Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C. No. 164. párr. 102.

<sup>285</sup> Corte I.D.H., *Caso Cantora/ Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. párr. 112; y *Caso Vargas Areco Vs. Paraguay*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155. párr. 96

<sup>286</sup> Ver en este sentido los peritajes psicológicos que constan en el expediente. De la Psicóloga Gina Rodríguez y del Psiquiatra Daniel Herrera Salinas.

<sup>287</sup> Informe de Fondo No. 49/15 Párrafo 150. de 28 de julio de 2015.

Esta representación considera demostrada la violación del derecho a la integridad personal de: su madre Andrea Pacheco López; su compañera de hogar Blanca Rosa Herrera; sus hermanos y hermanas: María Otilia Pacheco, Concepción Pacheco, José Pacheco, Francisco Pacheco, Santos Norma Pacheco, Marleny Posadas Pacheco, Blanca Nubia Pacheco, María Regina Pacheco, Elsa Jamileth Almendarez Pacheco, Jaqueline Lizeth Almendarez Pacheco y Jorge Alberto Almendarez Pacheco; sus hijos e hijas: Jimmy Javier Pacheco Ortiz, Miguel Ángel Pacheco Devicente; Cinthia Mirella Pacheco Devicente, Tania Melissa Pacheco López, Juan Carlos Pacheco Euceda y Bianca Gisselle Pacheco Herrera.<sup>288</sup> En razón del sufrimiento :(a), por la muerte de Ángel Pacheco León (b) y por la impunidad en razón de que no se ha realizado una investigación diligente y efectiva de los hechos(c) por las amenazas a muerte de que han sido objeto.

#### **(a) El sufrimiento por la muerte de Ángel Pacheco León**

En el presente caso, adicionalmente a lo expuesto en el ESAP, los familiares de Ángel Pacheco han tenido un fuerte sufrimiento a raíz del asesinato. Es a partir de dicho acontecimiento que la vida de cada uno de ellos cambió radicalmente.

Los familiares de Ángel Pacheco León vivieron un dolor que muchos describieron como inexplicable. Su madre menciona en su testimonio por affidavit “La muerte de Ángel fue para mí como un acortamiento de mi cuerpo. Hay gente que me dicen que entienden mi dolor, pero si uno no pierde un hijo, no sabe nada del dolor de la muerte de un hijo.” “La condición en que murió mi hijo, la clase de muerte que sufrí agrava mi dolor. No lo merecía. Yo siento que mi hijo no descansa.”<sup>289</sup>

Según la perita Georgina Margarita Rodríguez Matute psicóloga:

Para la madre Andrea Pacheco, una señora de la tercera edad la muerte de su hijo Ángel Pacheco fue de las experiencias más dolorosas que aún no logra reponerse, no tenía paz, ni consolación, así como temor por los carros, temía que le mataran los del mismo partido político. Durante este evento no deseaba vivir, fue un momento de desesperación. Esta reacción está relacionada con su edad, ya que las personas de la tercera edad tienen en general menos capacidad de adaptación a situaciones nuevas y que cambian rápidamente. La pérdida de un hijo puede afectarles más debido a su mayor dependencia respecto a la familia y comunidad para tener apoyo.<sup>290</sup>

<sup>288</sup> Identificación de víctimas, Pagina 3 y 4 del ESAP.18 de marzo de 2016.

<sup>289</sup> Testimonio por affidavit de Andrea Pacheco López, del 23 de Febrero de 2017.

<sup>290</sup> Informe pericial, Georgina Margarita Rodríguez Matute, 13 marzo 2017.

Como lo manifiesta la compañera de hogar de Ángel Pacheco León en su affidavit, él tenía una relación muy estrecha con sus seis hijos. Siempre tomaba tiempo para jugar con ellos y apoyarlos en sus estudios. Por lo tanto, la muerte de su padre cambió sus vidas para siempre. El testimonio de Jimmy Pacheco es probatorio del sufrimiento que él y sus hermanos padecieron y a qué punto afectó a su familia en todas las esferas de la vida. Como lo explica la psicóloga Georgina Rodríguez en su peritaje, los hijos enfrentan todavía muchas dificultades vinculadas a la pérdida del ser querido<sup>291</sup>.

Jimmy es el tercer hijo del señor Pacheco, en su caso, los daños psicológicos causados por el asesinato de su papá han sido graves. En el momento de los hechos, él tenía 16 años.<sup>292</sup> Fue testigo del temor de su Papá, por ejemplo escuchó una discusión donde Ángel dijo tener miedo que se acercan los simpatizantes porque entre ellos podría acercarse una persona para hacerle daño o atacarlo. Además, él vio como cambió su padre, que estaba tenso, nervioso y a la defensiva.<sup>293</sup> Jimmy escucho a conocidos advertirle de que se cuidara.<sup>294</sup>

Jimmy fue el único testigo del asesinato de su Papá. El 23 de noviembre 2001, él vio un hombre disparar varias veces hacia su padre Ángel Pacheco León. Él tocó escuchar a su papá ahogarse en su propia sangre.<sup>295</sup>

Jimmy fue también víctima de asesinato en su grado de tentativa. Después de ver al hombre disparar hacia su padre, Jimmy sintió que manipularon el arma hacia él y que intentó dispararle, pero quizás por falta de munición no fue herido por balas.

Como lo mencionó Jimmy durante la audiencia, él tiene todavía un gran sentimiento de culpa que le invade. Él declaró "Me lo pregunto cada día de mi vida.... Si hubiera reaccionado de otra manera, si hubiera cerrado la puerta... qué sé yo... tal vez no estaríamos en la situación que estamos."<sup>296</sup>

La psicóloga Georgina Margarita Rodríguez Matute menciona en su peritaje:

Jimmy el hijo que estuvo presente cuando atacaron a su padre sufrió mucha tristeza e impotencia por no haber podido hacer nada, a pesar de los años y que ahora es un adulto los sentimientos de culpa se mantienen pues no hay

<sup>291</sup> Testimonio por Affidavit de Blanca Rosa Herrera Rodríguez, del 08 de marzo de 2017.

<sup>292</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>293</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>294</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>295</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>296</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

explicación racional que lo libere de la idea de que pudo haber hecho algo para evitar la muerte de su padre, se culpabiliza por no haber podido cerrar la puerta.<sup>297</sup>

Después del crimen, en el hospital, les informaron que Ángel Pacheco León había fallecido. Jimmy afirma que “realmente no lo podía creer”<sup>298</sup>. Él fue a la sala a ver su padre y lo vio “totalmente lleno de sangre”.<sup>299</sup> Como lo relató en la audiencia de manera muy emotiva, él quiso abrazar a su padre, le tocó la frente y solo sintió que su frente se hundió. Él afirmó “es una imagen que no se me puede quitar de la mente hasta el día de hoy”.<sup>300</sup>

### **Sobre las afectaciones a los Hermanos de Ángel Pacheco**

Como lo Explico José Pacheco en su declaración en la Audiencia Pública<sup>301</sup>, eran 12 hermanos, hijos de una madre viuda, Se apoyaban mutuamente y Ángel era el pilar para todos, todos los hermanos y hermanas sufrieron del asesinato del Señor Pacheco. Su muerte, les afectó en lo personal sino que también en el ámbito profesional y familiar de cada uno. Eso incluye daños materiales, amenazas de muertes, persecución y hostigamiento. Algunos se sintieron en peligro<sup>302</sup>. Como Santos Norma que se vio Obligada a salir de Honduras.

La muerte de Ángel Pacheco León tuvo repercusiones muy grave para la familia. Como lo mencionó José Pacheco durante la audiencia, su hermano Ángel era el centro de la familia. Era una persona muy conciliadora y siempre estaba pendiente de la unidad familiar. Él tenía una gran vocación de servicio. Ángel estaba siempre muy pendiente de todos los problemas familiares y se encargaba de encontrar soluciones.<sup>303</sup>

Había jugado un papel muy importante en las vidas de sus hermanos. Después de su mudanza a Tegucigalpa, cuando empezó la empresa, se llevó a algunos de sus hermanos. Les proporcionó alojamiento, alimentos y se aseguró que pudieron estudiar. De la misma manera ayudó a muchos de sus sobrinos.<sup>304</sup> Su fallecimiento

<sup>297</sup> Informe pericial, Georgina Margarita Rodríguez Matute, 13 marzo 2017.

<sup>298</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>299</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>300</sup> Testimonio de Jimmy Javier Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>301</sup> Testimonio de José Pacheco en Audiencia Pública el 23 de Marzo de 2017.

<sup>302</sup> Anexo 16 del ESAP: Testimonio de José Pacheco, de fecha de 8 de julio de 2003.

<sup>303</sup> Testimonio de Jose Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>304</sup> Anexo 7 del ESAP: Testimonio de Andrea Pacheco López de fecha de 20 de febrero de 2016.

impactó fuertemente en los hermanos, nunca han podido ser la misma familia y nunca han tenido la misma unidad que tenían antes del asesinato.<sup>305</sup>

Además, según la psicóloga Georgina Margarita Rodríguez Matute aseguró en su peritaje:

José Pacheco con las responsabilidades asumidas ante la falta de su hermano experimentó tensión y mucha preocupación por cumplirlas efectivamente. Su estado de ánimo frágil, mal humorado, afectado por la tristeza y la injusticia, se sentía desesperado hasta en su casa y con temor de andar en las calles por el riesgo. Aunque el malestar era intenso debido a un estilo personal reservado nunca buscó ayuda profesional. Actualmente los problemas emocionales se mantienen y ha tenido complicaciones físicas que relacionadas con el alto nivel de estrés sostenido durante varios años. Ya sufrió una parálisis en el 2015 en el ojo izquierdo, presión arterial y fue diagnosticado con problemas de presión arterial. Cuando una persona experimenta eventos que pueden recordarle un suceso traumático se produce un malestar psicológico intenso o una reactividad fisiológica, por lo cual José podría haber estado experimentando los efectos del estrés postraumático. Sus síntomas actualmente moderados.<sup>306</sup>

En resumen, el señor José Pacheco, por su trabajo de diputado fue víctima de amenazas persistentes, personas desconocidas siguieron sus hijas en la universidad y violaciones a su vida privada. Todos los hechos fueron denunciados pero no dieron lugar a ningún tipo de protección. Al lado de su trabajo, por seis meses después de la muerte de su hermano, José Pacheco era el responsable de llevar todo lo que necesitaban la esposa de Ángel y los hijos que vivían con ella porque no podían salir de la casa por miedo.<sup>307</sup>

#### **(b) El sufrimiento causado por la impunidad que persiste en el caso**

La psicóloga Georgina Rodríguez afirma que

“la impunidad es vivida por las víctimas como un nuevo impacto traumático. Esta situación genera nuevos daños en unos casos y agudiza o se vuelve crónico en otros, deteriorando aún más la situación de salud mental de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general”. Asimismo, la Corte ha declarado Estados responsable de la violación del derecho a la integridad personal en casos donde existía una falta de investigación<sup>1</sup> porque considera que constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional.<sup>1</sup> La

<sup>305</sup> Testimonio de José Pacheco, Audiencia del 23 de marzo 2017.

<sup>306</sup> Informe pericial, Georgina Margarita Rodríguez Matute, 13 marzo 2017.

<sup>307</sup> Testimonio por affidavit, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, 8 de marzo 2017.

madre de la víctima señaló en su testimonio “El hecho que no hay justicia y que nadie pago por esta muerte hace mi dolor peor aún.”

La falta de investigación, enjuiciamiento y condena de los responsables provoca un clima de impunidad que derrumba el Estado de derecho y la legitimidad de las instituciones democráticas.<sup>308</sup> Asimismo el Dr. Herrera afirmó que la impunidad “genera un efecto paralizante en la sociedad y crea un ámbito de terror”.

Los miembros de la familia de Ángel Pacheco León han experimentado sufrimientos morales, sensaciones de inseguridad, frustración e impotencia frente a la pérdida irreparable de su padre, compañero de Hogar, hijo y hermano, pero además por la impunidad como producto de la tolerancia del Estado<sup>309</sup>.

El Peritaje Psicológico también describe las Frustraciones en el acceso a la Justicia:

“Para la familia el sufrimiento y dolor radica en la violencia sin causa ya que Ángel Pacheco era una persona y político con un incansable espíritu de trabajo, honesto, humilde, su visión política hacia el futuro con cambios a favor del pueblo, contando con la aceptación positiva del pueblo de Valle y que estas cualidades ocasionaran una reacción de odio, envidia frustración y furia en los políticos que pensaban y actuaban diferente a él, “ellos sabían que si mi hermano quedaba como Primer Diputado no iba hacer fácil para ellos continuar con sus negocios ilícitos.

Es muy doloroso para la familia el pensar que ignoraron un riesgo tan grave y que no lo protegieron, “él no nos había hecho saber de estos problemas” lamenta su hermana Concepción.

Ante la percepción que en el departamento de Valle existía conocimiento sobre las personas involucradas en el asesinato de Ángel Pacheco y que no avanzaba el proceso de investigación los sentimientos de tristeza y enojo lastimaban a la familia lo cual les hizo perder la confianza en la justicia.

Perciben que sus testimonios y declaraciones fueron ignorados y no atendidos efectivamente. El temor se mantiene en las vidas de los familiares pues temen represalias de quien consideran el asesino intelectual, ya que esta persona podría agredirles para que se mantengan callados. Para la familia hay una íntima relación entre la justicia en el caso de Ángel Pacheco y que puedan finalmente experimentar tranquilidad”.

---

<sup>308</sup> Joaquín, p.34.

<sup>309</sup>



Según la psicóloga Georgina Margarita Rodríguez Matute

La tristeza por la falta de su ser querido se ha convertido en un síntoma constante del malestar emocional sobrepasando lo considerado normal para un periodo de duelo. Estos malestares se han mantenido debido a que no han encontrado respuestas ni justicia ante lo sucedido, así que su visión de futuro es sombría.<sup>310</sup>

El Doctor Daniel Herrera Salinas psiquiatra mencionó en su informe:

El asesinado muere de un solo romplón, los familiares de apoco. El ambiente familiar se ve invadido de tragedia, luto, temores de exterminio. El dolor eterniza. Toma cuerpo lo siniestro. La tragedia copa todos los escenarios, fenecen las ilusiones. El crimen asume tono de traición.<sup>311</sup>

A pesar del sufrimiento que les causó la pérdida de su ser querido y de los cambios que esto implicó en sus vidas, se involucraron activamente en la búsqueda de justicia: estuvieron presentes y activos en las investigaciones, aportando testigos, brindando información, solicitando diligencias por ejemplo.

Los hermanos que residen en los en los Estados Unidos realizaron muchas acciones desde ese país. Por ejemplo pidieron ayuda a varios organizaciones como Cejil, Human Rights Watch, Wola en Washington, Center for Justice and Accountability, Amnesty International y International Justice Mission. Además pidieron apoyo a varios representantes políticos como a las Senadoras de California; Dianne Feinstein, Barbara Boxer, Nancy Pelosi y los Congresistas George Miller y Tom Lantos.<sup>312</sup>

Especialmente trabajaron mucho con Tom Lantos el fundador de Human Rights Caucus, actualmente Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos. Con esta organización tuvieron muchas veces reuniones después del trabajo o por lo cual tenían que pedir permiso al trabajo.

En su testimonio por affidavit Marleny Pacheco:

En la familia creemos que las comunicaciones entre la oficina de Tom Lantos, la Embajada Americana en Honduras y Paul Oostburg en Washington, fue lo que contribuyó que no hayamos perdido otro miembro de la familia hasta el momento.<sup>313</sup>

<sup>310</sup> Informe pericial, Georgina Margarita Rodríguez Matute, 13 marzo 2017.

<sup>311</sup> Informe pericial, Doctor Daniel Herrera Salinas, 13 marzo 2017.

<sup>312</sup> Testimonio por Affidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

<sup>313</sup> Testimonio por Affidavit de Marleny Posadas Pacheco, 13 de marzo 2017.

Todos los hermanos que vivían afuera hicieron lo que podían para apoyar la investigación. Desde las llamadas y cartas a los entes investigativos en Honduras hasta llamadas a consejeros políticos de la Embajada Americana en Honduras. Además, tres de las hermanas que viven en los Estados Unidos asistieron a la Audiencia Pública de la Corte IDH del 23 de marzo de 2017 para apoyar a los familiares declarantes y dar seguimiento al caso.

En conclusión, en virtud de que está probado el sufrimiento causado a cada uno de los familiares de Ángel Pacheco León a raíz de las amenazas, y de la falta de justicia, solicitamos a esta Honorable Corte que declare al Estado de Honduras responsable por la violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de los familiares de Ángel Pacheco León.

#### **5. EL ESTADO HONDUREÑO DEBE REPARAR A ÁNGEL PACHECO LEÓN Y SUS FAMILIARES POR LAS VIOLACIONES COMETIDAS**

En relación con el fundamento de las reparaciones, así como con las personas que deben ser consideradas beneficiarias de las medidas de reparación que ordene esta Honorable Corte, los representantes nos remitimos a lo manifestado en nuestro ESAP de 18 de marzo de 2016.

Los representantes consideramos que ha quedado probada la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por las graves violaciones a los derechos humanos de Ángel Pacheco León<sup>314</sup> y sus Familiares. Es por ello que solicitamos a la Corte que ordene al Estado la reparación integral de los daños ocasionados a raíz de las violaciones señaladas en el presente escrito

Dado el carácter de las violaciones cometidas en el presente caso, que hacen imposible la plena restitución de los derechos lesionados, el Estado debe adoptar las medidas compensatorias necesarias para garantizar la debida indemnización moral y material de las víctimas, así como medidas de satisfacción de los derechos violados y garantías de no repetición.

---

<sup>314</sup> Debido a su actividad política y sus aspiraciones a ser electo a un cargo de elección popular Ángel Pacheco León fue amenazado, hostigado y finalmente asesinado, con lo cual, no sólo fue privado de sus derechos políticos impidiéndole asumir el cargo para el que se postulaba, para el cual fue electo, sino también generó “un efecto amedrentador tanto para sus familiares como para sus colaboradores y correligionarios al extremo que su movimiento político se desmanteló”.

En el presente caso, los peticionarios hemos argumentado que Honduras ha violado, en perjuicio de las víctimas, los derechos protegidos en los artículos 4, 5, 8, 23 y 25.1 de la Convención Americana, incumpliendo, así, las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 de dicho instrumento. En esta medida, el Estado está en el deber convencional de reparar las consecuencias de las violaciones.

### 1. Beneficiarios de las reparaciones

La Corte ha establecido que son titulares de este derecho todos aquellos que resulten directamente perjudicados por las violaciones a los derechos humanos establecidos en la Convención<sup>315</sup>. Ángel Pacheco León, su madre Andrea Pacheco López; su compañera de hogar Blanca Rosa Herrera; sus hermanos y hermanas: María Otilia Pacheco, Concepción Pacheco, José Pacheco, Francisco Pacheco, Santos Norma Pacheco, Marleny Posadas Pacheco, Blanca Nubia Pacheco, María Regina Pacheco, Elsa Jamileth Almendarez Pacheco, Jaqueline Lizeth Almendarez Pacheco y Jorge Alberto Almendarez Pacheco; sus hijos e hijas: Jimmy Javier Pacheco Ortiz, Miguel Ángel Pacheco Devicente; Cinthia Mirella Pacheco Devicente, Tania Melissa Pacheco López, Juan Carlos Pacheco Euceda y Bianca Gisselle Pacheco Herrera.<sup>316</sup>

No es permitido para esta representación concluir este apartado sin evidenciar el hecho de que el Estado hondureño en su Escrito de Contestación de 05 de julio de 2016, y sus alegatos orales en la Audiencia Pública de 23 de marzo de 2017, sin sustento jurídico y prueba alguna ha pretendido descalificar la condición de las víctimas del presente caso por lo esta representación solicita a la Honorable Corte que desestime cualquier prueba que el Estado pretenda introducir en una etapa procesal que no corresponde.

La petición de reparación más importante para las víctimas es que se haga justicia. Demandan que esta honorable Corte ordene al Estado de Honduras investigar el asesinato de Ángel Pacheco León que fue un hijo, padre, hermano y esposo muy querido. Los familiares pretenden que se investigue el crimen con debida diligencia, de forma efectiva, seria e imparcial. Aspiran a que se identifique tanto al autor material como a los autores intelectuales y que les castiguen por su crimen. Quieren conocer la verdad!

<sup>315</sup>Corte IDH. *Caso El Amparo Vs. Venezuela*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28., párr. 38.

<sup>316</sup> Identificación de víctimas, Pagina 3 y 4 del ESAP.18 de marzo de 2016.

El psiquiatra Dr. Daniel Herrera afirmó en su peritaje que “Investigaciones serias y justicia para los familiares puede permitir que se aligeren sus sufrimientos.” y que el “procesamiento judicial” puede ser una forma de afrontar el trauma ocasionado por esta violencia” Precisamente, los familiares expresaron que saber que los asesinos vivían en la impunidad les causaba un dolor adicional.

Además, la falta de investigación, enjuiciamiento y condena de los responsables provoca un clima de impunidad que derrumba el Estado de derecho y la legitimidad de las instituciones democráticas.<sup>317</sup> Asimismo el Dr. Herrera afirmó que la impunidad “genera un efecto paralizante en la sociedad y crea un ámbito de terror”.

#### **A. Medidas de reparaciones solicitadas**

El concepto de Reparación integral derivado del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>318</sup> abarca la acreditación de daños en la esfera materia e inmaterial y el otorgamiento de medidas tales como: a) la investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial<sup>319</sup>. Todas estas, son las medidas existentes para reparar los daños causados, porque buscan disminuir las afectaciones psicológicas y morales ocasionadas por la transgresión de los derechos.

En los siguientes apartados, esta representación explicará la necesidad de una serie de medidas encaminadas a disminuir el daño sufrido por las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las víctimas. Estas medidas indispensables en el presente caso son: (i) la investigación de los hechos, (ii) la rehabilitación psicológica o social; (iii) la satisfacción, mediante actos en beneficio de las víctimas y las garantías de no repetición de las violaciones, y (iv) la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

---

<sup>317</sup> Joaquín, p.34.

<sup>318</sup> CADH, art. 63.1.

<sup>319</sup> Calderón Gamboa, Jorge F. La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos: estándares aplicables al nuevo paradigma de México. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. 2013, página 148. Disponible en <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33008.pdf>.

(i) Investigación de los hechos

La Corte IDH ha establecido, en muchas de sus sentencias, medidas especiales que pretenden satisfacer el daño psicológico que han sufrido las víctimas. Entre estas, se encuentra la obligación de investigar y castigar, que nacieron en el sistema interamericano con los casos Velásquez Rodríguez Vs. Honduras y Godínez Cruz Vs. Honduras<sup>320</sup>, en 1988 y 1989. Estas sentencias son vitales dentro del reconocimiento de la verdad como una forma de reparación al ordenar la reapertura de investigaciones. Se consideró que el reconocimiento de la verdad era la forma primordial de reparación de las víctimas, y en sucesivas sentencias la Corte IDH la ha tomado como precedente obligatorio. Así, en una de sus más recientes sentencias, le ordenó al Estado ecuatoriano efectuar investigaciones administrativas que logran establecer la verdad respecto a la actuación de algunos funcionarios públicos<sup>321</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior, como la jurisprudencia de la Corte IDH<sup>322</sup>, le solicitamos que ordene al Estado conducir y concluir, a través de la jurisdicción de derecho común hondureño, una investigación judicial completa, efectiva e imparcial de la muerte violenta de Ángel Pacheco León, con arreglo al debido proceso legal, a fin de identificar a los responsables intelectuales y materiales de dichas violaciones y sancionarlos penalmente. También, de dismantelar todos los obstáculos, *de facto* y *de jure*, que impidan la debida investigación de los hechos en un plazo razonable, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos como los del presente caso<sup>323</sup>.

<sup>320</sup>Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de julio 1988. Serie C No. 04; Corte IDH. *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 05 y Núñez Marine, Raúl Fernando y Zuluaga Jaramillo, Lady Nancy. *Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos: principios de implementación en el derecho colombiano.*, página 217. Disponible en: <http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/viewFile/853/864>.

<sup>321</sup> Corte IDH. *Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C No. 228

<sup>322</sup>Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros ("Guerilha Do Araguaia") Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219., párr. 253; Corte IDH *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 237 y Corte IDH *Caso Caracazo Vs. Venezuela*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 118

<sup>323</sup>Corte IDH. *Caso de la "Masacre de Mapiripan" Vs. Colombia*. Sentencia de 15 de septiembre 2005. Serie C. No. 134., párr. 299.

Asimismo, solicitamos al Estado asegure el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares de las víctimas en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Adicionalmente, los resultados de los procesos correspondientes deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad hondureña conozca los hechos objeto del presente caso, así como a sus responsables. Que se aplique un protocolo especial de investigación como prueba piloto del Protocolo que esta Corte tendría la Oportunidad de ordenar.

### **(ii) Rehabilitación de las víctimas**

La Corte IDH ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos<sup>324</sup>. Hemos hecho la demostrado que los familiares del señor Pacheco han sufridos psicológicamente y físicamente, de estrés postraumático, como consecuencias de su muerte.

Por lo tanto, y de conformidad con otros casos<sup>325</sup> de esta Honorable Corte, es necesaria una medida de reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas. Solicitaríamos que el Estado brinde atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten. Para ello, deberán tomarse en consideración los padecimientos específicos de los beneficiarios mediante la realización previa de una valoración física y psicológica o psiquiátrica. Asimismo, los tratamientos respectivos deberán prestarse en Honduras por el tiempo que sea necesario e incluir el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente requieran.

### **(iii) Medidas de satisfacción y Garantías de no repetición**

Uno de los avances más importantes de la jurisprudencia interamericana es el relativo a la inclusión de garantías de no repetición y de satisfacción como medidas de reparación. La efectiva aplicación de ambas son señales inequívocas del

<sup>324</sup>Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros ("Guerilha Do Araguaia") Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Parr. 264

<sup>325</sup>Corte IDH. *Caso Barrios Altos Vs. Perú*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, párrs. 42 y 45; Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros ("Guerilha Do Araguaia") Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219., parr. 267 y Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 253

“compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir”<sup>326</sup> violaciones a los derechos humanos como las que originaron el presente caso.

A continuación, describimos las garantías de satisfacción y no repetición que en el caso concreto, contribuirían a cumplir con el citado objetivo.

### **Adopción de reformas legislativas**

El Estado ha inobservado su obligación de “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención”<sup>327</sup>, específicamente respecto al artículo 23 de la CADH.

En tal virtud, esta representación considera imprescindible, que para garantizar el respeto de los derechos políticos, este Alto Tribunal ordene las reformas legislativas y de otro orden que sean necesarias<sup>328</sup>, para adecuar su ordenamiento jurídico interno, a fin de que las elecciones a cargo de diputados y corporaciones municipales se realicen en fechas separadas a las del cargo de presidente, evitando la imposición de candidatos.

Además, solicitamos que se cree una institución contralora y auditora de la procedencia de los fondos económicos que utilicen los políticos para financiar sus campañas electorales. La pretensión es de verificar las fuentes de dicho financiamiento.

Otra consecuencia importante, derivada del sometimiento a la CIDH, es que habría recomendaciones para asegurar las buenas condiciones del funcionamiento del régimen electoral, otras aconsejables para las reformas apropiadas, por ejemplo, establecer reglas para las relaciones políticas y para la organización y el ejercicio del poder en el marco del derecho a competir por los cargos públicos. Aspecto en el cual los ciudadanos son colocados en un nivel de igualdad genérica. En cambio, al tratar con burocracias estatales, los ciudadanos están frecuentemente colocados en situaciones de aguda desigualdad de facto<sup>329</sup>.

<sup>326</sup> Corte IDH. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77. Párr. 84.

<sup>327</sup> Corte IDH. *Caso Mendoza y otros Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260. Párr. 323

<sup>328</sup> Que se reforme la Ley electoral y de la organizaciones políticas de la Republica de Honduras

<sup>329</sup> Informe la Democracia en América Latina, 2004.

<http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-seminario.pdf>

Al respecto el informe de la Misión de Observación Electoral 2013<sup>330</sup>, de la Unión Europea estableció:

Observadores de la MOE UE tuvieron constancia de casos de violencia o intimidación contra candidatos en doce departamentos, a saber, Colón, Yoro, Cortés, Santa Bárbara, Copán, Lempira, Intibucá, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán y El Paraíso. La MOE UE no puede descartar que haya habido violencia o intimidación en otros departamentos, sino tan sólo que estos son los casos que llegaron a su conocimiento acompañados de evidencia que les da credibilidad. Las víctimas de estas violaciones a los derechos de campaña provienen especialmente de los partidos emergentes. El Partido Libertad y Refundación se vio afectado en 9 casos, el Partido Anti Corrupción en 6, Faper en 3 y Alianza Patriótica en 2. Entre los partidos tradicionales, los casos de violencia e intimidación que llegaron a conocimiento de la MOE UE afectaron en dos casos a Partido Nacional y Partido Liberal, y en uno a Unificación Democrática, Democracia Cristiana y PINU<sup>331</sup>.

A diferencia de este caso, de carácter inequívocamente político, la mayoría de intimidaciones y agresiones sufridas por candidatos y militantes o simpatizantes de partidos no se denuncian o no se investigan hasta dilucidar qué es lo que las ha motivado, de manera que no queda sólidamente establecido si responden a motivos políticos o de otra clase. La falta de denuncia e investigación no se limita, desde luego, al ámbito político y se refleja en la elevada tasa de impunidad que registra el país<sup>332</sup>.

La legislación de Honduras ofrece en general una base suficiente para la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, la Ley Electoral es poco detallada en cuanto a procedimientos electorales y no regula en profundidad aspectos tan importantes como el régimen financiero de los partidos políticos o determinados procedimientos de quejas y reclamaciones. La Ley presenta con frecuencia ambigüedades en sus preceptos, como los relativos a la toma de decisiones de los miembros de los TED, TEM y MER, pues no especifica qué tipo de decisiones son las que están facultadas para tomar. Además, regula un escrutinio municipal y departamental carente de sentido tras la implementación del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE). Por otra parte, a pesar de que el manual del TSE establece que el escrutinio es público, no existe ningún precepto ni en la Ley Electoral ni en los Reglamentos que así lo determine. Finalmente, tampoco se

---

<sup>330</sup>Todo lo siguiente viene del Informe de la misión de observación de la Unión Europea de 2013. Ver: UE. Misión de Observación Electoral. *Honduras. Informe Final, elecciones generales 2013*. Disponible en:[http://www.eods.eu/library/EUEOM%20FR%20HONDURAS13.02.2014\\_es.pdf](http://www.eods.eu/library/EUEOM%20FR%20HONDURAS13.02.2014_es.pdf).

<sup>331</sup>Ibid., p.8.

<sup>332</sup>Ibid., p.3.



establecen los mecanismos para que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones durante la jornada electoral.

La Ley Electoral, que fue diseñada para un sistema bipartidista dominado por los dos partidos tradicionales, otorga a los partidos políticos una gran participación y control sobre las diferentes fases del proceso electoral, siendo los agentes de los partidos políticos los que administran y operan las Mesas electorales durante la votación, validan el voto y elaboran el acta sobre la cual el TSE realiza el escrutinio general. Asimismo, el procedimiento de nombramiento de los funcionarios del TSE y RNP, que establece que dichos cargos son propuestos por los partidos políticos, genera una percepción de parcialidad y no asegura a priori la independencia y autonomía del TSE respecto a la influencia de los partidos políticos. Desgraciadamente, la precipitada renovación de los magistrados del TSE por el Congreso saliente, que no refleja el actual mapa político de Honduras, pocos días antes de la constitución de la nueva asamblea legislativa, refuerza esa percepción de parcialidad.

En el año 2012 el Congreso Nacional no consideró un anteproyecto de Ley para la Participación Política Electoral propuesto por el TSE que, basado en sugerencias de representantes de todos los sectores sociales, pretendía introducir reformas relevantes y positivas, sobre todo en los ámbitos de la despolitización de la administración electoral en todos sus niveles y del financiamiento de partidos y campañas.

- Justicia electoral

La justicia ordinaria es la encargada de conocer sobre los delitos y las faltas electorales, excepto las sanciones administrativas y pecuniarias, que corresponde imponer al TSE. La Ley Electoral, si bien regula las acciones de nulidad de la votación y de la declaratoria de las elecciones, no contiene procedimientos claros y bien definidos para la resolución del resto de conflictos electorales. De este modo, otorga a los tribunales departamentales la atribución de conocer y resolver quejas contra los miembros de los tribunales municipales pero sin establecer ningún procedimiento. Tampoco se establece un procedimiento de trámite abreviado para el caso de que se impugne la inscripción de un movimiento interno en elecciones primarias, a pesar de que la Ley establece que se tramitará sumariamente por parte del TSE. Además, establece únicamente la posibilidad de recurso de amparo ante la Corte Suprema contra la cancelación de la inscripción de un partido político, sin establecer previamente la reclamación por vía administrativa.

La Corte Suprema de Justicia, máximo Tribunal jerárquico del Poder Judicial, está compuesta por 15 magistrados elegidos por el Congreso Nacional por un período de

*... exigiendo justicia.*

siete años. La Corte está dividida en salas, entre las que se encuentra la Sala de lo Constitucional, integrada a su vez por cinco magistrados. La Sala Constitucional tiene competencia para el conocimiento y resolución de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y para el recurso de amparo como apelación a las resoluciones emitidas por el TSE. A finales del 2012, el Congreso Nacional destituyó a cuatro de los cinco magistrados que componen la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por emitir un fallo en contra de un decreto de depuración policial. Dicha destitución puso en tela de juicio el sistema de frenos, contrapesos e independencia de los poderes públicos hondureños y evidenció su debilidad.

El Ministerio Público fue creado mediante Decreto Legislativo 228-93 y es un organismo independiente de los tres poderes del Estado. En junio del 2013, el Fiscal General y el Fiscal Adjunto renunciaron a sus cargos ante un posible juicio político en su contra que recomendó la Comisión Interventora del Ministerio Público por la inadecuada administración de sus cargos. Esta misma Comisión reportó graves problemas relacionados con la corrupción y las demoras en la administración de justicia, revelando que sólo el 20 % de los homicidios en el país son investigados. Los nuevos Fiscales General y Adjunto también fueron nombrados en un proceso controvertido.

- Sistema electoral

Las elecciones presidenciales están basadas en un sistema electoral de una sola vuelta, en el que se gana con una mayoría simple de votos en el conjunto del país.

El sistema proporcional en listas abiertas que se usa para el Congreso Nacional permite que los votantes elijan candidatos de diferentes listas partidarias, pero puede producir también resultados contra intuitivos, puesto que los candidatos elegidos son los de los partidos que han obtenido más votos en su circunscripción y no necesariamente los candidatos que han logrado individualmente más votos. Las circunscripciones que eligen un solo representante usan el sistema mayoritario “first-past-the-post”. No hay un umbral legal para que los partidos obtengan escaños en el Congreso.

Los departamentos son las circunscripciones en las que se eligen los miembros del Congreso Nacional, que se asignan en virtud del tamaño de la población y varían entre uno y 23, por departamento. La Ley Electoral no especifica un mecanismo de atribución de escaños del Congreso Nacional.

Un documento emitido por el TSE especifica la siguiente distribución de escaños por departamento: Atlántida, 8 escaños; Colón, 4 escaños; Comayagua, 7 escaños; Copán, 7 escaños; Cortés, 20 escaños; Choluteca, 9 escaños; El

*... exigiendo justicia.*

Paraíso, 6 escaños; Francisco Morazán, 23 escaños; Gracias a Dios, 1 escaño; Intibucá, 3 escaños; Islas de la Bahía, 1 escaño; La Paz, 3 escaños; Lempira, 5 escaños; Ocotepeque, 2 escaños; Olancho, 7 escaños; Santa Bárbara, 9 escaños; Valle, 4 escaños; y Yoro, 9 escaños. Estas cifras se divulgaron, entre otras cosas, porque los votantes necesitaban saber por cuántos candidatos podían votar<sup>333</sup>.

La institucionalidad en Honduras presenta serias debilidades una marcada politización de las mismas y el sistema electoral no es la excepción, la sociedad cuestiona el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la forma de elección de los diputados y la formas de reclamación. Los expertos de distintas misiones de observación coinciden la desconfianza que genera la práctica, que el Congreso Nacional escoge a los magistrados que dirigen la administración electoral en virtud de criterios de representación política. Además, los órganos descentralizados de la administración electoral están explícitamente integrados por los partidos políticos, lo que compromete su percepción como órganos imparciales e incluso una gestión de carácter neutral

La MOE-UE ha recomendado entre otras una despolitización, con nombramientos que se hiciesen de acuerdo a criterios legalmente establecidos de neutralidad política y competencia técnica. Podrían lograrse consensos amplios si estableciendo un comité de postulación integrado por miembros de la sociedad civil cuyas propuestas se aprobasen por una mayoría cualificada del Congreso Nacional. A partir de ese momento, el TSE podría designar a los miembros de sus representaciones descentralizadas en los departamentos y municipios del país. Conforme al artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

Así mismo recomienda que sería útil que la Ley Electoral estipulase una fórmula para la asignación de escaños en el Congreso Nacional en conexión con los votantes registrados por departamento, así como elaborar un mecanismo de actualización de dicha asignación. Establecer un mecanismo claro para la asignación de escaños en el Congreso Nacional y posibilitar que se actualice cuando sea necesario como lo establece el derecho a igualdad del voto<sup>334</sup>.

En esa misma línea considero la Misión de Observación Electoral de la UE, que Sería útil desarrollar y divulgar un marco legal exhaustivo para hacer reclamaciones que comprendiese todos los elementos del proceso electoral, de manera que haya la

<sup>333</sup>UE. Misión de Observación Electoral. *Honduras. Informe Final, elecciones generales 2013*. Disponible en: [http://www.eods.eu/library/EUEOM%20FR%20HONDURAS13.02.2014\\_es.pdf](http://www.eods.eu/library/EUEOM%20FR%20HONDURAS13.02.2014_es.pdf), nota de pie 5, página 13.

<sup>334</sup>Artículo 21.3, Declaración Universal de Derechos Humanos, y artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

seguridad de que todas las partes implicadas saben cómo y a quién dirigir sus quejas, y se conocen los plazos para la resolución de todo tipo de reclamación.

Modernizar, aclarar y fortalecer el sistema de interposición de quejas. Conforme al mandato del Artículo 25, de la Convención Americana sobre Derechos humanos y artículos 21 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>335</sup>.

Hemos ofrecido a la Corte un perito para que desarrolle ante esta Corte algunas de las falencias de la legislación y la práctica de los procesos electorales pre comicial, a fin de permitir que adecue su legislación y sus prácticas de acuerdo a lo requerido por el artículo 2 de la Convención Americana. Así mismo, solicitamos a la Honorable Corte que sobre la base de la prueba que produzcamos establezca la necesidad de que el Estado adecue su normativa y su práctica en materia política electoral a los estándares internacionales. De esta forma, la Honorable Corte tendría la oportunidad de pronunciarse a favor de una reforma legislativa o emisión de una nueva ley electoral como forma de reparación.

### **Creación de protocolos de investigación**

La Corte Interamericana en distintas oportunidades ha señalado que las capacitaciones en materia de protección de derechos humanos son una “manera de brindar al funcionario público nuevos conocimientos, desarrollar sus capacidades, permitir su especialización en determinadas áreas novedosas, prepararlo para desempeñar posiciones distintas y adaptar sus capacidades para desempeñar posiciones distintas y adaptar sus capacidades para desempeñar mejor las tareas asignadas.”<sup>336</sup>

Por ello, esta Honorable Corte ha dispuesto que los Estados, al ser declarados responsables internacionalmente por inobservancias de la CADH, deben realizar capacitaciones y educación en derechos humanos a operadores de justicia,<sup>337</sup> integrantes del Ministerio Público<sup>338</sup>, cuerpos armados<sup>339</sup>, policía<sup>340</sup> y organismos de

---

<sup>335</sup>Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

<sup>336</sup>Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte IDH de 24 de noviembre de 2008, Considerando décimo noveno. Corte IDH. *Caso Escher y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. Párr. 251.

<sup>337</sup> Corte IDH. *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217. Párrs. 257, 258 y 259.

<sup>338</sup> Corte IDH. *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220. Párr. 245.

seguridad.<sup>341</sup> Estas medidas han presentado un gran número de variaciones que las diferencian y caracterizan entre sí, debido a que las mismas son motivadas por distintas violaciones a los Derechos Humanos.

Recientemente, la CIDH reconoció en que en un país como Honduras, donde hay una alta rotación del personal y de responsabilidades en los órganos estatales, el Estado debe “invertir en la capacitación permanente de sus funcionarios sobre las responsabilidades específicas conforme a sus competencias en la investigación en actos de violencia. Honduras debe reforzar la capacidad institucional y los procedimientos tendientes a responder a la violencia, inclusive asignando recursos humanos y materiales adicionales a las Fiscalías y a los demás órganos encargados de enfrentar y reprimir esas violaciones de derechos”<sup>342</sup>.

De hecho, una de las recomendaciones de la CIDH en su Informe sobre la situación en Honduras de 2016 es intensificar y profundizar los recursos humanos y materiales destinados a investigar de manera pronta, diligente e imparcial actos de violencia y violaciones de derechos humanos y aplicar las sanciones penales que correspondan, de manera de evitar la impunidad y la repetición de hechos similares<sup>343</sup>.

En el presente caso, han pasado 14 años desde que Ángel Pacheco León fue violentamente asesinado, El procedimiento judicial no ha sido activado, no se ha emitido una sola resolución ni siquiera en primera instancia dirigida a hacer justicia, no se ha llegado a una sentencia, el proceso de investigación se ha caracterizado por ser sumamente deficiente, a sus familiares no se les ha permitido tener acceso a la satisfacción de saber que aquellos que amenazaron y hostigaron por varios meses a Ángel Pacheco León han sido debidamente sancionados.

Los familiares de Ángel Pacheco León consideran importante que se haga justicia a través de una investigación efectiva que conlleve a un juicio inmediato, independiente e imparcial en el que se sancione a los autores intelectuales y

---

<sup>339</sup> Corte IDH. *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Párr. 249. Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Párr. 303. Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C No. 219. Párr. 283.

<sup>340</sup> Corte IDH. *Caso Escher y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. *Op. Cit.* Párr. 251.

<sup>341</sup> Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. *Op. Cit.* Párr. 282.

<sup>342</sup> CIDH, Informe de país; Honduras, *Situación de derechos humanos en Honduras*, supra nota 7, párr. 267

<sup>343</sup> *Ibid.*, Recomendación 9 y 12.

materiales del asesinato de Ángel Pacheco León. Así mismo consideramos importante que se investiguen las amenazas hostigamientos y persecución de las que fue objeto José Pacheco y de las que fuera la familia especialmente sus hijos y compañera de hogar.

Desde hace varios años se viene reconociendo la necesidad de que el Estado cuente con un protocolo científico para la investigación de muerte violentas, en especial asesinatos políticos; muertes resultantes de torturas o malos tratos infligidos en los centros de prisión o detención; muertes debidas a "desapariciones" forzadas; muertes ocasionadas por uso excesivo de fuerza por los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley.

Esta representación estima necesario que el Estado de Honduras implemente la creación de protocolos de investigación específicos para crímenes cometidos por las motivaciones señaladas.

Es fuente de preocupación permanente la persistencia de la impunidad y la forma desigual y discriminatoria con la que los crímenes dirigidos contra opositores políticos son tratados por el sistema de administración de justicia de Honduras. Es una práctica que se ha profundizado desde la década de los años ochenta, como la falta de atención a los antecedentes, el contexto, el marcado énfasis en los testimonios de las familiares y amigos que con frecuencia son re victimizados y la negligencia en la búsqueda de otro tipo de pruebas. Es marcado en los casos de muertes políticas. Esta práctica agotadora y frustrante para los demandantes, son los obstáculos a los cuales las víctimas y sus familiares se enfrentan en sus esfuerzos para acceder a la justicia y obtener una respuesta efectiva de esta.

El acceso a la justicia constituye un elemento central de las obligaciones del Estado. El estándar de debida diligencia parte del supuesto de que los Estados deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las víctimas de la violencia política sea del Estado o con aquiescencia del mismo, el acceso a los mecanismos de justicia penal efectiva.

El caso Pacheco León se ha caracterizado por la inactividad del expediente, la negligencia en la recolección y preservación de la prueba, la gestión de la investigación por parte de autoridades que no han sido diligentes competentes ni imparciales y la ausencia de análisis de las amenazas anteriores.

El Protocolo de investigación debe ser dirigidas en primer término a los operadores de los sistemas de administración de justicia que intervienen en las acciones de investigación, juzgamiento y eventual sanción de las personas acusadas por estos

*... exigiendo justicia.*

delitos, como los jueces y las juezas, los peritos y los especialistas en medicina y ciencias forenses. Funcionarios en relación con las distintas etapas del proceso penal.

El deber de investigar tiene dos finalidades, ha dicho la Corte, y proveer justicia en los casos individuales. Constituye una obligación de medio y no de resultado. Así las cosas en Honduras los resultados son inexistentes por la falta de un plan y un protocolo específico de investigación. El protocolo para muertes por razones políticas debe contener estándares mínimos como:

#### PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN

- Actos Iniciales de Investigación (actos urgentes y diligencias previas, como levantamiento cadavérico y necropsias)
- Calificación Jurídica
- Conformación de Equipo de investigación multidisciplinario

#### PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- Plan Estratégico de Investigación
- Concepto.
- Objetivos
- Características
- Formulación de Hipótesis
- Definición de Hipótesis
- Clasificación de las Hipótesis
- Definición de líneas de trabajo

#### TEORÍA DEL CASO

- Elementos de la Teoría del Caso
- Preparación de las Audiencias
- Audiencia Inicial o de Imposición de Medidas
- Audiencia Preliminar
- Asegurar la participación informada de las víctimas en todo el proceso
- Incluir medidas adecuadas para la protección de los testigos y víctimas y familiares

## Conservación de la memoria del Señor Pacheco

La Corte Interamericana ha valorado los actos conmemorativos señalando que se trata de "medidas de satisfacción [...] adecuadas para reparar el daño sufrido por los familiares"<sup>344</sup>. De hecho, los actos conmemorativos constituyen medidas de satisfacción de las víctimas mediante actos que rescatan el recuerdo y la memoria de las víctimas.

Para los familiares de Ángel Pacheco León, reivindicar y conservar la memoria de su padre, hijo, hermano y esposo es imprescindible. En esta línea, y en atención a que la Corte IDH históricamente ha ordenado medidas encaminadas a despertar la conciencia pública en cuanto a los hechos de cada caso y a conservar viva la memoria de la víctima<sup>345</sup>, esta representación pretende solicitar una serie de medidas de satisfacción que buscan distinguir la imagen del señor Pacheco León, como un símbolo de dar a conocer su trabajo político en el fortalecimiento de la democracia y la tolerancia política a la diferencias, y a la vez, sensibilizar a la sociedad hondureña sobre la importancia de generar espacio para un debate político vigoroso pero pacífico. Queremos construir consenso entre autoridades, fuerzas políticas, sociedad civil y actores no tradicionales.

- Se solicita a la Corte, de conformidad con su jurisprudencia<sup>346</sup>, la construcción de una representación física de la imagen del señor Pacheco León en un sitio público de su ciudad natal, Nacaome, que el mismo sea develado en un acto público en presencia de las más altas autoridades del Estado de Honduras.
- Generar un documental multimedia<sup>347</sup>, sobre la vida del Señor Pacheco León que sea difundido previo a las elecciones internas y generales en los medios

<sup>344</sup>Corte IDH. *Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 165.

<sup>345</sup> Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 251; Corte IDH. *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 236.

<sup>346</sup> Corte IDH. *Caso González y otras "Campo Algodonero" Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrs. 271 y 272 Corte IDH. *Caso Huilca Tecse Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C no. 121., párrs. 114-115 y Corte IDH. *Caso de La Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211 párrs. 265 y en cuales la Corte ordenó de levantar un monumeto en memoria de los que fallecieron con una placa alusiva a lo ocurrido y el nombre de las víctimas, con el propósito de dignificarlas, para mantener viva su memoria y como garantía de no repetición.

<sup>347</sup>Difusión por varios medios de comunicación combinados, como texto, fotografías, imágenes de video o sonido, generalmente con el propósito de educar.



de difusión nacional, con especiales llamados a la tolerancia política y la transparencia. Esta medida se inspira de la misma lógica que el caso *Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia* donde se realizó una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política y periodística de la víctima “para la preservación de la memoria y satisfacción de las víctimas, como para la recuperación y restablecimiento de la memoria histórica en una sociedad democrática”<sup>348</sup>.

### Publicación y difusión de la sentencia de la Corte IDH

La Corte Interamericana ha reconocido que la difusión de sus sentencias en los medios de comunicación en un país contribuye a que la sociedad, en su conjunto, conozca la responsabilidad del Estado sobre los hechos denunciados y sobre la verdad de los mismos, reconociendo así su derecho a la información y a la verdad. Igualmente, el Tribunal ha interpretado que tal difusión constituye parte de la reparación moral de las víctimas<sup>349</sup>.

En el caso que nos ocupa, esta medida reviste de una particular importancia, pues tal y como expusimos con anterioridad, para ampliar el derecho para el fortalecimiento de las democracias a través de la participación política. Como hemos expuesto, los riesgos y amenazas en contra de la actividad política en Honduras subsisten, y por ello, la divulgación de esta información es particularmente importante.

En consecuencia, solicitamos a la Corte que, de acuerdo con su jurisprudencia constante en la materia, ordene al Estado la publicación en un plazo de 6 meses de, por lo menos, las secciones de contexto y hechos probados, así como la parte resolutive de la sentencia en el Diario Oficial la Gazeta, al menos dos diarios de circulación nacional<sup>350</sup> y en diarios locales de la región de Valle<sup>351</sup>.

<sup>348</sup>Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, Párrs 228-230. Ver también Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. Párrs 355-356.

<sup>349</sup>Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Op. Cit. Párr. 195.

<sup>350</sup>Corte IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136. Párr. 142.

<sup>351</sup>Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párrs., 243 y 245

## Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, de desagravio, y de compromiso de no repetición

La Corte Interamericana, en reiteradas ocasiones ha señalado que como desagravio para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos<sup>352</sup> y como garantía de no repetición<sup>353</sup> es pertinente ordenar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional<sup>354</sup>.

Esta representación le solicita a este Honorable Corte, que le ordene al Estado de Honduras la celebración de un acto público en el cual el Estado de Honduras reconozca su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos por las que ha sido condenada y donde se realice una solicitud de perdón público<sup>355</sup>. En este acto, el Estado debe manifestar, además, su compromiso de proteger y garantizar los derechos de los activistas políticos<sup>356</sup>.

Finalmente le pedimos a la Corte que le instruya al Estado que asegure la presencia de las víctimas en el acto público<sup>357</sup> sufragando los gastos en que pudieran incurrir, convocándolos con la debida antelación<sup>358</sup> y que el evento sea “difundido a través de los medios de comunicación”<sup>359</sup> televisivos<sup>360</sup> o radiales<sup>361</sup>, asegurando que sea en un horario de alta audiencia<sup>362</sup>.

<sup>352</sup>Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 7 de junio 2003, Serie C No.99, Párr. 188.

<sup>353</sup>Corte IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202. Párr. 200.

<sup>354</sup>Corte IDH. *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88. Párr. 81.

<sup>355</sup> Corte IDH. *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 2009. Serie C No.196, Párr. 202.

<sup>356</sup>Podría ser al mismo momento que la presentación de la representación física de la imagen del señor Pacheco León en un sitio público de su ciudad natal, Nacaome, con la presencia de las más altas autoridades del Estado de Honduras.

<sup>357</sup>Corte IDH. *Caso Cantoral Huamani y García Santa Cruz Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. Párr. 193.

<sup>358</sup>Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre 2009. Párr. 353. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo 2010, Serie C No. 213. Párr. 224.

<sup>359</sup>Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 25 de noviembre de 2005. Serie C. No. 101. Párr. 278.

<sup>360</sup>Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo 2010, Serie C No. 213. Párr. 229.

(iii) **Medidas pecuniarias**

En cuanto a la indemnización compensatoria, ésta deberá tomar en cuenta tanto el daño material como el daño inmaterial que han sufrido las víctimas del presente caso. En particular, deberá tomar en cuenta el lucro cesante del Señor Ángel Pacheco León, el descenso de su patrimonio, consistente en una empresa de producción y comercialización de camisas y el daño emergente que supuso para la familia Pacheco su muerte violenta y repentina. Especialmente para sus hermanos y madre.

• **Daño material**

El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos<sup>363</sup>. El daño material comprende las nociones de daño emergente, daño patrimonial familiar y lucro cesante; estos elementos serán analizados a continuación y surgen como consecuencia directa de las actuaciones ilegítimas del Estado.

• **Daño emergente**

La Corte ha establecido que el daño emergente es constituido de los pagos y gastos en que han incurrido la víctima o sus familiares durante la investigación de la violación<sup>364</sup> y el destino final de víctimas desaparecidas o ejecutadas<sup>365</sup>. Son los gastos que incurrieron las víctimas o sus familiares con el fin de dar con la verdad.

El Tribunal ha tomado ciertos elementos como constitutivos del daño emergente. Dentro de ellos, ha incluido los gastos de visitas a instituciones, gastos de transporte, hospedaje<sup>366</sup>, pagos por concepto de gastos por tratamientos médicos recibidos por las familiares de la víctima por los diversos padecimientos en su salud

---

<sup>361</sup>Corte IDH. *Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto 2010. Serie C No. 215 Párr. 244. Corte IDH. *Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 29 de abril 2004. Serie C No. 105. Párr. 100.

<sup>362</sup> Corte IDH, *Caso del Penal Miguel Castro Castro*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. Párr. 445.

<sup>363</sup>Corte IDH *Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador*. Fondo, Reparaciones y Costas 2005 Sentencia de 24 de junio 2005 Serie C. No. 129, Párr. 157.

<sup>364</sup> Corte IDH. *Caso El Amparo Vs. Venezuela*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 29. Párr. 17.

<sup>365</sup> Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C. No. 91.

<sup>366</sup>Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102. Párr. 250.

como resultado de los hechos del caso<sup>367</sup>, gastos por el desplazamiento de familiares a otras comunidades como consecuencia del hostigamiento que sufrieron por los hechos del caso, y gastos por sepultura y funerales.<sup>368</sup> Asimismo, en caso de que se esté ante un caso de ejecución extrajudicial o desaparición forzada de personas, se podrán incluir ingresos dejados de percibir por alguno de los familiares durante la búsqueda a nivel interno o por asistir a las audiencias ante sede internacional<sup>369</sup>.

Desde el inicio de los procesos de investigaciones del asesinato del señor Pacheco, las víctimas se han movilizadado para obtener justicia, e intentar de impulsar los mecanismos jurídicos. Como fue descrito en los hechos del caso, han sido numerosas las acciones que llevaron a cabo las víctimas en su búsqueda de justicia, lo cual les implicó muchas horas de dedicación. Esta movilización significó una serie de gastos, incluyendo transporte, llamadas telefónicas, papelería, hospedaje, sepultura. Más específicamente:

- Los familiares de Ángel Pacheco León realizaron movilizaciones en Tegucigalpa y el departamento de Valle con el fin de obtener justicia e impulsar los mecanismos jurídicos. Dichas situaciones motivó gastos por concepto de transporte, hospedaje, alimentación, llamadas telefónicas y otros<sup>370</sup>.
- Los familiares se desplazaron por los funerales y pagaron los gastos de la sepultura.
- Blanca Rosa Herrera Rodríguez, encargada de los niños tuvo que desplazarse como consecuencia del hostigamiento que sufrieron.
- Además, todos sufrieron de daños psicológicos pero particularmente Tania Melissa Pacheco López que necesitaba un tratamiento por un año con un siquiatra y que estuvo interna en la policlínica.

---

<sup>367</sup> Ibid

<sup>368</sup> Corte IDH. *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 100. Párr. 89.

<sup>369</sup> Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102. Párr. 250.

<sup>370</sup> En sentido similar, ver Corte IDH. *Caso Blake Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, Párr. 48.

- Los hermanos y hermanas, principalmente Marleny y José, perdieron ingresos durante la búsqueda a nivel interno, las investigaciones o por asistir a las audiencias ante sede internacional. En el transcurso del tiempo ellos no han cruentado con los comprobantes de los gastos de sus movilizaciones para obtener justicia.
- Marleny vive en los Estados-Unidos. Ella regreso a Honduras después de los hechos para intentar de obtener justicia e impulsar los mecanismos jurídicos. Aunque que salió de Honduras después, ella se encargó de presentar la petición inicial a la CIDH y presionar miembro del Congreso Estadounidense y de la Embajada de Estados-Unidos en Tegucigalpa para que apoyen con la brusquedad de justicia y proteger los familiares de Ángel Pacheco León<sup>371</sup>. Ella ha viajado a Honduras específicamente por asuntos relacionados a la investigación del asesinato de su hermano aproximadamente diez (10) veces<sup>372</sup>. Ella visito en múltiples veces a Nacaome, al Ministerio Publico, a la DGIC, a la clínica del Doctor Rodas (por pruebas de ADN), a la Embajada Americana y etc. Es imposible por ella recopilar pruebas de gastos ocasionados a raíz del asesinato de Ángel, cada viaje envuelve gastos de viajes a honduras, por tiempo perdido de trabajar, pagos de transporte en Honduras, gastos de alimentación y llamadas telefónicas de Estados Unidos a Honduras y viceversa. También estaba presente en las audiencias de la CIDH en Washington, generando gastos de hotel por los cuatro (4) días.
- José Pacheco, durante el transcurso de quince (15) años, viajaba a la zona sur del país con el objetivo de hacer diligencia para esclarecer el asesinato de su hermano. También, viajó a Washington para asistir a las audiencias ante sede internacional. Aunque que no tiene los comprobantes, ha hecho una relación contable de todos los daños emergentes causados por el asesinato de su hermano<sup>373</sup>.
- En tal sentido, José Pacheco tuvo que contratar seguridad personal privada. Tomando en cuenta que el fue declarado electo diputado del

<sup>371</sup>Ver los anexos de la petición inicial de los peticionarios recibida por la CIDH el 27 de agosto de 2004. (Anexos del anexo 1 del Informe de Fondo.)

<sup>372</sup> El vino de Noviembre 24 de 2001 a Diciembre 12 de 2001, el 24 de enero 2002, el 4 de julio de 2001, el 20 de noviembre de 2002, el 2 de julio de 2004, el 15 de septiembre de 2005, el 18 de junio 2007, el 11 de febrero de 2013 y el 28 de diciembre de 2015. **Ver anexo 66:** Copias del pasaporte de Marleny Pacheco.

<sup>373</sup>**Anexo 32:** Aproximación del daño Emergente de José Pacheco.

Congreso Nacional de Honduras por un periodo de cuatro (4) años<sup>374</sup> para remplazar su hermano, por su trabajo de diputado fue víctima de amenazas persistentes y que el Estado negaba su necesidad de tener protección, estas circunstancias lo obligaron a contratar guardias de una empresa privada. Lo anterior representa una suma de 612 666 Lempiras<sup>375</sup>.

○

Debido al transcurso del tiempo, las víctimas no cuentan con los comprobantes de los gastos antes mencionados, en tal sentido, solicitamos a la Honorable Corte que determine en equidad la cantidad correspondiente al daño emergente que deberá ser entregada a cada una de las víctimas del presente caso.

- Lucro cesante

En cuanto al lucro cesante, se define como la pérdida de ingresos económicos (salarios, honorarios, y retribuciones) como consecuencia de la violación padecida por las víctimas<sup>376</sup>. Sobre este particular, esta Honorable Corte ha tomado como puntos de referencia para determinar el monto, los salarios y prestaciones sociales<sup>377</sup>, la expectativa de vida en el país al momento de los hechos<sup>378</sup>, las circunstancias del caso<sup>379</sup>, y la pérdida de una chance cierta.

El lucro cesante tiene referente automático en el nivel de educación de la víctima, sus calificaciones profesionales<sup>380</sup>, salarios y beneficios laborales. En un criterio bastante favorable para las víctimas y sus familiares, la Corte considera que un “adulto que percibe ingresos y tiene familia, destina la mayor parte de dichos ingresos a atender las necesidades.”<sup>381</sup>

---

<sup>374</sup> CIDH. Informe de fondo, párr. 65.

<sup>375</sup> **Anexo 32:** Aproximación del daño Emergente de José Pacheco.

<sup>376</sup> Corte IDH. *Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117. Párr. 105.

<sup>377</sup> Corte IDH. *Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costa. Sentencia 1 de julio 2011. Serie C No. 227 Párr. 184.

<sup>378</sup> Corte IDH. *Caso Carpio Nicolle Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, Párrs 108 y 109.

<sup>379</sup> Corte IDH. *Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. Párr. 289

<sup>380</sup> Corte IDH. *Blake Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, Párr. 16.

<sup>381</sup> Corte IDH: *Caso El Caracazo Vs. Venezuela*. Reparaciones y Costas Sentencia de 29 de agosto de 2002.. Serie C No. 95, Párr. 50.

Ángel Pacheco León nació el 23 de diciembre 1958 en Honduras y murió el 23 de noviembre de 2001, es decir, cuando tenía 42 años. La oficina de Honduras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha estimado que para el año 2000, la esperanza de vida en el país era de 70.71 años<sup>382</sup>. De haber seguido su vida, al señor Pacheco, le quedarían 29 años por vivir. En el caso de Ángel, hubiera podido ser diputado al Congreso Nacional por al menos un mandato de cuatro (4) años y seguir trabajando y mejorando la empresa Impale.

Para determinar el monto correspondiente al lucro cesante, tomamos como base el salario que le correspondía en 2000, es decir que Ángel Pacheco, con su empresa, tenía un salario mensual de 20 000 Lempiras<sup>383</sup> en su último año de vida. Podemos pensar que con el tiempo, el salario aumentaría al menos proporcionalmente al salario mínimo de Honduras. Ver Cuadro descriptivo en el ESAP de 18 de marzo de 2016

### Daño inmaterial o moral

Las indemnizaciones pecuniarias tienen el propósito principal de remediar los daños, tanto materiales como morales, que sufrieron las partes perjudicadas<sup>384</sup>. Para que constituyan una justa expectativa, deberán ser proporcionales a la gravedad de las violaciones y del daño causado<sup>385</sup>.

Lo anterior debe tomar en cuenta “tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, y el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”<sup>386</sup>. En ese sentido, cabe señalar que es invariablemente natural en el ser humano experimentar sufrimiento al ser víctima de una violación a sus derechos humanos<sup>387</sup>.

<sup>382</sup>Datos Marcos. Honduras. Esperanza de vida al nacer. Fecha 2001. Disponible en : <http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/honduras>

<sup>383</sup> **Anexo 33:** Salario de Ángel Pacheco en 2001.

<sup>384</sup> Corte IDH. *Caso Aloeboetoe y otros*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15. Párrs.47 y 49.

<sup>385</sup> La Corte ha estimado que la naturaleza y el monto de las reparaciones “dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como moral” (cfr. Corte IDH. *Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76. Párr. 79.

<sup>386</sup> Corte IDH. *Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador*. Op. Cit. Párr. 318. Corte IDH. *Caso Villagrán Morales Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77. Párr. 84.

<sup>387</sup> Corte IDH. *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela*. Op. Cit. Párr. 176. Corte IDH. *Chocrón Chocrón Vs. Venezuela*. Op. Cit. Párr. 190.

Una característica común a las distintas expresiones del daño moral es la imposibilidad de asignarles un “preciso equivalente monetario”<sup>388</sup>. Se logra la reparación integral del daño moral a través del “pago de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad”<sup>389</sup>. Para que constituyan una justa expectativa, deberán ser proporcionales a la gravedad de las violaciones y del daño causado.

La Corte, en su jurisprudencia, ha asociado el daño moral con el padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad<sup>390</sup>, humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad<sup>391</sup>, inseguridad, frustración, e impotencia<sup>392</sup>.

Para el caso concreto, la indemnización deberá tomar en cuenta el sufrimiento de la familia Pacheco, por la pérdida de su familiar, así como la ausencia de recursos efectivos como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas, especialmente para sus hijos menores que no lograron continuar sus estudios<sup>393</sup>, por el efectivo impacto que la situación tuvo y sigue teniendo en la vida familiar de cada uno, y por el hecho de que sufrieron alteraciones en sus vidas incluyendo el cambio de domicilio y desintegración familiar.

En casos de ejecución extrajudicial, la Corte ha reconocido el derecho a los padres, de recibir una compensación monetaria por el daño inmaterial. Por los sufrimientos de las víctimas, principalmente cuando ellos están afectados por la muerte y por la falta de debidas investigaciones. Por lo tanto, la Corte ha condenado estados a pagar: USD 100 000, 00<sup>394</sup>, 70 000<sup>395</sup>, o 60 000<sup>396</sup>. En su testimonio<sup>397</sup>, Andrea

<sup>388</sup>Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Op. Cit. Párr. 84.

<sup>389</sup> Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Op. Cit. Párr. 84.

<sup>390</sup> Corte IDH. *Blake Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, Párr. 20.

<sup>391</sup> Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33. Párr. 57.

<sup>392</sup> Corte IDH. *Blake Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, Párr. 20 y Impotencia relativamente impotencia a la falta de las autoridades estatales de emprender una investigación diligente sobre lo sucedido.

<sup>393</sup> Corte IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 145.

<sup>394</sup> Corte IDH. *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 236.

<sup>395</sup> IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163.

<sup>396</sup> Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No 162.



Pacheco expresó que ha experimentado el temor de que le ocurra algo a sus otros hijos y nietos<sup>398</sup> en la búsqueda de justicia y para aclarar el asesinato. También, ha tenido esperanza que la muerte de su “Angelito” sea debidamente investigada, juzgada y los responsables condenados. Ella sufrió trauma psicológico causado por la muerte de su hijo, hecho que ha sido constatado por un psicólogo que vendrá a testificar en frente de esta Honorable Corte. Todavía, Andrea vive con el dolor provocado por el asesinato su hijo y la impotencia que siente frente a la ausencia de investigaciones. Solicitamos de la Corte que fije en aplicación razonable del arbitrio judicial una suma de dinero por los daños morales de la madre de Ángel Pacheco León.

La compañera de hogar de Ángel, Blanca Rosa Herrera, antes de la muerte de él, recibía llamadas de hombres desconocidos, frecuentemente en la noche, y la preguntaron dónde está su esposo o pidieron informaciones sobre su ubicación. Ella era también testigo del desmejoramiento físicamente de Ángel Pacheco que perdió su alegría y que no volvió a ser el mismo. La señora Herrera Rodríguez sufrió de ver que su pareja pasaba con semblante triste y pensativo. Después del asesinato, ella con su hija y los hijos de su pareja se escondieron en la casa de su hermana por días y ella no quería salir por miedo a que a fuera pasará algo. Ella tenía un miedo increíble “al punto de que no quería hacer nada porque pensaba que iba a morir”<sup>399</sup>. La jurisprudencia de la Corte ha reconocido el derecho de la esposa o compañera de hogar de recibir una compensación por los daños morales. Entre otros, sumas de 70 000<sup>400</sup> o 40 000<sup>401</sup>. Pedimos a la Corte que reconozca la inseguridad, el miedo y el sufrimiento de la Señora Herrera y que condene al Estado de Honduras al pago de daños morales.

Relativamente a los hijos de una víctima de ejecución extrajudicial, la Corte ha reconocido un panorama de diferentes sumas de danos morales: 70 000<sup>402</sup>, 60 000<sup>403</sup>, 58 000<sup>404</sup>, 50 000<sup>405</sup>, 40 000<sup>406</sup>, 20 000<sup>407</sup>. Solicitamos a la Corte, que

<sup>397</sup> **Anexo 7:** Testimonio de Andrea Pacheco López de fecha de 20 de febrero de 2016.

<sup>398</sup> **Anexo 7:** Testimonio de Andrea Pacheco López de fecha de 20 de febrero de 2016.

<sup>399</sup> **Anexo 10:** Testimonio de Blanca Rosa Herrera Rodríguez de fecha de 20 de enero 2016.

<sup>400</sup>IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163.

<sup>401</sup>Corte IDH. *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110 y Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101

<sup>402</sup>Corte IDH. *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Opt. Cit.

<sup>403</sup>Corte IDH. *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*. Opt. Cit.

condene al Estado al pago de daños morales razonables, tomando en cuenta que los hijos e hijas se vieron obligados a reducir su presupuesto mensual y someterse a una serie de restricciones y cambios en su nivel de vida. Además de sufrir de daños emocionales, les puso en una situación de precariedad económica y debieron modificar su estilo de vida por ejemplo, dejando de estudiar. Todos sufrieron de daños psicológicos, como Tania Melissa que siguió un tratamiento, o como lo demostrará el peritaje del sicólogo.

Además, queremos añadir que Jimy, menor de edad durante los eventos, fue testigo de todos los hechos del asesinato, y después tuvo que rendir declaraciones en diferentes instancias sin resultado. En el *Caso Valle Jaramillo Vs. Colombia*, la Corte ha reconocido el estatuto especial de un familiar testigo de la violación de derecho humano.

Finalmente, todos los hermanos y hermanas sufrieron del asesinato del señor Pacheco y fueron afectó en lo personal sino que también en el ámbito profesional. Varios no pudieron ver por última vez al querido hermano Ángel Pacheco León porque, en ese momento, su estatus migratorio en estados unidos era irregular y en el caso de Yamileth, se encontraba en los últimos meses de embarazo, y le era prohibido viajar en avión<sup>408</sup>. Esto generó mayor angustia y dolor, estaban viviendo el duelo a la distancia “el duelo es un proceso y no un estado”, e implica tareas de elaboración de la pérdida que “requieren esfuerzo”. Nubia y Yamileth aseguraron sentirse abrazando un espacio vacío, al no poder participar del proceso de los funerales que les permitiría deshacer los lazos que les ataba a la imagen con vida de su hermano y protector. Algunos se sintieron en peligro<sup>409</sup>. Los daños han sido y siguen siendo incalculables difíciles de cuantificar, por eso, la Corte tiene diferente

---

<sup>404</sup> Los hijos eran menores de edad, Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No 162.

<sup>405</sup> Ibid.

<sup>406</sup> Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo 2010. Serie C No. 213.

<sup>407</sup> Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Corte IDH. *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 2009. Serie C No. 196 y Corte IDH. *Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76.

<sup>408</sup> Es el caso de Jaqueline que se encontraba en el nuevo mes de embarazo y sufrió de ataque de nervios. Ver anexo 8 al informe de fondo.

<sup>409</sup> **Anexo 16:** Testimonio de José Pacheco, de fecha de 8 de julio de 2003

sumas en su jurisprudencia, por ejemplo de 20 000<sup>410</sup>, 15 000<sup>411</sup>, 11 000<sup>412</sup>, 10 000<sup>413</sup> y 5000<sup>414</sup>.

Asimismo, el Caso « Panel Blanca » (*Paniagua Morales y otros*) Vs. Guatemala<sup>415</sup> reconoce que es necesario de tomar en cuenta los familiares involucrados en la búsqueda de justicia. En tal sentido, consideramos que Marleny Pacheco y José Pacheco han tocado infinidad de puertas con el único fin de obtener la satisfacción de que se haga justicia en el caso y que los responsables de la muerte de su ser querido sean debidamente juzgados y finalmente condenados. Además, José sufrió de amenazas de muertes, persecución y hostigamiento en relación con esta investigación<sup>416</sup>.

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias del caso y al daño que han sufrido las víctimas, les solicitamos a la Honorable Corte que determine en equidad la cantidad correspondiente al daño inmaterial en conformidad con su jurisprudencia y que le ordene al Estado el pago de la misma a las víctimas del presente caso.

#### **(v) Gastos y costas**

#### **Gastos incurridos por el COFADEH**

El COFADEH ha actuado como representante de las víctimas en el proceso internacional desde el año 2004. En el ejercicio de dicha representación ha incurrido en gastos que incluyen viajes, alojamiento, comunicaciones, fotocopias, papelería y envíos. Dichos gastos corresponden principalmente a viajes realizados desde Tegucigalpa, Honduras a Washington, Estados-Unidos o en regiones de Honduras como Choluteca. En vista de que algunos de dichos viajes no son utilizados en su

<sup>410</sup>Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No 162., Corte IDH. *Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo 2010. Serie C No. 213.

<sup>411</sup>IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Opt. Cit.

<sup>412</sup>Corte IDH. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192.

<sup>413</sup>Corte IDH. *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 2009. Serie C No. 196

<sup>414</sup>Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, Corte IDH. *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Opt. Cit. y Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101

<sup>415</sup> Corte IDH. *Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76.

<sup>416</sup> Gente penetraron en su casa y robaron sus documentos privados sobre la investigación del asesinato de su hermano. Ver Informe de fondo párr. 67.

totalidad para el trabajo respecto del presente caso, los montos se han establecido tomando en cuenta los gastos realizados en una porcentaje proporcional del viaje, en atención al tiempo dedicado específicamente al trabajo sobre el caso concreto. Igualmente, COFADEH ha incurrido en gastos correspondientes a trabajo jurídico dedicado a la atención específica del caso y a la investigación, recopilación y presentación de pruebas, realización de entrevistas y preparación de escritos. A continuación detallamos algunos de estos rubros<sup>417</sup> Ver detalles en el ESAP de 18 de marzo de 2017.

Finalmente, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Honduras reintegrar los gastos y costas en que incurrió la víctima y sus representantes que comprenden, además de los ya establecidos,

Los gastos incurridos desde la presentación de dicho escrito hasta la fecha.

Para las víctimas de la familia Pacheco

Los gastos incurridos por las víctimas para asistir a la audiencia de la corte Interamericana de derechos humanos llevada a cabo el día 23 de Marzo del presente año, en ciudad Guatemala, Guatemala se describen a continuación.

Las siguientes víctimas residen en San Francisco, California, por lo que tuvieron que trasladarse a Tegucigalpa, Honduras, con algunos días de anticipación, para de ahí salir rumbo a Guatemala.

Marlene Pacheco	Llegada a Honduras 15-03-2017
Danilo Posadas (Esposo Marlene Pacheco)	Llegada a Honduras 15-03-2017
Santos Norma Pacheco	Llegada a Honduras 19-03-2017
José Isabel Vijil (Esposo Santos N. Pacheco)	Llegada a Honduras 19-03-2017
Elsa Yamileth Almendarez Pacheco	Llegada a Honduras 19-03-2017

**El costo total en boletos aéreos es de \$ 3,161.00**

Se rentó vehículo del 19 al 25 de marzo con propósito de realizar dicho viaje vía terrestre, mismo que se inició el día lunes 20-03-2017 a las 5:00am, tomando la ruta de la zona de occidente de Honduras hacia Guatemala.

**Costo total de renta de vehículo \$ 687.00**

<sup>417</sup> Todos los gastos son en dólares US.

El día 20-03-2017 hospedaje en Esquipulas, Guatemala  
El día 21-03-2017, llegan a Ciudad de Guatemala y se hospedan en Hotel Ciudad Vieja, del 21 al 24 de marzo-2017

**Costo total en hospedaje** \$ **846.00**

Gastos durante el viaje en Combustible \$ **144.85**

Gastos de alimentación durante el viaje \$ **200.50**

Gastos de peaje \$ **7.78**

Gasto de Notario \$ **15.00**

Gastos de estacionamiento \$ **1.00**

**GASTO TOTAL DE VIAJE FAMILIA PACHECO** \$ **5,063.13**

(Con facturas de respaldo)

**Jimmy Pacheco gastos de boletos aéreos** \$ **1,169.84**

**COFADEH**

Gastos boletos aéreos (3 personas) \$ **1,800.00**

Gastos boletos terrestres (2 personas) \$ **300.00**

Gastos de hospedaje, alimentación y transporte \$ **4,000.00**

Y viáticos

Honorario Notario \$ **511.00**

Honorarios peritajes psicológicos \$ **2,650.00**

Movilización de testigos para toma declaraciones \$ **813.00**

**GASTO TOTAL COFADEH** \$ **10,074.00**

6. **Preguntas de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos**

1. La Honorable Corte Solicitó Información escrita sobre violencia política.

Los representantes haremos llegar a esta honorable Corte, vía paquetería un informe Elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Observatorio de la Conflictividad y Violencia Política; referente a la conflictividad y la violencia política en Honduras.

Y un monitoreo elaborado por esta representación, correspondiente a diferentes años, y que contiene seis columnas donde se consigna:

1. El Nombre
2. Tipo de crimen
3. Filiación de la víctima
4. circunstancia

*... exigiendo justicia.*

5. y fuente
6. fecha

2. Sobre si las Elecciones Primarias son Organizadas y si el Estado Ejerce Control.

El Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones primarias, según:

**ARTÍCULO 113.- PRÁCTICA DE ELECCIONES PRIMARIAS** Los Partidos Políticos están obligados a practicar elecciones primarias para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular, las que se llevarán a cabo el tercer domingo del mes de febrero del año electoral. Las elecciones primarias se realizarán bajo la dirección, control y supervisión del Tribunal Supremo Electoral con el apoyo de la Comisión Nacional Electoral del Partido Político respectivo. El Tribunal también distribuye el materia electoral como las papeletas y emite una declaración oficial sobre los candidatos electos.

**ARTÍCULO 114.- LISTADOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR**

El Tribunal Supremo Electoral entregará a los Partidos Políticos los listados de cargos de elección popular a elegir; a nivel nacional, departamental y municipal, ocho (8) meses antes de la celebración de las elecciones primarias, para que éstos los hagan del conocimiento de los movimientos internos. Los cargos de elección popular son:

1. Presidente y Vicepresidente de la República;
2. Diputados al Parlamento Centroamericano;
3. Diputados al Congreso Nacional; y,
4. Miembros de las Corporaciones Municipales.

**ARTÍCULO 115.- CONVOCATORIA A ELECCIONES PRIMARIAS**

El Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria a elecciones primarias seis (6) meses antes de la fecha de su realización.

**ARTÍCULO 116.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS**

Tendrán derecho a participar en las elecciones primarias, los movimientos internos que inscriban candidatos a la fórmula de Presidente y Vicepresidente de la República, nómina de candidatos a Diputados al Parlamento Centroamericano y nóminas de candidatos a Diputados al Congreso Nacional y de los Miembros de las Corporaciones Municipales, en más de la mitad de los departamentos y municipios del país.

Los movimientos internos deberán presentar un listado de ciudadanos, que respaldan su inscripción conteniendo: número de Tarjeta de Identidad, nombre s y apellidos, domicilio, firma o huella dactilar, en un número no menor al dos por ciento

(2.0%) del total de los votos válidos obtenidos por el Partido Político respectivo, en el nivel electivo de mayor votación, en la última elección general. Los listados deberán incluir el nombre del Partido Político y Movimiento Interno, así como el Departamento y Municipio donde vivan los ciudadanos que respaldan la inscripción.

## 7. PETITORIO

Con base en lo anteriormente expuesto, los representantes respetuosamente solicitamos a la Honorable Corte:

**PRIMERO:** Que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito y sus anexos, y los incorpore al expediente a los efectos correspondientes.

**SEGUNDO:** Que, de conformidad con los argumentos y pruebas que se han presentado en el transcurso de este proceso, concluya que el Estado de Honduras es responsable, en los siguientes términos:

1. Por la violación del **derecho a la vida** de Ángel Pacheco León, contemplado en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como por el incumplimiento estatal de las obligaciones procesales en relación con una efectiva garantía del derecho a la vida.
2. Por la violación del **derecho a la integridad personal**, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Ángel Pacheco León: su madre Andrea Pacheco López; su compañera de hogar Blanca Rosa Herrera; sus hermanos y hermanas: María Otilia Pacheco, Concepción Pacheco, José Pacheco, Francisco Pacheco, Santos Norma Pacheco, Marleny Posadas Pacheco, Blanca Nubia Pacheco, María Regina Pacheco, Elsa Jamileth Almendarez Pacheco, Jaqueline Lizeth Almendarez Pacheco y Jorge Alberto Almendarez Pacheco; sus hijos e hijas: Jimy Javier Pacheco Ortiz, Miguel Ángel Pacheco Devicente; Cinthia Mirella Pacheco Devicente, Tania Melissa Pacheco López, Juan Carlos Pacheco Euceda y Bianca Gisselle Pacheco Herrera.<sup>418</sup> Por el sufrimiento causado a raíz de su asesinato así como por el sufrimiento causado por la impunidad.
3. Por la violación de los **derechos a las garantías judiciales y la protección judicial**, previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, de los

<sup>418</sup> Identificación de víctimas, Pagina 3 y 4 del ESAP.18 de marzo de 2016.

familiares de Ángel Pacheco León , de su madre Andrea Pacheco López; su compañera de hogar Blanca Rosa Herrera; sus hermanos y hermanas: María Otilia Pacheco, Concepción Pacheco, José Pacheco, Francisco Pacheco, Santos Norma Pacheco, Marleny Posadas Pacheco, Blanca Nubia Pacheco, María Regina Pacheco, Elsa Jamileth Almendarez Pacheco, Jaqueline Lizeth Almendarez Pacheco y Jorge Alberto Almendarez Pacheco; sus hijos e hijas: Jimy Javier Pacheco Ortiz , Miguel Ángel Pacheco Devicente; Cinthia Mirella Pacheco Devicente, Tania Melissa Pacheco López, Juan Carlos Pacheco Euceda y Bianca Gisselle Pacheco Herrera.<sup>419</sup> por no haber realizado una investigación seria y efectiva tendiente a el procesamiento y sanción de todos los responsables de la violación del derecho a la vida de Ángel Pacheco León.

4. Por la violación de los **derechos políticos**, consagrados en el Artículo 23 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Ángel Pacheco León .

**TERCERO:** Que, como consecuencia de esta declaración, ordene al Estado de Honduras reparar las violaciones cometidas en los términos indicados en el presente escrito, así como en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.

**CUARTO:** Que, en virtud de la situación de riesgo en que ha enfrentado la familia Pacheco y que podría reactivarse a raíz de esta Audiencia, valore ordenar al Estado hondureño implementar, en forma inmediata, todas las medidas que sean necesarias para garantizar su vida, integridad y seguridad, en concertación con ellos.

**QUINTO:** Que, en atención a la situación antes mencionada, en su sentencia, ordene al Estado hondureño garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas involucradas en el impulso de las investigaciones por los hechos del presente caso.

## 8. ANEXOS

**Anexo A:** Ley Electoral vigente

**Anexo B:** Listado de Asesinatos por razones políticas

**Anexo C:** facturas de gastos efectuados con posterioridad al ESAP

<sup>419</sup> Identificación de víctimas, Pagina 3 y 4 del ESAP.18 de marzo de 2016.



Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de esta Honorable Corte, las representantes remitimos dos copias del presente escrito y sus anexos.

Sin más por el momento, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Atentamente,

**BERTHA OLIVA DE NATIVI**  
Coordinadora General



*... exigiendo justicia.*